

“SITUACIÓN DEL PERIODISMO EN COLOMBIA DURANTE LAS DOS ADMINISTRACIONES
DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VELÉZ”

LUZ ÁNGELA TOBÓN PACHECO

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE COMUNICADOR (A) SOCIAL Y
PERIODISTA

JORGE CARDONA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
COMUNICACIÓN SOCIAL

BOGOTÁ, 2010.

"La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia"

Artículo 23 del Reglamento

Bogotá, Junio 2010

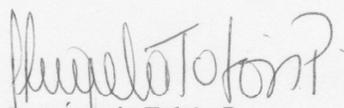
Señor:

JÜRGEN HORLBECK B.

Decano Académico, Facultad Comunicación y Lenguaje

Reciba un cordial saludo. La presente es para hacerle partícipe de la entrega de mi trabajo de grado para optar por el título de comunicador social y periodista, el cual lleva por título "Situación del periodismo en Colombia durante las dos administraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez".

Cordialmente,



Luz Ángela Tobón P.

C.c. 1.018.410.976 de Bogotá

Estudiante de Comunicación Social

Bogotá, Junio 2010

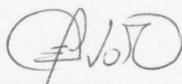
Señor:

JÜRGEN HORLBECK B.

Decano Académico, Facultad Comunicación y Lenguaje

Reciba un cordial saludo. La presente es para hacerle partícipe de la entrega del trabajo de grado de la estudiante Luz Ángela Tobón Pacheco quien lo presenta para optar por el título de comunicador social y periodista, y que esta revisado y aprobado por mí que me he desempeñado como su director durante todo el proceso. El trabajo lleva por título "Situación del periodismo en Colombia durante las dos administraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez".

Cordialmente,



Jorge Cardona

C.c. 31.828.55 de Bogotá

Director de Trabajo de Grado

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Comunicación y Lenguaje
Carrera de Comunicación Social - Coordinación de Trabajos de Grado

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO

- Único Formato aceptado por la Facultad -

Profesor Proyecto Profesional II: Daniel Valencia

Fecha: Mayo 21 de 2009 **Calificación:** 4.5

Asesor Propuesto: Jorge Cardona

Tel.: _____ **Fecha:** _____

Coordinación Trabajos de Grado: _____

Fecha inscripción del Proyecto: _____

I. DATOS GENERALES

Estudiante: Luz Ángela Tobón P y María Andrea Moreno

Campo Profesional: Periodismo

Fecha de Presentación del Proyecto: _____

Tipo de Trabajo:

Teórico: _____ **Sistematización de Experiencia:** X **Producción:** _____

Profesor de Proyecto Profesional II: Daniel Valencia

Asesor Propuesto: Jorge Cardona

Título Propuesto: (Provisional, corto, creativo, con subtítulo explicativo)

“Situación del periodismo en Colombia durante el las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez”

Periodistas defensores y contradictores.

PRESENTACIÓN

Este proyecto se basa en una investigación acerca de los acontecimientos que han transcurrido en el país durante las dos administraciones del Presidente Álvaro Uribe Vélez con relación a la situación del oficio del periodismo; la idea es identificar los principales obstáculos que se han presentado para que se pueda ejercer el libre ejercicio del periodismo. Asimismo, el proyecto se propone analizar la autocensura y censura, la cual se ha incrementado desde el año 2002 hasta hoy en día.

Por otra parte, las empresas relacionadas con el oficio de la comunicación han influido notoriamente en el desenvolvimiento del periodismo en Colombia, por ello es importante involucrarlas en la investigación, además en la gran mayoría de ocasiones estas se sesgan y toman posiciones con respecto al gobierno. Justo en este punto encontramos una división de posiciones en los profesionales del periodismo porque así como hay algunos que han apoyado firmemente al Presidente Uribe, hay quienes son de izquierda y definitivamente adquieren concepciones de oposición.

Finalmente, las entrevistas serán la herramienta para determinar aquellas posturas que defienden o hunden el mandato del actual Presidente, teniendo en cuenta que actualmente hay tanto defensores como detractores; se mostraran las dos posturas para encontrar un paralelo y mostrar la situación tal y como se está presentando en el país.

ESTADO DEL ARTE

Riaño Pinzón, A. (2002), *Periodistas, víctimas o victimarios en un país en conflicto*. {Trabajo de grado}, {microfichas}, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencia política.

Esta tesis reúne la relación del periodismo con el conflicto, los deberes y derechos de los periodistas; califica a los periodistas como formadores de opinión y a los medios de comunicación como entes positivos por ayudar a resolver los conflictos del país y evitar su propagación.

Por otra parte menciona el caso de Claudia Gurisatti quien tuvo que abandonar el país por amenazas contra su vida en el año 2001 debido a la entrevista que le realizó a Carlos Castaño quien afirmaba que iba a secuestrar al alto comisionado para la paz Camilo Gómez. Así mismo la hipótesis que se plantea apunta a la falta de responsabilidad de los periodistas y a su labor durante los años 2001 y 2002.

Como metodología se llevo a cabo un monitoreo de noticias acerca del proceso de paz y una comparación de estadísticas de diferentes fuentes con respecto a la violación de derechos humanos. Los resultados fueron: una visión de la sociedad acerca de la labor periodística, un panorama de la violación a los derechos humanos de los profesionales de la información que cubren el tema, un análisis de la relación entre periodismo y conflicto y por último se ofrece una reflexión sobre la misión del periodista Colombiano. Las conclusiones fueron acerca de la misión periodística en un país como Colombia, la labor de los periodistas como formadores de opinión y que en algunas ocasiones la ley está por encima de la ética profesional.

Muños López, L. (2005), *Las políticas públicas del Estado Colombiano en materia de derechos humanos frente a las del comunicador social y periodista*. {Trabajo de grado}, {microfichas}, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencia política.

En este trabajo de grado encontramos la labor del periodismo político, ilustrada con casos puntuales de países como Cuba, Venezuela y Colombia donde las violaciones a la libertad de prensa son numerosas. Se tomó como referencia al gobierno de Andrés Pastrana y el primero de Álvaro Uribe Vélez 2002 – 2006, para mostrar la manera como se divulgan las políticas y acciones del Estado en Colombia al igual que la postura de la prensa frente a casos políticos.

Allí se menciona el programa de protección a periodistas, comité de reglamentación y evaluación de riesgos CREER, fundaciones como Medios para la paz, ANDIARIOS, ASOMEDIOS y la FLIP.

Se mencionan los puntos que establece el código internacional para el ejercicio del periodismo al igual que estadísticas de la FLIP las cuales muestran las muertes en el ejercicio de la actividad periodística, los homicidios a causa de la misma, la carencia de herramientas para trabajar, violaciones al ejercicio del periodismo en los años 2002 y 2003, amenazas, secuestros encarcelamientos, detenciones y se especifica en casos colombianos. Como conclusiones se muestra que hay un alto índice de violaciones a los derechos humanos y a la libertad de prensa, poca atención por parte de la autoridad; pues el estado está obligado a protegerlos y no lo hace; periodistas como víctimas, los programas de protección como algo curativo más que preventivo, medidas materiales y causas estructurales.

Hamad Muños, Z. (1999), *La muerte ronda al periodismo. 21 años de crímenes en Colombia.* {Trabajo de grado}, {microfichas}, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación social.

En esta tesis se tocan los temas de impunidad y narcotráfico mostrando ejemplos puntuales de periodistas asesinados por diferentes motivos; abarcando el periodo de 1977 a 1998. Por su parte se enfoca en divulgar como informar bien sin poner la vida en juego, muestra un 80% de impunidad en los casos ocurridos en este periodo, una inexistencia de la información que se refiere a casos impunes. También puntualiza en una ineficacia del Estado y en unas soluciones para que dichos casos no pasen al olvido. Como anexos tiene varias tablas que contienen nombres, fechas de homicidios, posibles asesinos. Como metodología se llevo a cabo un proceso de documentación y recopilación de testimonio, entrevistas a periodistas, revisión bibliográfica y de documentales.

Rodríguez Mojica, T. y Angarita Meneses, P. (2005), *El oficio de los periodistas, una mirada al pasado.* {Trabajo de grado}, {CD-ROM}, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de comunicación social.

Se toma como referencia la historia del periodismo de dos décadas las del 50 y 60 y entrevistas y testimonios de personajes como Alberto Zalamea, Gloria Pachón, Rogelio Echavarría.

Después de hacer un largo recorrido por los hechos históricos que marcaron al país como la censura de prensa, el cierre del congreso, los incendios del 6 de septiembre en el periódico El Tiempo, en el Espectador, y las viviendas de los políticos; las autoras llegan a la conclusión de que hay más medios técnicos que facilitan las comunicaciones y se mejora la divulgación de información.

Viera, L. (2006), *Los crímenes de la omisión y el olvido. Los medios frente a la desaparición forzada*. {Trabajo de grado}, {CD-ROM}, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de comunicación social.

Como metodología se delimitó la problemática, se indagó sobre las razones por las que los medios de comunicación omiten deberes en cuanto a la desaparición forzada. Se tocan temas como violación a los derechos humanos, acciones perpetradas por los grupos armados, falta de preparación de periodistas sobre las normas, un sesgo político que se califica igual a la autocensura y un desinterés por la cobertura de los casos; se tienen en cuenta fuentes oficiales prioritariamente de periodistas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La actual situación del periodismo en Colombia, se basa en una subvaloración que este ha adquirido progresivamente debido a los grandes riesgos y amenazas a los que se han visto sometidas las personas que hacen parte de este grupo de la sociedad. El papel del periodista, consiste en informar a una ciudadanía acerca de sucesos y acontecimientos que día tras día se presentan en cualquier ciudad, manifestándose de manera objetiva y formal; sin embargo existen quienes no entienden esta labor y optan por tomar represalias en contra de dichas personas, represalias agresivas que solo conllevan a sembrar un miedo y desconfianza logrando una especie de represión a la hora de comunicar.

La situación laboral de los periodistas en Colombia se ve afectada por la guerra; en ciudades intermedias y provincias el periodista complementa su trabajo productivo con actividades relacionadas generalmente con los políticos de las regiones creando así un vínculo extra laboral solo con el fin de mejorar sus ingresos. Estos vínculos en tiempos de conflicto se vuelven peligrosos, ya que quienes querían permanecer en la región tenían que hacer acuerdos con los grupos armados que tenían el poder local.

He ahí donde empieza a establecerse la autocensura, es tan grave el problema de violencia en Colombia que los periodistas han optado por quedarse callados y omitir determinada información antes de arriesgar sus vidas por contar datos importantes en cualquier investigación. Hay casos donde el periodista se ha arriesgado a informar la situación real ejerciendo un periodismo investigativo independiente poniendo en riesgo su vida.

Ahora bien, esta problemática no solo se presenta en Colombia; a pesar de ser unos de los países con mayor autocensura no es el único, existen varios lugares en donde los periodistas también han adoptado la censura como un modo de trabajo para salvar y proteger su vida y del país en general. Con respecto al fenómeno de la opinión pública, esta se presenta como un factor de legitimación política y se convierte en un aspecto muy importante en el régimen político que estableció el liberalismo, el problema es que se convierte en una especie de régimen de opinión, lo que se traduce en un sistema de gobierno que de alguna manera adquiere legitimación gracias a la opinión pública, la cual es tanto un criterio como una referencia; de esta manera la opinión pública es un elemento indispensable en la teoría política liberal.

De modo que, el problema de la censura se convierte en el centro de las relaciones de poder y medios de comunicación. Las relaciones entre prensa y poder son estrechas en todos los aspectos y deben conservar un modelo de intercambio auténtico ya que la figura del Presidente en cualquier ámbito se presenta como un predominante. La función de los periodistas y de los medios de comunicación se basa en dar una información veraz acerca de las acciones gubernamentales que se llevan a cabo; es en este momento donde los medios de comunicación como empresas se pliegan hacia un lado de la balanza. Si están de lado de gobierno omiten las críticas o por el contrario se sesgan hacia la oposición aferrándose al periodismo investigativo para encontrar las irregularidades en los manejos del Estado.

No obstante, la complicación radica en que en Colombia durante el mandato del actual Presidente, Álvaro Uribe Vélez, se han presentado varios casos de amenazas, asesinatos, secuestros, entre otras modalidades de violencia, contra periodistas por involucrarse en asuntos que en un primer momento le competen a la ciudadanía pero que luego los directamente implicados no quieren o no aceptan una divulgación de ningún tipo. Un aspecto que alimenta la problemática es que las condiciones laborales de los periodistas en Colombia no son las mejores y es debido a aspectos como una recesión económica, corrupción, malos manejos administrativos, globalización, entre otras cosas importantes; es decir que la situación de los periodistas esta directamente afectada por la guerra. Entonces la relación prensa y poder, a pesar de que debe ser positiva, no se presenta con esa connotación pues el apoyo gubernamental no es el mejor ni el más adecuado, no aporta en gran medida para el surgimiento de la profesión ya mencionada.

En algunas ocasiones los periodistas omiten la autocensura, y se enfrentan al problema de las amenazas y chantajes, esto se debe a que cuentan con un apoyo de determinadas empresas que en su mayoría son privadas, las cuales frente a cualquier eventualidad, tomaran como determinación brindar protección y asilo en otro país mientras el peligro pasa. Es importante aclarar que esta situación ocurre únicamente cuando los periodistas están vinculados a una empresa con apoyo económico que los respalda en compensación a su trabajo.

¿Cómo han sido las relaciones poder – prensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo ha reaccionado el gremio periodístico colombiano y las empresas de la información? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno y los medios gobiernistas a los medios opositores?

JUSTIFICACIÓN

La carta magna de Colombia estipula en el artículo 1 que: “Colombia *es* un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Además en el artículo 20 dice: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

De acuerdo a lo expuesto la sociedad colombiana espera que esto ocurra, pero la situación es diferente desde hace varios años porque la libertad de expresión está limitada al contexto que se presente, de este modo se deja al descubierto una contradicción entre los hechos y los planteamientos de la constitución. Es por esta situación que el tema amerita una investigación que lo delimite poniéndolo en evidencia para encontrar una solución, darlo a conocer a la ciudadanía y mejorarles el panorama a los periodistas. A pesar, de que los crímenes y secuestros han disminuido en el periodo presidencial actual, 2002-2006, 2006-2010, las amenazas, la censura y la autocensura han aumentado notablemente, dejando así en evidencia la violación de lo que se plantea en la Constitución Nacional en los artículos 1 y 20.

A su vez, el problema a la Comunicación Social aporta una serie de aspectos, por ello de no ser solucionado la profesión se verá relegada frente a otras en un futuro. Según el paradigma de Laswell, hay una delimitación de componentes, un problema de la comunicación en los efectos, además se extienden las relaciones cara a cara a un término colectivo; Laswell define el mensaje y el receptor como entidades separadas e independientes. Ahora bien, según la teoría de los efectos cada persona decide que quiere y que no quiere con base en una información que se otorga por medio de un mensaje, es decir cada quien recibe el mensaje y lo complementa según su gusto; la teoría de los efectos concibe al público como una audiencia, la recepción de los mensajes es individual, rompe con la perspectiva vertical de emisor-mensaje- receptor para adoptar unas audiencias. Cada reacción suscita un contenido. El conductismo se dedica a anticipar la conducta del ser humano mediante estímulos que se reconocen como refuerzos negativos y positivos.

Del mismo modo hay una serie de teorías para el periodismo que complementan la investigación, como la teoría de Agenda Setting la cual habla acerca de la mediación simbólica y los efectos de la realidad operados por los medios de comunicación. Gatekeeping es el proceso mediante el cual las ideas y la información se filtran para su publicación, permitiendo advertir que la influencia del medio no radica en la capacidad de convicción sino en su influencia real, es el proceso interior de toma de decisiones, de transmisión de información o retención de los medios de comunicación para las audiencias.

Con respecto a la pertinencia social, el aporte al gremio periodístico y a la sociedad en general, la situación se enfoca en un beneficio general puesto que en la medida en que los periodistas obtengan unas buenas condiciones laborales, la sociedad obtendrá mayor información que le conviene directamente. Los periodistas son los directamente afectados con la situación de violencia y censura que se está presentando en la periferia colombiana en mayor cantidad que en las grandes ciudades, por ello el aporte para este gremio es sustancial de manera que es su situación la que se estudiara a fondo.

El problema le afecta a la sociedad colombiana porque las relaciones entre la prensa y el poder son tensas, los medios toman partido de las situaciones y condicionan a las audiencias de acuerdo a sus posiciones políticas dejando así a la opinión pública en un limbo y en medio de una constante discusión de creencias políticas y verdades a medias que la sociedad quiere conocer.

MARCO TEÓRICO

Históricamente, desde la edad moderna la opinión pública ha venido introduciéndose en las relaciones de poder; esto se ve reflejado en *El Príncipe* de Maquiavelo en donde encontramos elementos de una ciencia de la opinión y de relaciones publicas que se deben tener en cuenta a la hora de gobernar. Maquiavelo plantea que quien llega al principado se encuentra solo y no ve a su alrededor a nadie y que no se desenvuelve en una teoría democrática sino en una teoría de la persuasión para tener una opinión popular a la disposición del gobernante.

“Ninguna cosa hace estimar tanto a un príncipe como las grandes empresas y hacer por si mismo raras hazañas”¹

Está claro que la opinión es subvalorada, sin embargo es útil para todo gobernante que quiera mantenerse en el poder; Maquiavelo muestra el valor político de la opinión incluso en el ámbito del poder que trasciende a las instancias del renacimiento en donde el énfasis en el individuo y su razón ayudan a consolidar el fenómeno de la opinión individual primero en el ámbito religioso y posteriormente en el político y en el intelectual

En el siglo XVIII de la mano de la ilustración y de la revolución industrial, por la que estaba pasando el continente Europeo, se desarrolló la crítica a la razón de Rousseau por medio del *Contrato social* en donde la soberanía de un pueblo se enfrentaba con el problema de una democracia de masas. Crítica que termina con la aparición de David Hume quien “aporta un penetrante análisis lógico que de ser aceptado, destruía todas las pretensiones de validez científica del derecho natural”²

Así mismo Edmund Burke ayudo a la demolición del sistema racional natural del liberalismo clásico, mientras tanto Hegel llevo a ponerle fin a la armonía porque sus supuestos estaban lejos de los que la ilustración había popularizado anteriormente por esa razón Hegel sabia que la armonía no era algo racional; la razón está relacionada con el método dialectico, la razón capta la identidad de los opuestos al reunir todos los hechos en un único proceso.

¹ Muñoz A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.l., Eudema. p. 29

² Muñoz A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.l., Eudema. p. 57

“Hegel salva al concepto de opinión pública, por el procedimiento de sacarla del ámbito de la discusión situándola en el fondo de la conciencia colectiva... entiende que la opinión pública merece ser a la vez estimada y despreciada... en la opinión pública todo es falso y verdadero pero encontrar en ella lo verdadero es tarea que solo puede cumplir un gran hombre”³

Por otra parte el liberalismo inglés fue una teoría que apuntaba al bienestar general de toda la comunidad nacional, este se pone en condiciones de responder a nuevos retos; su representante John Stuart Mill advierte que hay un límite en la intervención de la opinión colectiva debido a una independencia individual. Por su parte Mill defiende la libertad de expresión y discusión y plantea que cualquiera puede expresar públicamente sus ideas como derecho individual.

“La libertad no es solo un bien individual, sino también un bien social. Silenciar una opinión por la fuerza hace violencia a la persona que la sostiene y priva a la sociedad de la ventaja que habría podido obtener de una libre investigación y crítica de esa opinión”⁴. Dentro de los descubrimientos que hizo Mill se encuentran identificados la realización de la libertad como un problema de organización política y que detrás de un gobierno liberal tiene que haber una sociedad liberal.

Con el término de opinión pública se quiere mostrar un producto de la Ilustración, ya que esta se presenta con un papel fundamental en el nuevo orden político, el cual está basado en un poder limitado y dividido. La opinión pública se puede calificar como un fenómeno que conlleva a diferentes comportamientos colectivos.

Por su parte, todo lo referente a la opinión pública es posible gracias a transformaciones que se dieron en diferentes ámbitos durante la primera etapa de la Edad Media; pero la opinión individual también tiene una consolidación y es justo durante el paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo moderno. De esta manera se da origen a la reforma la cual viene con varias transformaciones mentales entonces se plantea un pluralismo de hecho. “Los cambios psicológicos e ideológicos que se concretan en el libre examen, el pluralismo, la tolerancia, se convierten en formidables instrumentos de cambio

³ Muñoz A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.l., Eudema. p. 59

⁴ Muñoz A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.l., Eudema. p. 64

social gracias a la revolución comunicativa que impone la aparición de la imprenta”⁵, entonces el Renacimiento se multiplica y puede difundirse por mucho lugares donde aun no lo había hecho. Por su parte, el libro impreso se convierte en un artefacto individual que ayuda a promover opiniones y concepciones propias de cada quien, esto luego de que se deja a un lado la cultura del oído y se reflexiona más acerca de la historia occidental moderna. Aparece la Burguesía que era la fiel consumidora de los libros y representaba un papel importante en el ámbito económico; por lo anterior es que se menciona siempre que la Burguesía es alfabetizada, es decir que cuenta con un nivel intelectual muy alto, es en esta clase donde aparece la primera opinión pública en los dos países que contaban con mas intelectualización de Europa, esos países eran Holanda e Inglaterra. Sin embargo, la censura se hace presente.

Ahora bien, en el libro de Alejandro Muñoz, *Opinión Pública y Comunicación Política*, se plantea a la prensa como un catalizador de la opinión pública y explica cómo sin la prensa no se hubiera desarrollado nunca la opinión pública, unida por supuesto a un sistema de partidos. A su vez, la opinión pública se presenta como un factor de legitimación política y se convierte en la característica más importante del régimen político que estableció el liberalismo, pero se convierte en un régimen de opinión lo que quiere decir que se crea un sistema de gobierno que se legitima “por la opinión pública y que tiene a la opinión pública como criterio y punto de referencia permanente”⁶; por ende la opinión pública se convierte en un elemento fundamental de la teoría política liberal .

Las opiniones se constituían dentro de las instituciones de poder que existían “en la medida en que el público vea frustrada la realización de sus aspiraciones, sus miembros pueden rebasar la crítica de un sistema determinado y discutir las propias legitimaciones de la autoridad legal”⁷. El concepto de la opinión pública está estrechamente relacionado con el de soberanía, por ello se desarrolla el también concepto opinión nacional la cual afectará directamente al llamado cuerpo legislativo; este cuerpo representa una especie de soberanía inmediata y por eso se califica como ilimitado e ilimitable.

⁵ Muñoz A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.l., Eudema. p. 30

⁶ Muñoz A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.l., Eudema. p. 42

⁷ Muñoz A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.l., Eudema. p. 53

La censura es la principal institución donde se centran las relaciones entre poder y medios de comunicación o información, en el mundo occidental. Luego con el liberalismo es que se logra la idea de poder limitado y de los derechos individuales, entonces es posible la libertad de expresión y por eso surge de una u otra manera una prensa libre e independiente “que por sus funciones informativas y críticas asume una indudable dimensión política”⁸. A pesar, de los sistemas liberales democráticos en algunos países occidentales, las relaciones entre prensa y poder continúan siendo complicadas, pues la tensión y la desconfianza siguen siendo protagonistas.

Es importante recordar que durante todo el siglo XVIII los esfuerzos del poder eran constantes para impedir la libre información y lo hacían por medio de presiones fiscales, por la compra de periodistas y por el establecimiento de restricciones sobre la base del llamado *privilegio parlamentario*. Esto sin mencionar el prejuicio constante que muestran la mayoría de políticos hacia los informadores. Pero la situación de desconfianza y prevención procede del hecho de ver la información como un poder y de que esta pertenece a un régimen pluralista de libertades.

Para hablar de otros filósofos como Montesquieu, se debe decir que para el poder tiende por si solo al abuso; él elaboró la teoría de la división de los poderes, la cual continúa siendo el fundamento de la vida política en las democracias occidentales. Entonces, para entender más ampliamente a Montesquieu es necesario concebir el sistema integrado por los tres poderes clásicos y también por todo núcleo que influya en la sociedad. Los poderes que existen son económicos, culturales, comunicativos, informativos y religiosos; sin embargo el poder que se considera como intermedio es el de la nobleza. En el sistema de Montesquieu existen tanto elementos modernos como antiguos, los cuales le impidieron hacer caso a su intuición.

“División de poderes y poderes intermedios son, de este modo, dos enfoques doctrinales que convergen en un mismo punto o, lo que es lo mismo, están animadas por un mismo propósito: se trata de limitar el poder como única garantía de impedir sus abusos, esto es, como único mecanismo eficaz para que el poder político respete la libertad y no se convierta en opresor”⁹

⁸Muñoz A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.l., Eudema. p. 321

⁹ Muñoz A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.l., Eudema. p. 325

El problema de la desconfianza entre medios y poder parte de los permanentes intereses entre gobierno y medios; el modelo que representa esto se denominó Watchdog, del perro guardián, ya que se presume que la acción de los medios de comunicación es de vigilancia hacia las acciones gubernamentales. El autor norteamericano Arthur Ranney señaló que este modelo se originó en la época progresista de los Estados Unidos, la cual se extendió desde 1890 hasta 1920; entonces empiezan a surgir periodistas que ponen en evidencia errores y engaños de políticos y empresarios, ya que ellos pretendían engañar al público comprando elecciones y corrompiendo funcionarios, por eso la prensa debía actuar de manera tal que las personas se enteraran de dichos acontecimientos. Ranney, expone que ese espíritu permanece en los periodistas de hoy que se ven a sí mismos como reformadores.

Sin embargo, existen quienes dicen que han perdido vigilancia y denuncia. Según Mark Hertsgaard, los periodistas se han estancando en un estilo informativo *blando y pasivo*, sobre todo en el periodismo televisivo. Por su parte, en España el papel de la prensa también tenía una mentalidad que apuntaba a ser opositor del gobierno.

El papel adversario de la prensa poco a poco se ha ido suavizando porque según algunos especialistas como Blumler y Gurevitch, la producción de mensajes políticos es una manera de crear empresas en la que participarían políticos y periodistas, ahí se evidencia la necesidad de cooperación entre el poder y los medios, lo cual sería imposible si se contemplan como adversarios. Entonces, la prensa y poder deben entenderse y eso corresponde al modelo del intercambio que pretende mantener relaciones, presentándose el presidente como alguien predominante. Blumler y Gurevitch creen que entre el poder y los medios hay una cultura compartida la cual se ha constituido por usos y normas cuya función es regular la relación y normalizar los casos de conflicto, lo que incluye dar un tratamiento igual o proporcional a cada una de las partes. Así, también está la regla *equal time* que trata de asignar espacios iguales a los diversos candidatos durante una campaña electoral tanto en las emisoras radiales como en los canales de televisión.

La cultura compartida, exige criterios de objetividad, y usos como el respeto a los embargos de informaciones, el anonimato de las fuentes, objeto del llamado secreto profesional de los periodistas o las prácticas del *off the record*. Tanto periodistas como políticos tienen intereses y concepciones distintas porque mientras los primeros están buscando atraer audiencias, los segundos intentan persuadir a esas mismas audiencias para que adopten diferentes puntos de vista sobre sus campañas; por ello existen varios conflictos. Uno de los modelos que se han creado para establecer relaciones

entre poder político y medios es el de L. John Martin, el cual involucra al público como un elemento primordial para entender la relación. Esto debido a que el gobierno y los medios están unidos al público interactuando constantemente, cada uno actúa sobre los otros y a su vez depende de ellos.

Con respecto a la comunicación política, la forma de producción de la misma varía según cada país y las pautas de comunicación de cada país están en función de su historia y del sistema político existente. En el régimen franquista por ejemplo, se paso de una etapa de inexistencia de la comunicación política a un lento establecimiento de la misma. Desde 1962 gracias a la llegada de Fraga al Ministerio de Información y Turismo, se empiezan a organizar conferencias de prensa. Ahora bien, con la llegada de la democracia la comunicación política mejoro notablemente pues se generalizan las ruedas de prensa, los programas de radio y televisión tienen participación del público quien hace preguntas a los políticos.

Por su parte, la relación de la prensa con el poder siempre ha sido complicada y tensa, ya que todos los gobiernos han querido manejarla a su antojo y cuando no les conviene lo que están hablando y se muestra en contra de las formas de gobierno la censuran. Esta situación se percibe desde la constitución de 1886, que fue redactada por Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, donde quedo definido el artículo 42 y el artículo transitorio K. este ultimo determino delitos contra la sociedad y contra los particulares.

“Las publicaciones que incurrieran en faltas eran obligas a la rectificación y de no obedecer, se suspendían”¹⁰ Este articulo K le dio facultades especiales al gobierno, expidiendo así el decreto 635 de 1886 “estableció los juicios de imprenta y la responsabilidad del director o impresor sobre todo lo que se imprimiera”¹¹

Fidel Cano fue quien escribió en el primer editorial del *Espectador* denuncias sobre el decreto 635, ya que para Cano este era una labor en contra del pensamiento crítico y fue él quien hablo claro sobre las

¹⁰ Vallejo, M. (2006), *A plomo herido. una crónica del periodismo en Colombia*, s.l., Planeta. p. 288

¹¹ Vallejo, M. (2006), *A plomo herido. una crónica del periodismo en Colombia*, s.l., Planeta. p. 289

persecuciones y los encarcelamientos de los periodistas. Pero esta no fue la única ley que se expidió en términos de censura, en 1888 se crea la ley 61 que Fidel Cano bautizo como *LA LEY DE LOS CABALLOS*. “Bajo la cual se suspendieron, y multaron periódicos, cerraron o destruyeron imprentas... con ella se negó toda oposición o crítica al gobierno y se censuraron sistemáticamente las publicaciones contrarias a la regeneración”¹²

En Colombia si el gobierno era conservador se perseguía a la prensa liberal o viceversa, la persecución a los diarios liberales tuvo momentos delirantes a tal punto que hubo destierro de periodista como es el caso de Alfredo Greñas quien termino exiliado en Costa Rica. Pero esta no era la única manera de callar a los opositores y a los críticos del gobierno, ya que imponían multas muy altas que en muchas oportunidades quebraban al periódico y los llevaban al cierre definitivo. La iglesia era otro gran opositor de la prensa liberal, puesto que la consideraba libertina y de tendencias modernistas anticlericales. Entre los periódicos censurados de la época están *el Eco Nacional* por criticar el tratado del canal de Panamá, *Sur América* critico los malos manejos administrativos del gobierno y *El Comercio* y *El mercurio* que en un principio fueron simpatizantes del gobierno, tiempo después lanzaban críticos comentarios sobre él.

En esta época de temerosas censuras a los directores de los periódicos les tocaba ser muy avilés e ingeniosos para poder disfrazar sus líneas con lemas de progreso industrial, y respeto a la palabra para despistar a los vigilantes, aunque en muchos casos eran periódicos efímeros porque pronto eran descubiertos por la censura.

“La publicación, de carácter más literario y cultural que político, se refiere a las diferencias ideológicas con el gobierno y su crítica viene envuelta en el lenguaje diplomático, sin alusiones a la censura”¹³

Fue en 1916 cuando llego la censura eclesiástica con toda su fuerza, a tal punto que la conferencia episcopal declaro que los ciudadanos tenían prohibido bajo pecado mortal leer los periódicos *La Patria*

¹² Vallejo, M. (2006), *A plomo herido. una crónica del periodismo en Colombia*, s.l., Planeta. p. 289

¹³ Vallejo, M. (2006), *A plomo herido. una crónica del periodismo en Colombia*, s.l., Planeta. p. 294

y *El Espectador*. Los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla veían a la prensa liberal como su peor enemigo. “Hacia 1927 y por mandato de la cúpula eclesiástica, los párrocos obligaron a todos los feligreses a suscribirse al periódico *El Debate* bajo amenaza de negar el bautizo a quienes no pagaran la anualidad pedida, equivalente a 10 pesos”¹⁴

El 30 de octubre de 1928 en el gobierno de Miguel Abadía Méndez se aprobó la ley 69 conocida como la *ley heroica* o la *ley anticomunista* de la cual fueron víctimas tanto periodistas liberales como conservadores. Esta ley concedió facultades especiales a ejecutivo y a los militares para controlar el orden público, censurar la prensa y prohibir las reuniones públicas. En esta ley todo el que quiera expresar sus opiniones tenía que prestar una fianza, en Colombia se podían ejercer todas las profesiones menos el periodismo.

La situación laboral de los periodistas en Colombia, abarca varios aspectos importantes; por ejemplo que el promedio de edad es de 35 años. La gran mayoría de los periodistas colombianos cuentan con un título profesional y en promedio el 20% de los mismos tienen alguna maestría o especialización; el problema radica en que varios periodistas recién graduados tienen bajo su responsabilidad actividades importantes y peligrosas desde editar textos periodísticos hasta cubrir procesos de paz o conflicto armado. De esta manera, vemos que el ejercicio de la libertad de información está a cargo de personas jóvenes que en la mayoría de las ocasiones no cuentan con el conocimiento y la experiencia suficiente para cubrir investigaciones.

En Colombia se ha planteado que los periodistas no deben tener especializaciones en temas específicos como justicia, política, economía; sino en instituciones y fuentes de información como el Ejército Nacional, Corte Constitucional, etc. Este fenómeno está enfocado en el problema del deber ser de los periodistas colombianos, porque tiene valores que apuntan a que cualquier hecho debe alimentar las agendas públicas en temas como la reportería, el arte de escribir y la edición periodística. Por otro lado, en Colombia parece que existiera una edad establecida para ser reportero, una edad que encierra capacidades físicas, mentales, destreza, entre otras; por ello en muchas ocasiones la remuneración que los medios de comunicación ofrecen se basa en la edad de aquellos que ocupan los puestos de las salas

¹⁴ Vallejo, M. (2006), *A plomo herido. una crónica del periodismo en Colombia*, s.l., Planeta. p. 307

de redacción. Entonces, las personas tarde o temprano se ven obligadas a dejar dicho trabajo porque a medida que pasan los años se ven peor pagos; es por eso que muy pocos periodistas terminan su vida siéndolo, lo cual refleja los términos de desarrollo humano que tenemos en este país.

Con respecto a la edad tenemos que la población más joven de periodistas se encuentra en Bogotá y en Ibagué con un promedio de 32 años. Sin embargo, en las tres ciudades más grandes de Colombia; Bogotá, Medellín y Cali el promedio de edad es muy joven. De igual forma, vemos que se trata de un trabajo más masculino que femenino; las mujeres tienen una vinculación más o menos significativa solo en Bogotá (39%), en otras partes del país la participación masculina alcanza hasta el 90%. Actualmente el 84% de los periodistas del país son profesionales, el 64% de ellos son graduados de una facultad de Comunicación y el 14% de los mismos tiene otra carrera diferente, solo el 10% tiene una especialización.

Para hablar ahora de la relación del periodismo con la academia, hay por decir que la gran mayoría de las facultades de comunicación social del país no ofrecen énfasis en las diferentes modalidades de la comunicación o el periodismo; por ello los estudiantes solo se limitan a cursar muchas materias comunes que no contribuyen a la formación de la especialización que ellos quieren. Por eso, se propone que las facultades otorguen únicamente un contexto que sirva para estudiar el periodismo en una Maestría. A pesar de todas las deficiencias mencionadas, cabe resaltar que en Colombia el 50% de los reporteros cuenta con experiencia de más de diez años.

Con respecto a las condiciones laborales de los periodistas, tenemos que son precarias y es debido a varios aspectos como la recesión económica, la corrupción, los malos manejos administrativos, la globalización y la caída de la Ley 51 de 1975 que se denominaba Ley de prensa que planteaba el manejo de la tarjeta profesional. Otra cifra que se refleja en Colombia tiene que ver con las horas extras de trabajo porque al 87% de los periodistas no les pagan horas extras y deben trabajarlas constantemente. Pero al hacer un estudio para determinar esta situación se vio que casi ningún medio de los que se incluyó en el estudio conserva un registro donde se especifiquen las horas extras que deben trabajar los periodistas, en muchas ocasiones ni siquiera los mismos reporteros saben que ese trabajo debe ser remunerado. Como modalidades informales de contratación de periodistas están el arrendamiento de cupos publicitarios, la vinculación mediante contratos de prestación de servicios que no cobijan garantías laborales.

Ahora bien, teniendo en cuenta este estudio son pocos los periodistas en Colombia que pueden tener casa propia, que pueden tener una medicina prepagada y que pueden transportarse en carro propio.

Para relacionar las condiciones laborales y la libertad de prensa en Colombia se llevó a cabo una encuesta a varios periodistas de diferentes medios de comunicación y esta arrojó que en general los periodistas tienen un contrato laboral, pero los que trabajan en prensa no lo que están en radio o en televisión, el 10 y 20% de ellos dependen de la pauta publicitaria que consigan. El 67% combinan el periodismo con otras actividades que aumenten sus ingresos. Por otra parte, la calidad de vida de los periodistas también se ve seriamente afectada porque en muchas ocasiones por la falta de tiempo redactan las noticias de manera rápida y acelerada y no tiene el tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que están haciendo, lo cual los somete a las críticas de superiores y de la misma audiencia.

Por último, se plantea la necesidad de dialogar entre periodistas, pues no se escuchan a ellos mismos y de ahí es de donde provienen las necesidades. “Los periodistas deben hacerle entender a sus medios que su seguridad es fundamental; que el tener un sonidista es importante, no porque el sonidista pueda hacer más o menos sino porque también es una persona que puede ayudar para la protección”¹⁵

Para Alberto Saldarriaga, vicepresidente del Círculo de periodistas de Bogotá CPB, el verdadero reto del periodismo en Colombia es la profesionalización de la profesión. En noviembre de 1975 se aprobó la ley 51 donde se profesionalizó el periodismo y lo puso al nivel de las profesiones liberales, abogados, médicos e ingenieros. En ese año se reconoció al periodismo como una profesión, ya que anteriormente como en este momento se consideraba un arte o un oficio.

“Existe el arte u oficio de escritor, de artista. Pero también tenemos a los carpinteros, taxistas, maestros de obra, empleadas domesticas, cuyas labores, muy dignas por cierto, son oficios, más no profesiones. Y en esa circunstancias estamos los periodistas hoy en día”¹⁶

La corte constitucional después de 30 años tumbo la ley 51 del 75 y los periodistas perdimos la condición de profesionales. En Colombia los encargados de informar eran periodistas empíricos ya que

¹⁵ Fundación Konrad Adenauer. (edit.), (2003), *La situación laboral de los periodistas en Colombia*. p. 37

¹⁶ Fundación Konrad Adenauer. (edit.), (2003), *La situación laboral de los periodistas en Colombia*. p. 40

no eran egresados de una facultad de periodismo sino que la gran mayoría eran abogados, políticos entre otros, quienes se encargaron de desprestigiar la tarjeta profesional del periodista hasta que la corte les dio cristiana sepultura.

Hoy en día las condiciones de los periodistas son peores que en los años ochentas, dado que son como el maestro que hace la casa, la empleada domestica, el pintor o el escritor. Es por eso que su trabajo es mal remunerado solo se ganan menos de un millón y medio de pesos. Pero este escudo no es lo único que impulsa a los medios a pagarle mal a los periodistas, también está de por medio la preparación mediocre a la que están siendo sometidos los periodistas.

Los medios “se sienten con el derecho de pagar a medias, pues si no hay excelencia en los resultados, no puede haber exigencia en las condiciones... la formación periodística tiene que ser excelente”¹⁷ Saldarriaga resalta que el verdadero reto es la profesionalización del periodismo desde dentro del periodismo mismo más no por decreto. Hay que convertir este oficio o este trabajo en una profesión. La situación laboral de los periodistas en Colombia se ve afectada por la guerra, ya que esta es una amenaza latente para la prensa más en las provincias que en las grandes ciudades como lo expone Patricia Gómez.

En ciudades intermedias y provincias el periodista complementa su trabajo productivo con actividades relacionadas generalmente con los políticos de las regiones creando así un vínculo extra laboral solo con el fin de mejorar sus ingresos. Estos vínculos en tiempos de conflicto se vuelve peligroso, ya que quienes querían permanecer en la región tenía que hacer acuerdos con los grupos armados que tenían el poder local.

“El problema para los periodistas era que se venían involucrados con los actores armados que hacían acuerdos con los políticos locales... El resultado era que los periodistas terminaban situándose en la mira del otro actor armado (enemigo) que estaba en la contienda”¹⁸

¹⁷ Fundación Konrad Adenauer. (edit.), (2003), *La situación laboral de los periodistas en Colombia*. p. 44

¹⁸ Fundación Konrad Adenauer. (edit.), (2003), *La situación laboral de los periodistas en Colombia*. p. 54

Esta relación de los periodistas con los políticos ha llegado a tal punto que los enemigos de los periodistas son los mismos políticos, dado que el periodista en las regiones hace su labor de investigar e informar la corrupción de los políticos haciendo que tachen al periodista como enemigo número uno. Es por esto que cuando se les pregunta a los periodistas de donde proviene las amenazas mencionan a los grupos al margen de la ley, FARC, Autodefensas, ELN, sin dejar de lado a los políticos, personas involucradas con corrupción o enemistades personales.

En 1998 cuando se empezaron a notar los ataques guerrilleros, los periodistas en Colombia no estaban preparados para este acontecimientos, ya que estaban en medio del proceso político de Samper y de la privatización de los canales de televisión que se encargaron de especializar a sus periodistas en una sola fuente ELN, FARC, PARAMILITARES, lo que trajo tiempo después riesgos para los periodistas que se habían especializado en una o en otra fuente dependiendo de los intereses, ya que el profesional había entablado relaciones de amistad, confianza, y complicidad con la fuente.

“La consecuencia fue que ha medida en que la información circulaba, se empezaron a crear las listas negras. Los periodistas que ya eran fácilmente identificados se fueron convirtiendo a su vez en informantes de su fuente”¹⁹

¹⁹ Fundación Konrad Adenauer. (edit.), (2003), *La situación laboral de los periodistas en Colombia*. p. 60

OBJETIVO GENERAL

Realizar una investigación periodística que permita describir y analizar cómo ha sido la relación de conflicto entre el Presidente Álvaro Uribe Vélez y algunos periodistas y medios durante sus dos administraciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir y analizar los casos de periodistas que se han enfrentado al Presidente Álvaro Uribe Vélez, y los que se han aliado a él.
2. Analizar las reacciones del gremio con respecto a los casos analizados.
3. Analizar las posiciones políticas de los medios y sus respectivos directivos, lo cual incluye examinar las posturas tanto gobiernistas como de oposición.
4. Describir y analizar como los conflictos entre el gobierno de Uribe y la prensa pueden o no afectar la seguridad y la estabilidad social de los periodistas.

METODOLOGÍA

1. Tipos de investigación: se hará una investigación descriptiva – analítica donde se recopile información por medio de periódicos, revistas, documentos, memorias, libros, etc. Y además se realizara en el lugar y tiempo en el que están sucediendo los hechos.
2. Corpus de la investigación: se miraran los casos de diferentes periodistas que de alguna manera se han enfrentado con el Presidente Álvaro Uribe Vélez, como por ejemplo Daniel Coronel, Alejandro Santos, entre otros.
3. Fuentes: los instrumentos que utilizaremos para recoger la información serán periódicos (El tiempo, El espectador), entrevistas a periodistas involucrados, políticos representantes de los medios de comunicación; archivo de las revista Semana.
4. Delimitación: periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez 2002 -2006, 2006 – 2009.
5. Producto Final: texto que contiene la información recopilada en una investigación acerca de la situación laboral de los periodistas en Colombia en los dos gobiernos del Presidente Uribe. Además un informe periodístico que muestre entrevistas y el proceso de investigación.

CRONOGRAMA

Semana 1: →
Semana 2: →
Semana 3: →
Semana 4: →
Semana 5: →
Semana 6: →

Durante estas semanas se realizará el estudio pertinente de prensa que permita encontrar los diferentes acontecimientos que han transcurrido en el país y que han influido en el desarrollo del periodismo, ya sea por censura o por amenazas y crímenes.

Semana 7: →
Semana 8: →
Semana 9: →
Semana 10: →
Semana 11: →
Semana 12: →

A partir de este momento, se empezaran a realizar las entrevistas a los diferentes periodistas, para contrastar versiones y mentalidades de ellos hacia el Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Semana 13: →
Semana 14: →
Semana 15: →
Semana 16: →
Semana 17: →
Semana 18: →

Análisis basado tanto en la investigación como en las entrevistas y la situación de las empresas dedicadas a la comunicación. Se tendrá en cuenta una mirada internacional por estar en una situación que la distancia de Colombia.

Todo lo anterior se plasmará en un texto que sistematizará toda la experiencia.

BIBLIOGRAFIA

- Muñoz, A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.I., Eudema
- Vallejo, M. (2006), *A plomo herido. Una crónica del periodismo en Colombia*, s.I., Planeta
- Fundación Konrad Adenauer. (edit), (2003), *La situación laboral de los periodistas en Colombia*



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
Carrera de Comunicación Social

FORMATO EVALUACIÓN ASESOR TRABAJO DE GRADO
(Único formato aceptado por la Facultad)

Sr. (a) Asesor(a): La Asignatura Trabajo de Grado que Usted asesora requiere, como las demás asignaturas, de dos notas parciales correspondientes al 60% y una nota final correspondiente al 40% para una definitiva correspondiente al 100%. En esta evaluación Usted debe considerar el proceso de elaboración del Trabajo y su producto final, especificando en el caso de grupo, la nota correspondiente para cada estudiante.

Título del Trabajo:

“Situación del periodismo en Colombia durante las dos administraciones del Presidente Álvaro Uribe Vélez”

Nombre estudiante	30%	30%	40%	Definitiva
Luz Ángela Tobón P.	45	45	45	45

Observaciones (Justificación de la calificación)

ESTE TRABAJO REPRESENTA UN BUEN PUNTO DE PARTIDA PARA EMPEZAR A EVALUAR LA LABOR PRESIDENCIAL DE ALVARO URIBE. CON AMPA REPORTERIA Y REVISION CRONOLÓGICA DE HECHOS Y CASOS.

COYUNTURALES DE SU GOBIERNO, SE BUSCA EMPEZAR A EVALUAR COMO FUERON LAS RELACIONES ENTRE EL EJECUTIVO Y LOS MEDIOS.

Fecha: Junio 8 de 2010

Nombre del Asesor: Jorge Cardona

Firma del Asesor:

C.c.: 31.828.55

Teléfonos: 4232300 ext. 1231



Facultad de Comunicación y Lenguaje

Carrera de Comunicación Social

RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y estudiantes. Es indispensable que el Resumen contemple el mayor número de datos posibles en forma clara y concisa.

I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO

1. Autor (es):

Luz Ángela Tobón Pacheco

2. Título del trabajo:

“Situación del periodismo en Colombia durante las dos administraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez”

3. Tema central:

Las transformaciones que ha tenido la labor periodística en Colombia durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

4. Subtemas afines

- * Censura y autocensura en los periodistas
- * Tercer canal privado de televisión
- * Otros negocios mediáticos

5. Campo profesional: Periodismo

6. Asesor del Trabajo: Jorge Cardona

7. Fecha de Presentación: Mes: 06 Año: 2010 Páginas: 104



II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO

1. Objetivo o Propósito central del trabajo:

El objetivo del trabajo es descubrir que tanta acogida tuvo el Presidente Álvaro Uribe Vélez entre los periodistas y que conveniencia tenía, según las opiniones de ellos, una segunda reelección para un tercer mandato.

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo)

Capítulo 1: “Bitácora de ocho años”

Capítulo 2: “Defensores y Contradictores”

Capítulo 3: “Las contradicciones de El Tiempo”

Capítulo 4: “Entrevistas”

3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados)

- Muñoz, A. (1992), *Opinión pública y comunicación política*, s.I., Eudema
- Vallejo, M. (2006), *A plomo herido. Una crónica del periodismo en Colombia*, s.I., Planeta
- Fundación Konrad Adenauer. (edit), (2003), *La situación laboral de los periodistas en Colombia*

4. Conceptos clave (Enuncie de tres a seis conceptos clave que identifiquen el Trabajo).

- * Resumen
- * Análisis de los hechos
- * Entrevistas
- * Investigación

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar el objetivo).

Este trabajo de grado es una tesis teórica para cual se llevaron a cabo procedimientos de investigación y análisis con herramientas como entrevistas y material de archivo de prensa para la cronología realizada.

6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sintetizen el Trabajo).

Este trabajo de grado principalmente pretende descubrir las transformaciones que ha tenido la labor periodística en Colombia durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Esto contando con la opinión de varias personas que se desenvuelven en esta profesión y que cuentan con una trayectoria importante en la misma; además analiza el manejo de la censura y autocensura de acuerdo a estas mismas entrevistas realizadas.

Igualmente, analiza diferentes negocios mediáticos que han regido en el país por varios años y que están en manos de grandes grupos económicos, también muestra la situación del tercer canal privado de televisión que incursionará en el país próximamente. Previo a lo anteriormente mencionado, es utilizada una cronología de hechos para contextualizar lo sucedido durante los dos periodos presidenciales.

Por último, se presentan las conclusiones que apuntan a que la mayoría de los periodistas no apoyan un tercer mandato y a pesar de que afirman que no hay censura si explican cuantas veces deben callar por voluntad propia.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	42
I. Bitácora de ocho años.....	46
1.1 Golpe a la seguridad democrática.....	48
1.2 El año de la reforma a la reelección presidencial.....	49
1.3 Ley de justicia y paz y candidatura.....	53
1.4 La pesadilla del das y la pelea con la corte suprema.....	58
1.5 La confrontación con la corte suprema y los periodistas.....	62
1.6 De la operación jaque al presente.....	66
II. Defensores y Contradictores.....	70
III. Las contradicciones de El Tiempo.....	82
3.1 Grandes grupos económicos al frente de los medios de comunicación.....	87
3.2 Mientras uno aparece, otro se esfuma.....	90
IV. Entrevistas.....	93

4.1 Entrevista Rodrigo Pardo.....	93
4.2 Entrevista José Obdulio Gaviria.....	98
4.3 Entrevista Vicky Dávila.....	105
4.4 Entrevista Ignacio Gómez.....	109
4.5 Entrevista Hugo García.....	114
4.6 Entrevista Gerardo Aristizábal.....	119
4.7 Entrevista Libardo Cardona.....	125
4.8 Entrevista Luz María Sierra.....	131
4.9 Entrevista Jorge Alfredo Vargas.....	135
Conclusiones.....	139
Bibliografía.....	143

Introducción

Desde que el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez asumió el poder en agosto del año 2002, en Colombia se han desarrollado una serie de hechos que han dividido las opiniones de los ciudadanos. En buena medida esa polarización ha sido impulsada por las posturas de los medios de comunicación y, más específicamente, por los generadores de opinión. Cada uno de sus logros o desaciertos ha sido analizado con suficiencia y producto de ese debate existe una sociedad dividida entre quienes creen que el Jefe del Estado ha sido determinante para el fortalecimiento del Estado y quienes piensan que se ha debilitado la democracia.

Desde finales del siglo XIX, no se daba en Colombia la reelección presidencial inmediata. El presidente Álvaro Uribe lo logró gracias a que su bancada en el Congreso reformó la constitución para hacerlo posible. Reelegido para un segundo mandato en el año 2006, su proyecto de seguridad democrática ha sido la columna vertebral de su gestión. Sin embargo, esta misma política, sin quererlo lo ha llevado a dificultar sus relaciones internacionales y a acentuar sus discrepancias con las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Ambos aspectos se han visto reflejados en la forma como los medios de comunicación han abordado las realidades de sus dos gobiernos.

Estos contrastes ameritan un análisis específico. ¿Cómo ha sido y cuál es la visión del periodismo durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez? Algunos periodistas han sido víctimas de amenazas o estigmatizaciones por informaciones divulgadas que tocan temas importantes del contexto político nacional. Ellos tienen una postura pesimista sobre el desempeño del Presidente de la República respecto a la libertad de expresión. Otros creen que el Primer Mandatario ha respetado a la oposición y ha brindado plenas garantías a todos los sectores. Entre unos y otros existe una realidad que vale la pena estudiar. Ese el objetivo de este trabajo periodístico. Qué piensan los periodistas sobre el gobierno Uribe y cómo evalúa el Ejecutivo a los periodistas.

Para desarrollar el trabajo, inicialmente se aporta una secuencia narrativa de lo que han sido estos ocho años de gobierno Uribe, haciendo énfasis en los momentos de mayor impacto noticioso y, obviamente, resaltando de qué manera los medios de comunicación y el Ejecutivo han tenido aproximaciones y distanciamientos. Posteriormente se aporta un análisis de cómo los periodistas y, a través de ellos, los medios de comunicación, de alguna manera se han convertido en defensores y detractores del gobierno, orientando a la opinión pública con sus informaciones y opiniones, y al mismo tiempo desarrollando una confrontación que, de alguna manera, es la misma que hoy polariza a la sociedad colombiana en estos mismos aspectos.

Esas opiniones se ven reflejadas en múltiples entrevistas a periodistas que defienden sus posturas adversas frente al mandatario, las cuales son incluidas integralmente en el contenido de este trabajo periodístico. Ellos expresan su situación, hablan acerca de lo que en su criterio le ha sucedido al país, evalúan la confrontación entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema de Justicia, califican lo que ha dado en llamarse el Estado de Opinión y, en general, aportan luces sobre la forma como el periodismo ha encarado estos últimos ocho años de gobierno, donde la opinión pública ha sido directamente confrontada por un mandatario que en múltiples aspectos, positivos y negativos, rompió los moldes de sus antecesores en la Casa de Nariño.

Finalmente, como un caso particular que ha afectado las relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno en los últimos tiempos, se incluye en este trabajo periodístico un análisis sobre el accidentado proceso de concesión del tercer canal privado de televisión, que se ha convertido en una lucha de poder entre los grandes grupos económicos. Aunque nadie duda que la creación de un nuevo medio de comunicación, abre oportunidades laborales, fortalece la democracia y amplía la visión del país internacionalmente, también es claro que hay intereses políticos y económicos en juego y que ellos proyectan las relaciones del Ejecutivo con los empresarios de la información. Por eso es necesario, con el apoyo de los especialistas, aportar luces sobre este complejo proceso aún sin definirse.

En síntesis, este trabajo periodístico analiza lo que ha sucedido con el periodismo durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta, por supuesto, todos los aspectos tratados durante su gobierno. La seguridad, las relaciones internacionales, los escándalos judiciales, las claves para entender una sucesión de hechos que fueron noticia desde que él asumió el poder y que poco a poco comienzan a ser historia. Antes de que pasen al olvido o sean desplazados por la nueva dinámica del gobierno que asumirá las riendas de la Nación a partir del 7 de agosto de 2010, es bueno aportar una mirada a dos cuatrienios polémicos donde el presidente Álvaro Uribe Vélez fue tan protagonista como los mismos medios que lo defendieron o combatieron.

Nota Aclaratoria

El presente trabajo de grado es presentado por la estudiante Luz Ángela Tobón Pacheco. Sin embargo, el anteproyecto realizado en la asignatura Proyecto II se hizo en compañía con la estudiante María Andrea Moreno. Debido a que esta segunda persona no cumplió con el requisito del examen internacional de inglés, fue necesario separar los procesos académicos. Por eso, cada quien realiza su tesis de grado pero utilizando el mismo anteproyecto, ya que las dos obtuvieron nota y fueron evaluadas en la misma asignatura por el mismo trabajo. Esta decisión se acordó entre las dos estudiantes, con el consentimiento del director de la tesis y la coordinación de trabajos de grado de la facultad de comunicación.

I

Bitácora de ocho años

Desde el día de su posesión como nuevo Presidente de los colombianos, el 7 de agosto de 2002, Álvaro Uribe Vélez se vio instado a enfrentar a su enemigo más acérrimo: las FARC. Mientras asumía el mandato, milicianos de este grupo guerrillero atacaron con lluvia de morteros y proyectiles de alto impacto a la Casa de Nariño. Por fortuna, sólo dejaron daños materiales en los alrededores de la casa presidencial, pero a pocas cuadras y en otros sectores de la ciudad dejaron muchas víctimas mortales. Una razón suficiente para que el nuevo mandatario de los colombianos comenzara a gobernar privilegiando sus decisiones en materia de seguridad.

Además, el nuevo Jefe de Gobierno recibió un Estado colapsado en las regiones, con varias situaciones de peligro y la Fuerza Pública en crisis. Muchos funcionarios públicos estaban involucrados en bandas criminales, narcotráfico y lavado de dólares, al tiempo que el país contaba con altos niveles de desempleo y pobreza. De igual forma, el nuevo mandatario se debía enfrentar a que los colombianos esperaban una disminución en las amenazas y asesinatos a los alcaldes, que los ataques a las infraestructuras del Estado se acabaran y que definitivamente el secuestro de ciudadanos y personalidades para buscar canje político o propósito extorsivo, se terminaran.

Así las cosas, cinco días después de los atentados ocurridos el día de la posesión presidencial, con la firma de todos los ministros del entrante gobierno, fue declarada la conmoción interior en todo el país y, entre otras medidas, se impuso el impuesto al patrimonio que sería destinado a los fondos de seguridad del Estado. De manera simultánea, en manos del Ministro del Interior Fernando Londoño, quedó impulsar en el Congreso un referendo contra la corrupción y la politiquería. De paso quedó claro que el éxito del nuevo gobierno dependía de una estrecha alianza con el Poder Legislativo, puesto que eran los senadores y representantes quienes debían aprobar las reformas planeadas.

La primera reacción nacional fue de euforia. La puesta en marcha de acciones para recuperar la seguridad ciudadana le tributó al gobierno altos índices de popularidad. Sin embargo, en medio de las medidas contra los violentos surgieron las primeras críticas a esas decisiones. El hecho que reflejó las dos posturas fue la operación Orión, una acción urbana de la Fuerza Pública para acabar con la violencia generada por los grupos de milicias de las FARC en las comunas de Medellín. Los contradictores de la operación aseguraron que las Autodefensas Unidas de Colombia habían participado en operaciones conjuntas con la fuerza pública para concretarla. Los defensores de la misma la consideraron un éxito del gobierno que debía aplicarse en otras ciudades.

Antes de que la controversia cobrara forma, el gobierno sorprendió a la opinión pública anunciando que había decidido emprender diálogos de paz con los grupos paramilitares antes de hacerlo con las guerrillas de las FARC y el ELN. Esta determinación alejó de paso el acuerdo humanitario del que se hablaba como la única solución para concretar la libertad de un alto número de políticos y militares secuestrados por las FARC. Como primer punto del acuerdo con las AUC se planteó un cese de fuego unilateral, el cual fue aceptado por las autodefensas meses más tarde. Este viraje respecto a la concreción de diálogos de paz cambió completamente las perspectivas políticas del país y, de paso, generó una dinámica informativa que opacó la atención de otros temas de interés público.

Al cierre de los primeros cuatro meses de gobierno, que coincidió con el final del año 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez se había salido con la suya. Sus niveles de popularidad eran altos, la gente ya hablaba de la política de Seguridad Democrática como un logro colectivo y la agenda legislativa no podía ser mejor. No sólo fue aprobado el referendo contra la corrupción y la politiquería en el Congreso, sino que salieron adelante siete reformas más. Los principales medios de comunicación coincidieron en elegir al Primer Mandatario como el personaje del año y, entre los aciertos del Primer Mandatario se le atribuía la posibilidad de que todos los habitantes del país pudieran viajar de manera segura y sin miedo desde la Guajira hasta el Amazonas, deleitándose con los paisajes por unas carreteras vigiladas por la fuerza pública e impulsadas por caravanas que salían desde diferentes puntos bajo el lema de Vive Colombia, Viaja por ella.

1.1 Golpe a la seguridad democrática

El año 2003 empezó con un positivo balance para la fuerza pública y un sentimiento de aprobación al gobierno por sus logros en seguridad. Una circunstancia que le permitió al gobierno impulsar cómodamente la votación del referendo aprobado en el Congreso, con 18 puntos referentes a reformas al parlamento y las costumbres políticas. La oposición decidió jugársela por el NO al referendo o alternativamente la abstención. La credibilidad del primer mandatario era amplia y aumentaba con el correr de los días, a pesar de que la guerrilla y los grupos paramilitares seguían dejando numerosas víctimas en una violenta disputa territorial que se reflejaba en masacres o asesinatos selectivos. Aún así, era difícil prever que pudiera darse un atentado de gran impacto.

Sin embargo se dio y a niveles terroristas. El viernes 7 de febrero de 2003, un comando de las FARC atentó contra el corazón financiero del país: el club El Nogal, ubicado al norte de Bogotá. Con un carro bomba instalado en los sótanos de la edificación, no sólo lograron destruir parcialmente el lugar sino que dejaron numerosos muertos y decenas de heridos, entre los cuales se encontraban varios empresarios del país. Y no fue suficiente. Esa misma semana, otro comando de la organización subversiva detonó una carga de dinamita en una casa ubicada en el barrio La Magdalena de Neiva, cerca al aeropuerto donde el presidente Uribe planeaba aterrizar. Y para completar la mala racha, ese mismo mes las FARC derribaron un avión de inteligencia que sobrevolaba en el Caquetá, asesinaron a un norteamericano y a un oficial colombiano, y se llevaron secuestrados a tres estadounidenses más que cumplían una misión oficial.

La oleada terrorista de las FARC se mantuvo por varias semanas y, entre otros hechos, se sumó la explosión de una bomba en un centro comercial de Cúcuta y varios atentados contra buses de Transmilenio en Bogotá. A pesar de la actitud beligerante de la guerrilla, en el ambiente nacional pesaba el reclamo por un acuerdo humanitario para ponerle fin al cautiverio de varios civiles y militares secuestrados por las FARC. Sin embargo, en contravía de las opiniones de sus opositores, el presidente Uribe siguió insistiendo en el rescate militar de los secuestrados en las selvas colombianas. En medio

de ese pulso de contradictores, sobrevino un desenlace inesperado. En área rural de Urrao (Antioquia), la guerrilla asesinó a sangre y fría a once militares, al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria y a su consejero de paz Gilberto Echeverri.

El año 2003 no concluyó muy bien para el presidente Uribe, sobre todo por el revés electoral sufrido en el mes de octubre, cuando fracasó en las urnas el referendo contra la corrupción y la politiquería que presentó a consideración del Congreso en agosto de 2002. No pasó porque no superó el umbral de participación electoral. A esta derrota, inesperada para el gobierno, se le agregó el retroceso de las fuerzas uribistas en gobernaciones y alcaldías, pues también en octubre de 2003 sobrevino la derrota de sus principales candidatos. Juan Lozano perdió la alcaldía de Bogotá a manos de Luis Eduardo Garzón del Polo. Y los candidatos del uribismo en Medellín y Cali sufrieron derrotas semejantes. En términos generales, el año no concluyó con un ambiente tan desahogado como el del 2002 y para la época ya la oposición había desarrollado una maquinaria capaz de contrarrestar sus avances políticos.

1.2 El año de la reforma a la reelección presidencial

El año 2004 empezó muy alentador para el gobierno y las fuerzas uribistas gracias a un golpe contundente a las FARC. Apenas se iniciaba el año cuando fue capturado en Ecuador el jefe guerrillero e integrante del Comité Temático durante las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, Ricardo Palmera, conocido con el alias de “Simón Trinidad”. Esta captura le regresó al gobierno su credibilidad y le dio margen para seguir creyendo en su tesis del rescate de los civiles y militares secuestrados. Un drama con destino incierto pues las negociaciones de paz con la guerrilla se veían cada vez más lejanas. En contraste, con acompañamiento de la OEA, comenzó a cobrar forma el proceso de paz con los grupos de autodefensa, a pesar de que persistían en sus asesinatos. El último de ellos: el crimen de Marta Lucía Hernández, directora del parque Tayrona, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En marzo, el triunfalismo del gobierno en su ofensiva contra la guerrilla se vio opacado por otra acción violenta de las FARC. Aproximadamente 60 guerrilleros asaltaron el edificio Altos de Manzanillo en la ciudad de Neiva y se llevó cautivos a un alto número de residentes en el lugar. Por este incidente, el presidente Álvaro Uribe ordenó relevar de su cargo al general a cargo de las operaciones en la capital del Huila. En momentos en que el presidente Uribe hacía alarde de la importancia en la seguridad, sucedió este nuevo ataque de la guerrilla que en principio fue atribuido a las constantes disputas y rencillas internas entre el ejército, la policía y el DAS. El debate se abrió y mientras algunos sostenían que la política de Seguridad Democrática empezaba a mostrar sus primeras flaquezas, otros manifestaban que los errores militares iban a continuar porque no había reglas claras para el combate y las tropas estaban insuficientemente entrenadas.

No obstante, antes de que cobrara fuerza el debate de la seguridad, las fuerzas afines al gobierno sacaron a relucir el as que cambió definitivamente el norte de las relaciones sociales y políticas en el cuatrienio 2002-2006. Hacia el mes de abril la bancada conservadora, apoyada sutilmente por el ministro del interior Sabas Pretelt de La Vega, reemplazo de Fernando Londoño Hoyos, quien a su vez había renunciado después de la derrota del referendo, planteó al Congreso un acto legislativo para permitir la reelección presidencial. La constitución de 1991 prohibía de manera tajante cualquier tipo de reelección, menos de manera inmediata. Sin embargo, después de que el propio presidente Uribe admitió su interés en quedarse por un periodo más, con el argumento de complementar sus políticas de Estado, apareció el proyecto de reforma a la Carta Política.

Los resultados de la primera encuesta ciudadana demostraron que la reelección de Uribe presentaba un contundente apoyo, aunque de entrada era claro que el Congreso estaba dividido y los intelectuales se manifestaban en contra. Aún así, el acto legislativo fue cobrando forma en el Congreso, al mismo tiempo que avanzaba a marchas forzadas el proceso de paz con los paramilitares, con un instrumento jurídico de soporte denominado proyecto de alternatividad penal. Una iniciativa que, en manos de los senadores Gina Parodi, Rafael Pardo Rueda y Luis Fernando Velasco, pretendía que los componentes mínimos de la ley para validar la inserción de los paramilitares a la vida civil fueran verdad, justicia y reparación. Para la época el gobierno había condicionado la extradición de los jefes paramilitares a

Estados Unidos a cambio de su colaboración con el proceso y concentración inmediata en zonas designadas por el Ejecutivo.

No era un asunto fácil. A algunos paramilitares se seguían atribuyendo múltiples conductas al margen de la ley. Definitivamente no se querían apartar del negocio del narcotráfico, muchos traficantes de droga se habían colado en el proceso de paz, habilidosamente se estaban apoderando de las tierras con mayor valor y ejercían labores propias de su guerra contraguerrillera. Como si fuera poco, sus fuerzas estaban divididas y esas discrepancias salieron a flote cuando se supo que el máximo comandante de las autodefensas, Carlos Castaño, fue asesinado por sus propios compañeros en mayo de 2004. En el fondo lo que reflejaba esta situación era que los jefes paramilitares Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; y Jorge Tovar Puppo, alias “Jorge 40”, eran los nuevos jefes del narcotráfico y, al mismo tiempo, los interlocutores ante el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.

Estas grietas en el proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno comenzaron a ser denunciadas en los medios de comunicación, especialmente en las revistas y periódicos. La revista Semana, los periódicos El Espectador, El Nuevo Siglo y El Tiempo en primera instancia, y el noticiero de televisión Noticias Uno divulgaron sucesivos informes en los que advertían el rumbo errado por el que se estaba encaminando la negociación política. Con un tono aún más crítico, varios columnistas de opinión asumían la misma tarea. A pocas semanas de concluir su segundo año de gobierno, además de la oposición del Polo Democrático y el Partido Liberal en el Congreso, o de las labores de denuncia de las Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos a nivel internacional, ya se sumaban a la controversia varios medios de comunicación que no veían con buenos ojos lo que estaba sucediendo al margen de las actividades de gobierno.

Y no tardó en precipitarse el hecho que aún da de que hablar y que definitivamente partió en dos la historia de Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nariño. Sucedió a principios de junio de 2004. El acto legislativo para impulsar la reelección presidencial estaba a punto de hundirse en la Comisión Primera

de la Cámara de Representantes. Sin embargo, en la madrugada del 4 de junio, la representante conservadora Yidis Medina, quien había anunciado su voto negativo a favor de la reforma, cambió a última hora su voto. A su vez, el congresista Teodolindo Avendaño, sin razón aparente se ausentó del debate. Por 18 votos contra 16, pasó la reforma. A las 48 horas, el representante del Polo, Germán Navas Talero, denunció penalmente a los dos congresistas y acusó al gobierno de haberles comprado el voto a cambio de prebendas burocráticas. El caso ocupó por varias semanas la agenda mediática y después pasó al olvido. Volvería con la fuerza de un sismo cinco años después.

No obstante, a mediados de 2004, la realidad era otra. La controversia pública seguía vinculada al accidentado proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno que, de la mano de las representantes Eleonora Pineda y Rocío Arias, tuvo un escandaloso paso. En julio de 2004, a la plenaria de la Cámara de Representantes, en calidad de invitados, llegaron los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramón Isaza e Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”. En sucesivos discursos demostraron su clara intención de lograr un rápido acuerdo que les permitiera en pocos años cambiar las armas por curules al Congreso de la República. Era tal el triunfalismo paramilitar, que Salvatore Mancuso se atrevía a decir a los medios de comunicación que ya tenían un alto porcentaje de participación en el Poder Legislativo. Además anunciaban que en pocas semanas empezaba a darse la desmovilización y desarme de su maquinaria de guerra, en contravía de las FARC que sólo combatían al gobierno.

Como una voz solitaria, el defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro, durante la participación de los jefes paramilitares en el Congreso, exhibió un cartel con la imagen de su padre, Manuel Cepeda, ex congresista de la Unión Patriótica asesinado en agosto de 1994. Esa protesta silenciosa se convirtió en imagen de una sociedad que constataba el equivocado camino de un fallido proceso de paz. Sin embargo, como estaba presupuestado, al tiempo que el acto legislativo de la reelección presidencial terminó de perfeccionarse en el Congreso, el resto de 2004 fue para el protagonismo paramilitar. En noviembre, ya se había desmovilizado el frente Cacique Nutibara en Antioquia, con “Don Berna” o “Adolfo Paz” al frente de sus hombres, y sucesivamente empezaron a hacerlo más de 15.000 combatientes en los Llanos Orientales, la región del Catatumbo, la Costa Atlántica, el Bajo Cauca, la

región de Urabá o Cundinamarca. La sensación era de triunfo del gobierno, no pasaría mucho tiempo en constatar que los grupos de autodefensa intentaban jugar con el Estado.

1.3 Ley de justicia y paz y candidatura

El año 2005 arrancó con un golpe contundente a las FARC y un problema con Venezuela por un asunto afín. Ante la negativa de las FARC de aceptar la liberación de todos los civiles y militares secuestrados a cambio de no extraditar al jefe guerrillero Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, el presidente Uribe autorizó su envío a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. De inmediato la guerrilla expidió un comunicado para advertir que esa decisión afectaba notablemente las posibilidades de un acuerdo humanitario. Pero el gobierno atravesaba por una época triunfalista que lo llevó a cometer un craso error en Venezuela. En las calles de Caracas, personal de inteligencia de Colombia retuvo ilegalmente al jefe político de las FARC, Rodrigo Granda, fue obligado a abordar un vehículo en el que fue movilizado hasta la frontera y en Cúcuta fue formalizada su captura. El hecho desató una crisis diplomática por la reacción del gobierno del presidente Hugo Chávez.

Fueron 25 días de permanente tensión diplomática y política. El presidente Hugo Chávez exigió respeto a su soberanía y bloqueó las relaciones económicas con Colombia esperando un resarcimiento del gobierno Uribe. Colombia argumentó que estaba en su derecho de enfrentar al terrorismo dentro o fuera del territorio nacional, en parte respaldado por el gobierno de Estados Unidos, entonces presidido por George W. Bush. Fue necesario que intervinieran los gobiernos de Perú, Brasil y Cuba para aliviar las relaciones entre los dos países y, de alguna manera, quedó claro que en la lucha contra la subversión, el gobierno Uribe iba a tener un complicado escollo con Venezuela. En dicho país imperó la tesis de la neutralidad frente al conflicto colombiano y el gobierno Uribe probó el sabor amargo de los reclamos de la comunidad internacional por sus políticas de seguridad ajenas a cualquier tipo de negociación de paz o intercambio humanitario con la guerrilla de las FARC.

Superada la crisis internacional, el protagonismo volvió a recobrarlo el accidentado proceso de negociación entre los grupos de autodefensa y el gobierno. Para febrero de 2005 ya pasaban de 10.000 los desmovilizados de las autodefensas, pero no existía un referente jurídico para instrumentalizar el proceso de paz. Los columnistas de opinión seguían insistiendo en que varios narcotraficantes insistían en colarse en la negociación política, el Congreso era un hervidero de discusión frente a la necesidad de una ley justa, los organismos de derechos humanos exigían que, de conformidad con la justicia transicional, existiera un mínimo de cárcel para los desmovilizados de las autodefensas, y los jefes paramilitares reclamaban un libreto claro pues no querían extradición y tampoco castigo alguno con privación de la libertad. Otra crisis, esta vez nacional, porque muchos congresistas empezaron a tomar distancia del gobierno por cuenta del trámite de la llamada Ley de Justicia y Paz.

Entre ellos, el senador liberal Rafael Pardo Rueda, quien a pesar de haber sido uno de los adalides de la reforma a la Carta Política para la reelección presidencial y uno de los primeros defensores de la obra del presidente Uribe, nunca estuvo de acuerdo con el perfil que tomó el proceso de negociación entre el gobierno y las autodefensas y, por esta razón, entró en contradicción con el consejero de paz, Luis Carlos Restrepo. No fue un buen momento para el gobierno Uribe. A los dilemas con Venezuela y los enfrentamientos en Colombia por cuenta de la ley de Justicia y Paz, se sumaron dos graves hechos: las FARC emprendieron un asedio permanente en el departamento del Cauca y nuevos escándalos empañaron una vez más el proceso de paz con los paramilitares: las denuncias de los obispos de Urabá y Choco sobre las complicidades entre los militares con las AUC.

La presión de la opinión pública siguió en aumento y los medios de comunicación no ahorraron esfuerzos para demostrar que los jefes paramilitares seguían delinquiendo. En particular salió a la luz pública lo que había sucedido dos años atrás con el alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo “Tito” Díaz, quien a pesar de haber sido advertido por el presidente Uribe en un consejo comunitario en Sincelejo, nada se hizo por protegerlo. El 5 de abril de 2003 lo asesinaron y de inmediato las sospechas recayeron sobre el ex gobernador del departamento de Sucre, Salvador Arana, designado como diplomático en Chile, y sobre los jefes paramilitares, especialmente Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”. Aunque el proceso de paz ordenaba que los jefes de las autodefensas tenían el

compromiso de concentrarse en varios puntos de la geografía nacional, incumplían sus obligaciones. Por eso, hacia mediados de 2005 fue presentado como un acierto que Don Berna lo hiciera en la zona de Santa Fe de Ralito (Córdoba).

El Ejecutivo se la jugaba en varios frentes. Ya la extradición se había convertido en una de sus armas favoritas y decenas de colombianos eran enviados a Estados Unidos, entre ellos los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, capos del cartel de Cali (marzo de 2005). Los medios de comunicación especulaban permanentemente sobre el tema y vaticinaban que, de no corregirse los errores del proceso de paz con las autodefensas, sus jefes podrían llegar a correr la misma suerte. De cualquier manera, su extradición apenas estaba suspendida porque Estados Unidos ya tenía en su contra suficientes pruebas de su larga participación en el negocio del narcotráfico. Claro está que algunos de los jefes del paramilitarismo, como Vicente Castaño, hacían caso omiso a las críticas y, por el contrario, aseguraban que para las elecciones de 2006 ya estaban dispuestos a aumentar significativamente su participación en el Congreso de la República.

A pesar de las críticas de la oposición y las recurrentes observaciones de los medios, el gobierno hizo validar sus mayorías en el Congreso y a finales de la primera legislatura de 2005 logró sacar adelante la Ley 975 de 2005, desde entonces conocida como la Ley de Justicia y Paz. El Jefe de Estado la incorporó al ordenamiento jurídico con su publicación en el Diario Oficial el 25 de julio de ese año. Como se había advertido, fue una ley generosa. Los jefes paramilitares quedaron obligados a someterse a la justicia, pero sólo a pagar condenas entre cinco y ocho años de prisión, reconociendo el tiempo de acatamiento al proceso de paz. Es decir, en algunos casos estaban a escasos dos años para pagar sus cuentas con la justicia. Eso sí, los beneficiados de la ley estaban obligados a decir la verdad y a reparar a sus víctimas. Y para ello contaban con una decisión aún más polémica: recibían el trato de sediciosos, la misma condición de los guerrilleros que se levantan en armas contra el Estado, sólo que ellos supuestamente lo hacían para defenderlo.

Las demandas contra el texto aprobado no se hicieron esperar, pero el Ejecutivo no dejaba de manifestar su complacencia por la aprobación de la ley. Los críticos advertían que se había consolidado la impunidad y que las penas de cinco a ocho años significaban una verdadera burla a la justicia. No obstante, el gobierno siguió adelante con el proceso y a principios de agosto logró una victoria más para consolidarlo: en reemplazo del abogado Luis Camilo Osorio, a quien se le cumplió su periodo como Fiscal, logró que la Corte Suprema de Justicia designara al abogado Mario Iguarán Arana, quien se venía desempeñando como viceministro de justicia. Desde esa posición, Iguarán había sido prácticamente el redactor de la Ley de Justicia y Paz, por lo cual era claro que resultaba el funcionario idóneo para aplicarla. Con un hecho adicional: desde sus primeras declaraciones a los medios de comunicación anunció que no tomaría un ápice de distancia del gobierno.

En realidad, nada amenazaba el paso triunfal del gobierno. Sus mayorías dominaban el Congreso, los organismos de control no emitían conceptos críticos sobre su gestión, el presidente cabalgaba cómodamente en las encuestas, la crítica de los medios se limitaba a algunas voces de columnistas que resultaban minoría, y escasamente incomodaban tres aspectos. La presión de los organismos de derechos humanos, especialmente en el ámbito internacional. Las primeras desavenencias con Ecuador producto del cambio de gobierno en el vecino país, al caer Lucio Gutiérrez, amigo y aliado de Uribe, y asumir Alfredo Palacios, quien de inmediato empezó a reclamar por las fumigaciones de cultivos ilícitos en la zona de frontera. Y el aplazado dilema del intercambio humanitario porque familiares de civiles y militares secuestrados por las FARC reclamaban opciones y el comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, escasamente alentaba la propuesta de despejar militarmente una vereda del municipio de Pradera (Valle).

El otro escenario de debate no podía ser otro que la reelección presidencial. A pesar de que en julio de 2005, el entonces procurador Edgardo Maya Villazón solicitó la inconstitucionalidad del acto legislativo aprobado en ocho debates en el Congreso, el gobierno confiaba plenamente en su aprobación en la Corte Constitucional. No en vano fue dando pasos importantes para ambientar su campaña reeleccionista. Aunque la desmovilización de las autodefensas era vista con desconfianza y rápidamente quedó en claro que el Estado no estaba a la altura de un desafío de tal magnitud, el

Ejecutivo creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, presentada como un escenario propicio para ayudar a las víctimas. Además, en septiembre, uno de los propósitos del presidente Uribe y sus seguidores empezó a cobrar forma: de la mano del dirigente liberal Juan Manuel Santos nació el Partido de Unidad Nacional o Partido de La U, para garantizar la reelección en las urnas.

Sólo faltaba el fallo de la Corte Constitucional para cantar victoria. La decisión fue anunciada el 19 de octubre de 2005. Después de estudiar 18 demandas y someter un proyecto de fallo a 62 votaciones, el alto tribunal encontró que el acto legislativo 02 de diciembre de 2004 por el cual se reformó la constitución para permitir la reelección presidencial inmediata, se ajustó a derecho. “La reelección presidencial implica más responsabilidades con el pueblo que con la historia”, fue el comentario del presidente Uribe al conocer la sentencia. Su posibilidad de convertirse en candidato y con toda seguridad Presidente de la República para el cuatrienio 2006-2010, quedó sujeta a que la misma Corte Constitucional le diera su aprobación a una ley de garantías electorales para que el Jefe del Estado no quedara en ventaja sobre sus opositores. Semanas más tarde, la Corte aprobó esa ley tramitada por sus mayorías y quedó despejado el camino hacia la reelección presidencial.

Finalizando el año 2005, crucial para las aspiraciones reeleccionistas de Álvaro Uribe, nada parecía opacar sus aciertos políticos. Aunque el futuro del proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno se mostraba incierto y crecía la oposición por sus crasos errores, desde Santa Fe de Ralito (Córdoba) o La Ceja (Antioquia), Salvatore Mancuso, Don Berna, Jorge 40, Ernesto Báez, Macaco y demás jefes paramilitares seguían en su juego a dos bandas. El proceso de paz les significaba blindaje frente a la justicia norteamericana y la colombiana y, en la clandestinidad, sus cuadros militares no desmovilizados seguían al frente del negocio del narcotráfico, además del accionar propiamente paramilitar. El gobierno ostentaba en sus discursos que gracias a la fuerza pública y, en particular, al Plan Patriota, estaba derrotando a la guerrilla, y había logrado sacar de la guerra a más de 20.000 paramilitares. Las encuestas le daban a Uribe una cómoda favorabilidad.

1.4 La pesadilla del das y la pelea con la corte suprema

El año 2006 comenzó sin mayores traumatismos para el gobierno. Desde las primeras encuestas que se realizaron sobre las elecciones presidenciales previstas para el mes de mayo, quedó claro no sólo el amplio favoritismo de Álvaro Uribe sino su sobrada victoria en primera vuelta. Sus antagonistas, Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático, y Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal, no tenían forma de darle pelea. A pesar de que la ley de garantías electorales lo obligó a suspender los consejos comunitarios en televisión y a restringir la contratación pública, en realidad el presidente Uribe no necesitaba muchos escenarios para ambientar su reelección. Además sus lugartenientes electorales conformaron un bloque político de sólidas maquinarias que desde el primer momento le garantizó el éxito en las urnas. El partido de La U, Cambio Radical, Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia y el Partido Conservador se la jugaron por su reelección presidencial.

Salvo la ruta incierta del acuerdo humanitario, cada vez más enrevesada por los obstáculos que las FARC y el gobierno le atravesaban siempre que se ambientaba la posibilidad de un despeje militar de los municipios de Pradera y Florida, en el Valle, nada parecía alterar el despejado panorama de la reelección presidencial. Las Fuerzas Militares estaban más satisfechas que nunca; los gremios económicos multiplicaban sus elogios a la acción de gobierno; entre altibajos y escándalos, de alguna manera avanzaba el proceso de paz con las autodefensas. La oposición crecía pero aún era insuficiente para opacar el buen momento del Ejecutivo; salvo los detractores y las excepciones de siempre, los medios de comunicación no tenían discrepancias mayores con el Gobierno; difícilmente algo podía empañar el horizonte del uribismo en el poder. Pero sucedió lo inesperado y el revés, que pronto se convirtió en una bola de nieve, llegó por donde menos se esperaba.

En una gestión de conRAINTeligencia, el director de informática del DAS, Rafael García, fue sorprendido alterando los archivos del organismo para borrar antecedentes de narcotraficantes. De inmediato fue entregado a la Fiscalía y sometido a un proceso penal, pero cuando el caso parecía convertirse en un simple caso de corrupción individual, se convirtió en un escándalo gigantesco. Rafael

García no quiso hundirse solo y la emprendió contra las directivas del DAS, encendiendo un ventilador que pronto alcanzó al director Jorge Noguera Cotes. A él y a sus segundos los acusó de haber puesto el DAS al servicio del paramilitarismo, no sólo entregándoles listas de sindicalistas u opositores del gobierno que debían ser asesinados, sino que aseguró que por órdenes del DAS había concretado acciones encaminadas a cometer fraudes electorales, a encubrir las acciones del paramilitarismo y a advertirlos de las operaciones que en su contra quería desarrollar la fuerza pública.

Extrañamente el escándalo no afectó las preferencias electorales pero si modificó radicalmente la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. La revista Semana publicó las develaciones del ex director de informática del DAS, Rafael García, y el presidente Uribe protagonizó un candente debate con el director de la publicación, Alejandro Santos. El Jefe del Estado lo calificó de irresponsable y frívolo. Otros medios de comunicación replicaron publicando más infidencias del escándalo del DAS. Jorge Noguera, quien había renunciado meses antes a la dirección del organismo, había sido nombrado cónsul en Milán (Italia). Su situación personal se volvió crítica. Hombre de confianza del presidente Uribe, como quiera que fuera su jefe de campaña en 2002 en el departamento del Magdalena, tuvo que salir a enfrentar el debate público con pésimos resultados. El escándalo nunca paró y empezó a minar las defensas del gobierno.

De ahí en adelante, aunque no se alteró el favoritismo de Uribe para su reelección, si cambió la acción de la justicia, los organismos de control y el periodismo. Las congresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda, antes animadoras del proceso de paz con las autodefensas, empezaron a tener dificultades para buscar un partido que les permitiera permanecer en el Congreso a partir de 2006. La empresaria del chance, Enilse López, más conocida como La Gata, fue detenida por la Fiscalía y acusada de los delitos de lavado de activos, tráfico de armas y patrocinio de grupos paramilitares en Sucre y Bolívar. Aunque las FARC seguían cometiendo atropellos como el asesinato de nueve concejales en Rivera (Huila) o el ataque a un vehículo de servicio público en Caquetá con la muerte de nueve civiles, los excesos del paramilitarismo y sus conexiones sociales empezaron a quedar al desnudo.

Como estaba previsto, con más del 60% de los votos, Álvaro Uribe ganó en primera vuelta las elecciones de mayo de 2006 y fue reelecto Presidente de Colombia, pero al tiempo que culminaba el proceso electoral se seguía agitando el ventilador del DAS. Gracias a las delaciones de Rafael García se supo que funcionarios de dicha entidad le pasaban información privilegiada a capos como del narcotráfico o el paramilitarismo como Diego Montoya y Miguel Arroyave, se probó como en las elecciones parlamentarias de 2002 ya funcionaba una estrategia del paramilitarismo para concertar las curules con los políticos de varias regiones. En particular comenzó a develar cómo funcionaba el ajedrez político del jefe paramilitar Jorge 40 en la Costa Atlántica y de qué manera el DAS le brindaba protección. Hasta una conspiración contra el gobierno de Venezuela se estaba gestando en el organismo de inteligencia, según las confesiones del ex director de informática.

De golpe cambió el rumbo y se produjo un hecho que agravó el panorama. La Corte Constitucional en una sentencia expedida en julio de 2006 le dio un toque de muerte a la ley 975 de 2005. La opción de la sedición para justificar el crimen paramilitar se cayó por error de forma. Ni siquiera por lo que significaba en términos de asimilar la violencia de la guerrilla y la del paramilitarismo. Esa decisión cambió la historia del accidentado proceso de paz entre el gobierno y las autodefensas. Las víctimas recobraron sus derechos y la verdad ha venido surgiendo desde la confesión y la reparación. Pero en julio de 2006, en la antesala de su segundo periodo presidencial con nuevo equipo de asesores, era enfrentar a los jefes paramilitares detenidos en las cárceles. La seguridad democrática siguió siendo el tema, pero el revés en el camino trazado hacia la desmovilización de los grupos de autodefensa, convirtió el proceso en un fracaso estruendoso.

En agosto de 2006, Álvaro Uribe Vélez se posesionó por segunda vez como Presidente de los colombianos. Se dio al mismo tiempo en que quedaba quebrantado el proceso de paz con las autodefensas. Varios jefes paramilitares desistieron y volvieron a sus andanzas. Ya no tenían opción en un presente que se volvió escándalo tras escándalo. La delación del uno la confesión de otro. La justicia con listas de centenares de personas asesinadas. Al desnudo las complicidades entre autoridades y AUC y la confirmación de las relaciones del DAS con el paramilitarismo. El destape cuando apenas asomaba el tiempo del segundo gobierno del presidente Uribe. Las ilusiones de paz y la esperanza de que los

secuestrados regresaran a sus casas que alimentaban por esos días ilusiones, se acabaron en octubre cuando estalló una bomba en la Escuela Superior de Guerra ubicada en el complejo militar del Cantón Norte, donde también se encuentran la Escuela de Infantería y la Universidad Militar Nueva Granada. 23 heridos que el gobierno convirtió en un portazo a las FARC.

El presidente Uribe desistió de cualquier propósito de acuerdo humanitario y ordenó rescatar a los secuestrados que estaban en manos de las FARC. Un trato abiertamente distinto al que se intentaba con el paramilitarismo que había perdido la brújula después del fallo de la Ley de Justicia y Paz. Aunque desde antes de la sentencia los negocios ilegales de los jefes paramilitares fuera de las cárceles prosperaban sin novedad, se les seguía tendiendo la mano para que no siguieran delinquiendo. Se hablaba de que la justicia había encontrado el computador personal de Jorge 40 con interesantes revelaciones de conexiones entre el Estado y las autodefensas. El ex director de informática del DAS, Rafael García seguía delatando sin reparo. Se fue creando un ambiente nacional donde había que investigar hasta encontrar de qué manera el paramilitarismo se había infiltrado en todos los sectores de Colombia. Por eso no fue espontánea la forma como el país entró en la bola de nieve del escándalo de la parapolítica y sus procesos conexos.

Unos dicen que las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno se dañaron de manera fortuita, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia en 2006, magistrado Yesid Ramírez, y el presidente Uribe tuvieron su rifirrafe. El jurista contestó a la revista Semana en septiembre que gracias al fallo de la reelección, “el presidente había preferido a la Corte Constitucional, y que la Suprema no se iba a convertir en una corte de bolsillo”. En su acostumbrado estilo el presidente Uribe contestó airado. Cuando la Presidencia de la República intentó remendar el saco roto que le quedó a la Ley de Justicia y Paz al caerse la opción de hacer pasar a jefes paramilitares y narcotraficantes por sediciosos, la Corte le agregó su propia interpretación y dejó claro que el delito imputado a jefes paramilitares, desmovilizados rasos y colaboradores no podía ser sedición sino concierto para delinquir. El presidente Uribe contestó diciendo que los magistrados fallaban con *sesgo ideológico*.

La pelea entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno quedó casada y los periodistas tuvieron notable protagonismo en esa confrontación. En los medios de comunicación y el Congreso, con el concurso activo del poder judicial en defensa de las víctimas, se armó el escándalo de la parapolítica. Los nexos entre el paramilitarismo y la sociedad, como el proceso 8000 en los años 90 del siglo XX que quiso investigar los nexos entre la sociedad y el narcotráfico. Los debates del senador del Polo, Gustavo Petro, que demostraron cómo se había gestado una cadena de masacres en el departamento de Sucre con la complacencia, omisión o apoyo de algunos dirigentes políticos. Cómo este patrón de violencia se parecía en diversas regiones. Los informes de Semana, El Espectador, Cambio, El Tiempo, Noticias Uno, que rápidamente pusieron contra la pared a un puñado creciente de dirigentes políticos que se habían beneficiado electoralmente permitiéndole al paramilitarismo su expansión militar.

Cuando llegó diciembre de 2006, apenas al cuarto mes del segundo gobierno del presidente Uribe, el proceso de paz con las autodefensas estaba en su peor momento, al borde de la ruptura. Con las FARC las puertas estaban trancadas y estallaba el escándalo que aún no cesa y ha seguido alimentado por una confrontación entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno. La parapolítica que antes de que cayera el telón del año dejó presos a los congresistas de Sucre, Álvaro García, Jairo Enrique Merlano y Eric Taboada. 59 ex comandantes de las autodefensas fueron concentrados en la cárcel de Itagüí, más de 3.000 estaban a la deriva esperando una solución porque ya no podían pasar por sediciosos. Y a la sombra, sin escarmiento después de los errores de Jorge Noguera en el DAS, el organismo ahora en manos de María del Pilar Hurtado, se convertía en aparato de inteligencia para impedir que la Corte Suprema de Justicia llegara hasta las últimas consecuencias en el escándalo.

1.5 La confrontación con la corte suprema y los periodistas

2007 llegó con buenas noticias para la sociedad. El ex ministro de comercio exterior en los tiempos de Andrés Pastrana, el líder conservador Fernando Araujo, se les escapó a las FARC que lo mantenían secuestrado y objeto de canje en la región de los Montes de María, en el departamento de Sucre. Dos meses después, como un homenaje del gobierno a los secuestrados, el presidente Uribe lo escogió

como canciller de la República. Un nuevo golpe político en su confrontación a las FARC que daba de qué hablar en los propósitos de su política de Seguridad Democrática. Un modelo de Estado para enfrentar el dilema de la violencia guerrillera, que compensaba el mal momento que vivían los aliados del Ejecutivo que empezaban a verse señalados y procesados en el escándalo de la parapolítica.

En febrero ya había crecido significativamente la lista de congresistas presos, la mayoría de ellos perteneciente a la región de la Costa Atlántica. A los congresistas de Sucre se sumaron pronto los de Córdoba. Reginaldo Montes, Miguel de La Espriella, Freddy Sánchez, Eleonora Pineda, Juan Manuel López Cabrales. Después los del Magdalena o Cesar, Alfonso Campo Escobar, Jorge Luis Caballero, Mauricio Pimiento. Todos de la convergencia de partidos uribistas, y entre ellos, el senador Álvaro Araujo Castro, hermano de María Consuelo Araujo, quien venía desempeñándose como canciller del segundo gobierno Uribe. El escándalo la hizo renunciar, y los procesos se comenzaron a multiplicar de manera acelerada. Los medios de comunicación tomaron parte activa en el momento de la justicia y algunas veces con documentos filtrados u otras por trabajo directo en las regiones, con las víctimas y también con los victimarios, empezaron a divulgar secretos muy bien guardados de la expansión paramilitar en Colombia.

El Pacto de Ralito firmado en julio de 2001 en esta población del departamento de Córdoba entre el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia y siete representantes a la Cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes, encaminado a la sumatoria de fuerzas para concretar la toma del poder político. La versión narcotraficante cobró forma como el Plan Birmania para reconocer que la fuente de financiación de la estrategia militar y política era financiada por el narcotráfico. Un plan repetido en varias regiones donde políticos y paramilitares sellaron alianzas para controlar el Congreso y expandir el aparato terrateniente y desplazador de las autodefensas. Producto de la Ley de Justicia y Paz, o motivado por las organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos con las víctimas, un tremendo escándalo que encontró en los medios de comunicación, especialmente los periódicos y revistas, suficiente despliegue y eco político.

El 17 de abril de 2007, el senador del Polo Gustavo Petro adelantó un fuerte debate en el Congreso para denunciar nexos del escándalo de la parapolítica en el departamento de Antioquia. Tratándose de la región del presidente Uribe y su primo Mario Uribe, señalado por la Corte Suprema de Justicia, el debate se convirtió en el tema mediático más importante del momento. Cinco días después, el senador Mario Uribe fue capturado por la Fiscalía. En agosto estaba libre por errores de la justicia, pero su caso, suficientemente ventilado en los medios de comunicación, se convirtió en un expediente de confrontación. El gobierno enfiló baterías contra el senador Petro y otros integrantes de la oposición, reclamando a la justicia que también abriera casos por la Farcpolítica, pues también era importante descubrir los nexos entre la clase política y la guerrilla. Un ambiente de polarización que fue creciendo de tono en los estrados de la política y los micrófonos de los medios.

Cada acontecimiento atizaba más el fuego de la confrontación política. El gobierno acusaba a la oposición de crear un ambiente de escándalo para auxiliar el “terrorismo agónico”; la oposición acusaba al Gobierno de perseguirla con el DAS y otras instituciones del Estado; y en los territorios de la guerra sólo había tiempo para seguir lamentando hechos infames. Como lo sucedido el 18 de junio de 2007, cuando murieron a manos de las FARC y en estado de indefensión, once de los doce diputados de la Asamblea del Valle que habían sido secuestrados desde 2002. La guerrilla nunca supo explicar porque los asesinó a sangre fría y en medio de su falta de argumentos le echó la culpa al gobierno por no promover el acuerdo humanitario para canjear rehenes de las Farc por guerrilleros presos en las cárceles. El Ejecutivo desplegó una ofensiva mediática para demostrar que la guerrilla no tenía vocación de diálogo y por ello no era posible pensar en acuerdos.

Un dolor colectivo que ayudó a ahondar aún más la confrontación ideológica y que sirvió como preámbulo al clímax de la disputa entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno. A comienzos de octubre de 2007, el presidente Uribe expidió un comunicado de prensa para advertir que supuestamente a través del magistrado auxiliar de la Corte Suprema e investigador de la parapolítica, Iván Velásquez, y con el apoyo de personal del CTI de la Fiscalía, querían involucrarlo en el presunto intento de asesinato de un jefe paramilitar. El caso Tasmania, como fue conocido posteriormente, se llamó así porque es el apodo del paramilitar José Orlando Moncada, quien fue la persona que dijo haber sido

presionada para que declarara contra el presidente Uribe. Meses después la justicia aclaró que fue un montaje para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, pero en su momento marcó la ruptura total en las relaciones entre el alto tribunal y el gobierno del presidente Uribe.

Desde entonces, las relaciones entre el gobierno y la oposición política, o el gobierno y los medios de comunicación, han estado enmarcadas en la confrontación entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo por los avances en el escándalo de la parapolítica. Después del caso Tasmania vino el enfrentamiento personal entre el presidente de la Corte, magistrado César Julio Valencia y el presidente Uribe, con denuncia de por medio desde la Casa de Nariño. Y paralelamente una sucesión de capturas, entre congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores que estuvieron vinculados con el paramilitarismo. Como era de esperarse, el proceso de paz entre el gobierno y las autodefensas, al menos el capítulo correspondiente a los máximos jefes del paramilitarismo, entró en un estado agónico. Sólo era esperar a que se diera un desenlace correspondiente a la crisis.

Del otro lado de la guerra, en el terreno de la guerrilla de las FARC, también a partir de mediados de 2007 empezó a fortalecerse la discusión en torno a la necesidad de buscar un acuerdo humanitario o persistir en los rescates militares. El primer paso lo aportó el Ejecutivo en agosto, cuando el presidente Uribe aceptó la mediación de la senadora Piedad Córdoba para buscar ese acuerdo. A su vez, la congresista logró que se integrara al proceso el presidente de Venezuela Hugo Chávez. El tema adoptó una dinámica inesperada y hasta el jefe guerrillero Iván Márquez visitó el Palacio de Miraflores en Caracas. Sin embargo, en noviembre de 2007, Uribe canceló la mediación de Hugo Chávez porque no aceptó que éste quisiera establecer comunicaciones directas con el alto mando militar. Aún así, el proceso logró avanzar y en febrero de 2008, en medio de un debate público, se logró la liberación unilateral de seis de los secuestrados políticos.

1.6 De la operación jaque al presente

A pesar de que 2008 había comenzado con expectativas de llegar a acuerdos humanitarios con las FARC, el asunto se canceló a partir del 1 de marzo de 2008, cuando las Fuerzas Armadas desarrollaron en territorio ecuatoriano la llamada “Operación Fénix”, en la que resultó muerto en un bombardeo el llamado canciller de las FARC y uno de sus principales líderes, Raúl Reyes. La acción en la que murieron 16 personas más, entre guerrilleros y visitantes al campamento de Reyes ubicado en la región de Angostura, precipitó una crisis diplomática con Ecuador que se mantiene latente pues no han sido plenamente restablecidas las relaciones entre las dos naciones. A la pugna con Ecuador se sumaron Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y el tema trascendió las fronteras hasta convertirse en un asunto de discusión latinoamericana.

Fueron largos meses de discusión política, con una opinión pública que ya empezaba a dividirse radicalmente. Y para ponerle más fuego a la leña, los partidarios del presidente Uribe empezaron a recoger firmas en las calles de Colombia, para llevar al Congreso el trámite de una ley de referendo que le permitiera al presidente Uribe postularse para un tercer mandato a partir de 2010. En medio de la parapolítica, del escándalo del DAS y sus chuzadas y seguimientos a la Corte Suprema de Justicia, de la discusión internacional con Ecuador y Venezuela, incrementada con el anuncio de adecuar siete bases militares colombianas para la cooperación de Estados Unidos, y otras cuantas confrontaciones más, la opinión pública se polarizó del todo. En parte el periodismo tomó parte activa en este antagonismo. La prensa escrita, la radio y la televisión promovieron la discusión sobre todos estos asuntos que acapararon los titulares de los espacios informativos.

Como si todo lo anterior no fuera crítico, en abril de 2008, la ex congresista Yidis Medina, recordada porque su voto había sido decisivo para que la reelección presidencial pudiera darse en 2006, rompió su silencio para admitir que sí había recibido dádivas del gobierno para cambiar su determinación en el Congreso. De inmediato intervino la Corte Suprema de Justicia y en dos meses, con el avance de la confesión, ya estaba condenada. Lo mismo sucedió con los congresistas Iván Díaz Mateus y

Teodolindo Avendaño. Y como quedó probado que los congresistas recibieron ayudas burocráticas a cambio de sus votos en el Congreso, configurándose en delito de cohecho, la Corte Suprema de Justicia pidió que fueran investigados los funcionarios de la Casa de Nariño que entregaron esas dádivas. Desde entonces con investigados los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, además de otros altos funcionarios.

Este escándalo judicial, desde entonces conocido como la “Yidispolítica” ha animado otra faceta de debate: la utilización de notarías para pagar favores políticos. Nuevos asuntos que han sido ampliamente comentados en los medios de comunicación, creándole más dificultades al gobierno. De una u otra manera, la opinión se empezó a fragmentar a raíz de los errores del proceso de paz entre el gobierno y las autodefensas, que después del tema de la parapolítica, se tornó aún más turbio. Cuando el gobierno entendió que sostener a los jefes paramilitares en Colombia era más conflicto que alejarlos, cuando comprendió que sus revelaciones podían causar una crisis infinita, el 13 de mayo de 2008, argumentando que se habían sostenido en el negocio del narcotráfico, decidió extraditar a los 15 principales jefes. Salvatore Mancuso, Macaco, Don Berna, Hernán Giraldo, Jorge 40, Gordolindo, El Tuso Sierra, entre otros, terminaron en diversas cárceles de Estados Unidos. Con ellos se llevaron las verdades de su guerra y su barbarie en Colombia.

Más dificultades para el Ejecutivo y nuevas razones de discusión pública. Entre la parapolítica con cerca de un centenar de dirigentes políticos presos; la yidispolítica tocando judicialmente a altos funcionarios de la Casa de Nariño; los excesos del DAS que involucraron como objetivos de espionaje a opositores políticos, periodistas, organizaciones de derechos humanos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia; las confrontaciones entre el alto tribunal y el gobierno con denuncias mutuas; los dilemas permanentes con Ecuador y Venezuela por las operaciones militares de Colombia contra las FARC; los reclamos de la opinión pública pidiendo alguna solución al interminable cautiverio de los secuestrados políticos de las FARC; y los dilemas propios de gobernar a un país con tanta deuda social; el Ejecutivo necesitaba un segundo aire para aliviar la crisis.

Llegó con éxito a bordo. El 2 de julio de 2008, mediante una exitosa operación de inteligencia militar, las Fuerzas Armadas desarrollaron la llamada “Operación Jaque” que le permitió al Estado lograr la liberación, sanos y salvos, de 15 de los secuestrados políticos de la FARC. Entre los liberados estuvieron la candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres contratistas norteamericanos que permanecían cautivos desde 2002, siete miembros del Ejército y cuatro integrantes de la Policía. Los sinsabores de los últimos tiempos tuvieron una enorme tregua. La opinión pública nacional e internacional felicitó al gobierno colombiano y las FARC sufrieron una estruendosa derrota. Desde ese día hasta hoy, la “Operación Jaque” representa el argumento central de defensa del presidente Uribe y su modelo de seguridad democrática. Y para la gente del común, este asunto es determinante. Siempre y cuando se pueda derrotar a las FARC, muchas personas sienten que los demás escándalos son políticos y buscan desacreditar al gobierno.

Lo demás es historia reciente. El referendo para que Uribe aspirara a un tercer mandato se hundió en la Corte Constitucional por errores de forma. La confrontación entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno se sostiene con graves consecuencias institucionales como la larga internidad en la Fiscalía General de la Nación y el descrédito absoluto del DAS, al confirmarse que fue utilizado para infiltrar al alto tribunal y hacerle seguimientos indebidos. La parapolítica no para y, por el contrario, cada día involucra a más dirigentes políticos. Ya se habla de la paraeconomía, a fin de investigar quiénes fueron los empresarios que financiaron al paramilitarismo. La Yidispolítica promete nuevos apremios pues ya fue llamado a juicio el ex ministro del interior, Sabas Pretelt de La Vega. Los últimos dos años han demostrado lo que significa el desgaste del poder. Entre el primero y el segundo gobiernos del presidente Uribe hay muchas diferencias y en parte todas ellas han sido magnificadas, comentadas o simplemente registradas por los medios de comunicación.

Han sido ocho años de intensas discusiones. Para bien o para mal, el presidente Uribe ha estado en el centro de ese debate. Hay quienes piensan que deja un legado histórico y que será reconocido como uno de los más importantes líderes de Colombia. Otros estiman que su gobierno fue un desastre y que la crisis de derechos humanos llegó al punto más alto. Unos dicen que enfrentó a las FARC y logró retardarles su proyecto guerrillero por lo menos dos décadas. Otros expresan que los falsos positivos, la

Yidispolítica, la parapolítica, el caso Tasmania, los excesos del DAS, Agro Ingreso Seguro, demuestran que se gobernó justificando los medios para alcanzar fines políticos. Mucho dará de qué hablar el gobierno del presidente Uribe en los años venideros. Las encuestas de opinión dicen que termina con más del 70% de favorabilidad. Otros dicen que des institucionalizó a Colombia. Lo cierto es que por mucho tiempo se seguirá hablando de Uribe, sus aciertos y sus errores.

En esos ocho años estuvo el periodismo. Unas veces callando y otras en el oficio de indagar, comprobar y publicar los hechos que determinaron muchas decisiones de un gobierno que se equivocó en los métodos. Noticias Uno cumplió un papel contradictor. El Espectador y el Nuevo Siglo contaron cosas. Semana fue protagónico. El Tiempo cambió de Santos a Planeta. Los informes centrales de la parapolítica, la yidispolítica, los falsos positivos, el DAS, son la contribución del periodismo a una verdad construida por la historia. Quedan las evidencias de lo que pasó en los últimos tiempos porque el país cambia y es el presente el que construye. La era Uribe está concluyendo y el periodismo sigue ahí, en lo que va, recogiendo nuevas evidencias de todo lo que pasa, lo malo y lo bueno, los saldos de un país que ahora debe pensar en si mismo para cambiar todo lo que sea necesario.

II

Defensores y Contradictores

Desde que Álvaro Uribe Vélez asumió el poder en el año 2002, los medios de comunicación en general y los periodistas en particular se han manifestado tanto a favor como en contra de sus políticas como Presidente de la República. De alguna manera, esas voces reflejadas a través de informaciones y posturas editoriales contenidas en centenares de expresiones escritas, radiales o televisadas, han contribuido notablemente a la definición de una opinión pública dividida. Entre denuncias o exaltaciones de sus errores y aciertos, los colombianos se han venido forjando una impresión general o pormenorizada de los últimos años de gobierno.

Así como la opinión pública ha venido calificando a algunos medios como abiertamente gobiernistas u opositores a ultranza del gobierno Uribe, también a lo largo de los últimos ocho años se ha visto el protagonismo de periodistas y columnistas de opinión que se han mostrado muy sesgados en su criterio. O claramente defensores del gobierno, incluso de sus yerros o definitivamente opositores a cualquiera de sus realizaciones, sin reconocerle siquiera aspectos que la comunidad internacional acepta sin la misma polarización interna. De alguna manera esas posiciones contrarias reflejan lo que ha sucedido en Colombia durante la era Uribe: una sociedad dividida frente a las realizaciones de un mandatario que acierta tanto como polariza.

Las opiniones generales de algunos periodistas evidencian de entrada este panorama. Gerardo Aristizábal, ex editor político de la revista Cambio, cerrada hace algunos meses por aparentes razones económicas que muchos creen políticas, piensa que el presidente Uribe y su gobierno le ha dado a sus relaciones con los medios de comunicación “un manejo de polarización, de confrontación, donde el Presidente aplica muy bien aquella frase que dice que él que no está conmigo, está contra mí. Cuando no puede convencer a los medios o volverlos afines a su gobierno, los insulta, los maltrata, y en el fondo sabe que eso le da réditos entre la opinión pública que sigue fielmente sus directrices. La estigmatización al opositor es la forma de hacer política del presidente Uribe y lo aplica frente a los

televidentes en un país donde muchos siguen creyendo en su figura política y escuchan al Presidente como el portador de un estilo nuevo”.

En contraste, el periodista Libardo Cardona, corresponsal de la agencia internacional Associated Press (AP), señala que “la oposición ha tenido todas las garantías para ejercerla. Se han presentado circunstancias dolorosas, pero estoy seguro que no han sido promovidas por el presidente Uribe, como por ejemplo los abusos del DAS”. Y añade con convicción: “Creo que la oposición en Colombia, particularmente en el gobierno del presidente Uribe ha tenido todas las garantías posibles, incluso se han pasado, a diferencia de otros países donde personajes como Rafael Correa, Hugo Chávez o Daniel Ortega, no dejan hacer oposición”. Es la visión de un comunicador que considera que buena parte de los excesos que se le atribuyen al gobierno son magnificados por sus opositores, muchos de ellos periodistas.

En términos de libertad de expresión, los criterios siguen adversos. Hugo García, editor político de El Espectador, manifiesta: “El Presidente dice que no censura, que aquí hay libertad, que la oposición tiene todas las libertades para pronunciarse, que los columnistas de oposición tienen toda la libertad para decir lo que quieren, pero no sé hasta qué punto se pueda hablar de libertad de expresión cuando el asesor José Obdulio Gaviria escribe una columna diciendo que todos los que escriban en contra del Presidente son un poco de ignorantes que se la pasan tomando whisky y rascándose la barriga. Y uno ve que hay amenazas. Daniel Coronel escribe, pero está amenazado. Si la libertad de expresión es escribir lo que uno quiera, por qué hay amenazas contra Antonio Caballero, contra Ramiro Bejarano, contra Alfredo Molano”.

Contrario a ello, el ex asesor presidencial y columnista de El Tiempo José Obdulio Gaviria piensa que el tratamiento que el presidente Uribe le ha dado a la libertad de expresión durante su mandato ha sido correcto. “Absoluto, no tiene una sola fisura que le haga ver como una persona que no garantice libertad de expresión. De hecho, como él entra en el debate público como contradictor, genera las posibilidades más adecuadas para que se de ese derecho. Algunos paranoicos que simplemente no

saben participar en el debate político lo ven al contrario, lo ven como que quien desde la Presidencia o desde el gobierno los contradice violando las leyes de la democracia y los derechos de opinión, pero están equivocados porque no controvierten”.

Lo cierto es que más allá de las posturas polarizadas respecto al presidente Uribe y su gobierno, durante ocho años se han presentado un sinnúmero de escándalos donde la imagen del Presidente y su gobierno dejan mucho de qué hablar. Las interceptaciones ilegales, el fallido manejo del DAS o los falsos positivos, son graves excesos y desaciertos que no dejan un saldo optimista ante la opinión pública. Sin embargo, desde la perspectiva mediática, la lectura es bien distinta. Según Vicky Dávila, directora de la FM Radio, “Uribe se le acerca a la gente y tiene el programa Familias en Acción que le ayuda. César Gaviria decía que ese era el chequecito para hacer campaña. Yo no me meto en esas honduras, pero sostengo que Uribe es una persona muy cercana a la gente. En Colombia había mucha desesperanza, mucha desilusión, la gente no podía ir a una finca a quince minutos de la ciudad”.

Sobre el mismo punto, Ignacio Gómez, sub director del noticiero de televisión Noticias Uno y director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) opina: “Los problemas de estrechez de la participación mediática en el gobierno Uribe se los atribuyo a la misma crisis de libertad de expresión en los últimos años, es decir, el periodismo durante la crisis de los dos gobiernos del presidente Uribe básicamente perdió criterio, perdió capacidad para cuestionar al Ejecutivo y eso permite que puedan salir los escándalos más grandes sin que pase nada. Al otro día va a salir un espectáculo con el cual abre un noticiero, o un show presidencial en directo para hacer lo mismo y lograr efecto. Yo creo que el asunto fundamental es que el Presidente está manejando los medios de comunicación casi como un monopolio y eso le da una especie de inmunidad que a todas luces se torna anti democrática”.

Además, agrega Ignacio Gómez, la relación entre el presidente Uribe y los medios de comunicación cambió sensiblemente a partir del momento en que el gobierno y su bancada en el Congreso empezaron a buscar un tercer mandato modificando la Constitución con el argumento de que en Colombia existe un Estado superior al Estado de Derecho que es el Estado de Opinión. “En otras palabras, que la

voluntad de las mayorías está por encima de la Carta Política puesto que las mayorías encarnan la democracia”. Sobre esta tesis, desde la misma Casa de Nariño quedó planteada una nueva relación con la sociedad que puso a los medios de comunicación a tomar partido a favor o en contra del Jefe del Estado. Aún así, la periodista Vicky Dávila, directora de la FM Radio y periodista de RCN Televisión, al referirse a la validez del Estado de Opinión como base de un tercer mandato, concluyó: “Todo lo que sea para que el Presidente Uribe se quede no me parece válido”.

Ahora bien, uno de los escenarios que más ha incentivado la polarización ciudadana ha sido el denominado choque de trenes entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia. Aunque hay quienes atribuyen el origen de las discrepancias al cruce de opiniones entre el entonces presidente de la Corte, magistrado Yesid Ramírez Bastidas y el presidente Uribe cuando concluía el primer mandato del actual gobierno, por cuenta de la preferencia que el Jefe de Estado observó con la Corte Constitucional para facilitar su reelección, lo cierto es que con el comienzo del escándalo de la parapolítica a finales de 2006, la tensión se hizo pública. En 2007 vino el enfrentamiento personal entre el presidente Uribe y el magistrado César Julio Valencia, con denuncia penal de por medio motivada por el rechazo del Primer Mandatario a los comentarios del magistrado, según los cuales Uribe lo había llamado a averiguar por el proceso que hoy tiene en prisión a su primo, el ex senador Mario Uribe Escobar.

Después vino el caso Tasmania a mediados de 2007, cuando desde la Casa de Nariño se emitió una declaración pública para asegurar que el magistrado investigador de la Corte, Iván Velásquez Gómez, en compañía de investigadores del CTI, estaba ofreciéndole rebajas procesales a un convicto de paramilitarismo con tal de que incriminara al Presidente de la República en el intento de asesinato de otro procesado. El escándalo propició una investigación en la Fiscalía General de la Nación que, meses después, concluyó que tales ofrecimientos no habían existido y que todo fue un complot para desprestigiar las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento ya las relaciones entre los dos poderes públicos se agrietaron del todo. Luego vino el escándalo de la Yidispolítica que dejó al desnudo que el gobierno entregó dádivas a algunos congresistas que fueron definitivos para hacer aprobar la reelección presidencial, y el tono de las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno se volvió de abierto antagonismo.

Ya en 2009, el asunto se puso peor cuando los medios de comunicación revelaron que funcionarios del DAS y de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF), habían participado en seguimientos e investigaciones contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, con el escándalo de la parapolítica arreciando y el DAS en una etapa de desprestigio que pide a gritos su disolución, la confrontación sigue al orden del día y el periodismo ha convertido el hecho en tema cotidiano. No obstante, más allá de sus micrófonos o pantallas de computador, a título personal, la opinión de los comunicadores recoge que ni siquiera en este candente tema existe consenso. Por el contrario, defensores y contradictores a ultranza de las políticas del presidente Uribe Vélez difieren notablemente a la hora de argumentar por qué en una sociedad como la colombiana, el Poder Ejecutivo y la cúpula del Poder Judicial siguen protagonizando una disputa en la que los únicos ganadores son los ilegales.

Por ejemplo, el periodista de la agencia AP, Libardo Cardona, señala: “La Corte Suprema de Justicia le ha hecho mucho daño a la democracia y no ha podido tumbar al presidente Uribe. Además se ha convertido en un partido político, con personajes extraños como el magistrado Yesid Ramírez o tipos que dan risa como el ex presidente Augusto Ibáñez, un político fracasado que se presentó a las elecciones legislativas de marzo de 2006 por Cambio Radical y apenas sacó 2.308 votos”. Vicky Dávila, de RCN Televisión, por su parte, opina acerca de la afectación, que dicha pelea pudo haber otorgado a la gobernabilidad del Presidente. Sin embargo añade: “No creo que se trate de afectar la gobernabilidad o no en la Casa de Nariño, lo que creo es que ojalá esa pugna se acabe y el gobierno respete las decisiones judiciales. Lo más importante que tiene un país y una democracia son sus instancias judiciales y sino respetamos las decisiones de la Corte Suprema de Justicia estamos fregados”.

El analista político, ex asesor de la Casa de Nariño y columnista del periódico El Tiempo, José Obdulio Gaviria ve las cosas desde su opinión particular: “Lo de la Corte Suprema de Justicia ha tenido un efecto desastroso sobre la democracia colombiana. La Corte prácticamente ha comenzado a crear un ambiente de gobierno de las cortes en Colombia, o sea, del involucramiento de la Corte en decisiones políticas, en decisiones administrativas, y eso es terrible. Lo que pasa es que tal vez es tan fuerte la

presencia del Ejecutivo que eso no alcanza a hacer notar la gravedad de la crisis. Pero yo diría que sí es muy grave. Es muy grave y va a tener unos efectos de casi que de desastre sobre el Estado colombiano”. Cabe advertir que José Obdulio Gaviria ha sido uno de los más acérrimos escuderos del presidente Uribe Vélez y que en múltiples ocasiones ha enfrentado públicamente a sus contradictores, varios de ellos periodistas o columnistas de opinión, por su defensa del gobierno.

Una voz más atemperada, la del ex director de la revista Cambio, Rodrigo Pardo García Peña, manifiesta: “Por cuenta de esa desgastante pelea hoy tenemos un Fiscal interino, hay discrepancias con el gobierno de Estados Unidos por la aplicación del Tratado de Extradición y el choque permanente entre diferentes dignatarios. Yo creo que sí ha afectado mucho al Estado y a la sociedad. En un sistema parlamentario, si se presentara este choque de trenes, habría un Rey, como en el caso de España, o un presidente como en el caso de Alemania, que podría entrar a mediar entre los poderes ejecutivo y judicial. Pero cuando el Jefe del Estado es además el jefe de gobierno y este además actúa como líder de una fracción de la sociedad, que algunos llaman el uribismo y no de toda la sociedad como lo ordena la Constitución Nacional, pues no hay árbitros que valgan y los conflictos interinstitucionales se profundizan y se prolongan sin solución, como sucede hoy en el país”.

En el fondo la pelea tiene que ver directamente con la parapolítica, que sigue desnudando los vínculos que muchos políticos tuvieron con el paramilitarismo. Con un agravante, como lo admiten los propios periodistas, es improbable que este escándalo judicial esté por terminar. Por el contrario, en la medida en que sigan saliendo a flote las verdades de la Ley de Justicia y Paz, seguramente más nombres van a seguir desfilando en los estrados judiciales y en los medios de comunicación. Al menos así lo cree Ignacio Gómez: “No creo que el escándalo de la parapolítica esté terminando. Yo diría que apenas está comenzando porque la Corte Suprema de Justicia está admitiendo como jurisprudencia que lo sucedido es equiparable a un crimen de lesa humanidad. Desde esta óptica, es claro que no está bien decapitar personas para que voten o no lo hagan por determinados políticos y, mucho menos, que esos políticos puedan conservar su poder electoral dentro del Congreso”.

En esta misma perspectiva, el editor político del periódico El Espectador, Hugo García, observa: “El escándalo de la parapolítica va a llegar a su fin el día en que se destape cuáles fueron los empresarios que financiaron a los paramilitares, y el día que se destape totalmente quiénes fueron los militares y la gente que desde los altos cargos del poder público también los apoyaron. Los políticos involucrados son apenas el primer eslabón. Volvemos al mismo cuento de la hipocresía nacional. Aquí todos dicen que dejemos ahí. Extraditamos a los principales jefes paramilitares que se llevaron toda la verdad a Estados Unidos, pero todos sabemos que aquí hay también grandes empresarios que apoyaron decididamente la expansión paramilitar. El día que se destape eso se acaba el escándalo de la parapolítica”. Y como avanzan las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia es altamente probable que esta situación persista. Además la Ley de Justicia y Paz apenas va en la etapa de las imputaciones.

La dimensión de este escándalo la plantea el periodista del canal Caracol, Jorge Alfredo Vargas, en los siguientes términos: “Este escándalo de la parapolítica es peor que el proceso 8.000 en los tiempos de Ernesto Samper. Lo increíble es que ya va el 40% del Congreso procesado y no ha pasado nada de fondo”. Quizás lo dice porque a pesar de la gravedad del asunto, en particular al presidente Álvaro Uribe no parecen afectarle las delaciones y detalles de la parapolítica. Su primo y compañero de campañas políticas, el ex senador Mario Uribe está en la cárcel. Su secretario en la gobernación de Antioquia, el ex senador Rubén Darío Quintero, fue condenado. Muchos miembros de su bancada en el Congreso han corrido la misma suerte. Y qué decir de la Yidispolítica o del escándalo del DAS. Su ex ministro de gobierno Sabas Pretelt de La Vega acaba de ser llamado a juicio y su secretario en la Presidencia, Bernardo Moreno tiene que responder a la justicia por el caso de los seguimientos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, respecto al presidente Uribe, al menos por ahora, prevalece la sensación de haberle devuelto la confianza a los ciudadanos. Al menos al hacer una comparación con otros mandatarios recientes de Colombia, así lo define el periodista Hugo García: “Como se dice en el argot político, Uribe es un animal político, él no llegó por casualidad a la Presidencia. Su proyecto era ser Presidente de la República desde que estaba en el Senado en los años ochenta. Comparado con otros presidentes,

el supo capitalizar la inconformidad que quedó en el país por el mal manejo que le dio Andrés Pastrana a su negociación con las FARC. Y ha seguido su línea de derecha, de mano fuerte, de mano dura, de ser intransigente y de no ceder ni un minuto frente a la guerrilla, aunque ello implique el sacrificio de los que están secuestrados”. En otras palabras, una visión vista desde la seguridad que es quizás el reclamo mayoritario de los colombianos. Al fin y al cabo para eso eligieron dos veces a Álvaro Uribe Vélez.

A su vez, Luz María Sierra, Editora General de la Revista Semana, lo plantea en otros términos: “La historia da muchas vueltas y hay personajes que terminan su gobierno muy bien y luego la historia se encarga de destapar cosas absurdas. O hay quienes terminan no muy bien y la historia se encarga de recompensarlos con creces. En el caso de Uribe, yo pensaría que habrá que ver qué pasa con las FARC. Si las FARC se quiebran, la historia recordará a Uribe como el hombre que les dio el golpe de gracia, pero si se logran rencauchar pues su legado será menos importante”. Un diagnóstico que aunque visto con cierta incertidumbre frente al futuro inmediato, no deja de volver al mismo escenario, el de la seguridad y, más específicamente, de la lucha del Estado contra la guerrilla de las FARC que, sin duda, sigue siendo el tema crucial para la mayoría de los colombianos, al menos desde el imaginario que plantean los medios de comunicación.

Pero la comparación que plantea el periodista Ignacio Gómez es enteramente distinta. “Yo creo que Uribe tiene muchas más similitudes que diferencias con el resto de mandatarios de América Latina, al menos de lo que hoy están llamando como los integrantes del movimiento de los neos populistas. No veo mayores diferencias. Si se mira el modo de actuar o de pensar, entre Uribe y Chávez, ideológicamente están distantes pero en estilos se parecen. Tampoco veo muchas diferencias entre Uribe y Evo Morales o entre Hugo Chávez, Álvaro Uribe y Rafael Correa. Inclusive con los Kirchner, Lula Da Silva o Manuel Zelaya. En el fondo a todos los seduce la misma tesis del Estado de Opinión para reelegirse. Lo que representan en el fondo son modelos populistas que se repiten y que, valga la pena decirlo, amenazan la democracia en América Latina. Todos ellos en su conjunto e individualmente cada uno en su país”.

El escudero del Presidente, José Obdulio Gaviria, sale una vez más en defensa del Presidente y plantea su propio paralelo respecto a otros mandatarios: “Uribe tiene una cualidad. Él es un gobernante que representa un cuerpo de doctrina. En el escenario latinoamericano, hoy el terrorismo no es denominado como se lo merece. Por el contrario, todavía existe una fuerte tendencia que lo considera insurgencia justa con la cual es necesario negociar, algo así como un partido político con armas. El presidente Uribe desterró ese punto de vista de su discurso y creo que del discurso mayoritario de Colombia. Además su política de Estado comunitario cuajó y le permitió muchísimo contacto con los sectores sociales, económicos y políticos del país, sobre todo aquellos que están en los departamentos, en las ciudades menores. Eso hizo que se desplazara mucho el núcleo de poder de Bogotá y que se expandiera por el territorio. Eso se expresa en el hecho de que hoy se abre paso una actividad administrativa fuerte en casi todo el país, particularmente en el manejo de las obras públicas, en la recomposición del sistema de salud o en el fortalecimiento del aparato educativo”.

El pensamiento del ex editor de la revista Cambio, Gerardo Aristizábal, no es muy diferente a los conceptos anteriores: “Uribe tiene una ventaja y es que le devolvió la confianza a la gente después de un periodo de incertidumbre muy grande. Lo curioso es que en parte terminó ejecutando las políticas de Andrés Pastrana en cuanto al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Es más, muchos funcionarios pastranistas hicieron transito al gobierno Uribe. Sin embargo es a Uribe a quien se reconoce por lo que hizo en materia de seguridad. Es cierto que la gente lo tiene muy bien catalogado, es decir, popularmente y según lo que marcan las encuestas, tiene favorabilidad. Y ese blindaje de opinión pública opera como especie de teflón del Presidente, pero no propiamente como teflón de su gobierno. Reiteradamente en las encuestas Uribe sale bien y el gobierno mal, lo cual es curioso porque él es el jefe de gobierno. Es como si él mismo le hiciera oposición al gobierno”.

De todos modos, cuando empiecen los balances de ocho años de gobierno del Presidente Uribe se dirá que el país avanzó en seguridad; que no se ganó la guerra contra las FARC pero si se pudo hacerles frente como la sociedad lo demandaba; que la economía se manejo responsablemente aunque no cambiaron significativamente los índices de pobreza, marginalidad o atraso social; y que lo que el presidente Uribe exalta como “la confianza inversionista”, hoy se refleja en mayor inversión

internacional que también es necesario para una sociedad en vía de desarrollo. Pero también se dirá que al menos en su segundo gobierno lo cercaron los escándalos, de alguna manera, relacionados con el errático manejo que le dio al fallido proceso de paz entre el gobierno y los grupos de autodefensa. Las verdades a retazos que se han venido ventilando en la Ley de Justicia y Paz, son necesarios en materia de memoria pero están dando al traste con un Estado que permitió el surgimiento del fenómeno paramilitar.

Un capítulo aparte lo amerita el análisis de las relaciones internacionales. A pesar de que habitualmente no son un punto importante a la hora de evaluar a un mandatario por los conflictos con Venezuela y Ecuador, no cabe duda que en el caso del presidente Uribe representan otro factor a tener en cuenta. Esto piensan los periodistas. Gerardo Aristizábal, de la desaparecida revista Cambio define este aspecto con un calificativo contundente: “Pésimo, no hay Cancillería, terrible. No hay cancillería porque Uribe tiene la manía de meterse en todo. Todo quiere manejarlo, no delega y hoy tenemos una permanente confrontación política y diplomática con los países vecinos. Puso todos los huevos en la canasta de Estados Unidos, que desde los tiempos de Pastrana impulsaba el Plan Colombia y hoy parece una isla en el continente”. Claro está que el tema tiene que ver directamente con la operación militar contra el jefe de las FARC Raúl Reyes, que se llevó a cabo en territorio ecuatoriano en marzo de 2008.

A pesar de ello, José Obdulio Gaviria tiene otra visión: “Han sido muy difíciles las relaciones con los vecinos porque nosotros estamos en minoría política en América Latina. Eso se refleja en el debate que tenemos con Ecuador y Venezuela, un debate ante el que la gran mayoría de mandatarios suramericanos o son neutrales o tienden a ser más cercanos conceptualmente a Chávez y Correa. En ese escenario, manejar unas relaciones no es fácil. El éxito ha sido que no haya habido aislamientos ni rompimientos. Se han acrecentado mucho las relaciones con Centroamérica, estamos en el Plan Puebla Panamá que tiende a convertir la región hasta México en una sola economía, las relaciones con Estados Unidos han sido buenas y con Europa son inmejorables. Pero en América Latina el tema no es fácil”. En el fondo es el tema de la confrontación armada con las FARC el que modifica el panorama porque detrás de la neutralidad de los vecinos está la forma como los gobiernos del continente encaran un problema que no les toca y en el que nadie quiere verse involucrado directamente.

En síntesis, se advierte que la relación entre los medios de comunicación y el gobierno Uribe se ha visto caracterizada por los apremios políticos y económicos, con una clara diferencia entre los dos gobiernos. En el primero, se dio una especie de solidaridad mediática con las acciones del gobierno, sobre todo por la ofensiva contra la guerrilla de las FARC. Incluso en el debate electoral del referendo contra la corrupción y la politiquería que fracasó en octubre de 2003, los medios de comunicación fueron complacientes con el Jefe del Estado y hasta le permitieron participar en programas pregrabados que nada tenían que ver con espacios informativos o de opinión. Por el contrario, algunos periodistas opositores, sobre todo columnistas de opinión, fueron blanco de los ataques verbales del Jefe de Estado, como lo hizo contra sus opositores políticos. Esta circunstancia fue determinante para que fuera cambiando paulatinamente la relación Poder Ejecutivo-Medios de comunicación.

En otras palabras, a varios periodistas e incluso medios de comunicación le sucedió lo mismo que a varios dirigentes políticos, incluso candidatos presidenciales. Inicialmente fueron muy condescendientes y cercanos con el Primer Mandatario, pero después fueron tomando distancia hasta irse a la oposición. Casos como el director de Noticias Uno Daniel Coronel o el columnista de El Espectador Ramiro Bejarano, son distintos. En su relación con el Ejecutivo no han existido términos medios. De principio a fin han sido opositores radicales. Como también ha sucedido con columnistas como José Obdulio Gaviria, Plinio Apuleyo Mendoza o Alfredo Rangel. Cualquiera sean las posturas del gobierno, siempre lo han defendido a capa y espada. Que es lo que se advierte en general de la sociedad colombiana: se ha venido polarizando con el paso de los días. Hoy podría decirse que se advierte un uribismo y un anti uribismo, en parte condicionados por los medios de comunicación y sus reportes.

A partir del segundo gobierno, el esquema empieza a modificarse. Los errores en la conducción del proceso de paz entre el gobierno y los grupos de autodefensa y posteriormente el escándalo de la para política, trazaron una línea divisoria casi que implacable. Defensores y detractores sin matices. Si a ello se suman después la sucesión de escándalos como la misma parapolítica, la yidispolítica, los falsos positivos, el caso Tasmania, Agro Ingreso Seguro o los excesos del DAS, no cabe duda que el ambiente se tornó de total distanciamiento entre el gobierno y algunos medios. Por ejemplo, con la revista

Semana. Todavía se recuerda el enfrentamiento verbal entre el presidente Uribe y el director de Semana, Alejandro Santos, al igual que lo había hecho en anteriores ocasiones con Daniel Coronell. La descalificación del Jefe del Estado a sus antagonistas en los medios de comunicación, tachando de *frívolos* sus informes e incluso defendiendo públicamente a los señalados en las investigaciones. Un aire de pugnacidad que terminó por agravar aún más las relaciones gobierno-medios.

Si a ello se suma el difícil ambiente que ha prevalecido en la licitación para el tercer canal de televisión, se explica aún más por qué las relaciones gobierno-medios son tan complejas. Hay demasiados intereses económicos en juego. El grupo Planeta que está en la licitación, es también la apuesta de la Casa Editorial El Tiempo y su grupo de medios tales como TV y Novelas, Portafolio y City TV. El grupo Prisa, que también busca el tercer canal, es así mismo la expectativa económica de los periódicos regionales, del grupo propietario de Caracol Radio y del noticiero de televisión CM&. El grupo Cisneros, es de alguna manera la televisión venezolana en el contexto colombiano. Y los canales privados que tendrán que asumir un nuevo contexto por la competencia que se avecina, también defienden sus intereses. RCN Televisión, es también propietario de RCN Radio y la revista Poder. Caracol Televisión también posee el periódico El Espectador y las revistas Cromos y Shock. Es decir, cada quien defiende lo suyo y la independencia también se sopesa en la balanza del poder económico.

En conclusión, la relación entre gobierno y medios de comunicación en la era Uribe es totalmente atípica, por los acontecimientos políticos y económicos que la han rodeado. Si a los anteriores argumentos se suma el hecho de que el Presidente es esquivo frente a los grandes medios y prefiere a los menores, incluso los locales, donde no se le controvierte demasiado, o se limita a sus largos espacios de exposición mediática en los consejos comunitarios televisados los sábados, no cabe duda de que existe un escenario que amerita múltiples análisis. Los defensores y detractores de hoy están situados en los medios de comunicación y, a través de ellos, se va formando una opinión pública que polariza sus conceptos. ¿En qué queda situada la libertad de expresión? A manera de síntesis habría que decir que sobrevive en medio de un mar de intereses políticos, económicos, jurídicos y sociales, después de ocho años de gobierno de uno de los presidentes más mediáticos de todos los tiempos en Colombia: el primer mandatario Álvaro Uribe Vélez.

III

Las contradicciones de El Tiempo

En aplicación de la ley 335 de 1996, y después de un rápido proceso administrativo, en 1997 el gobierno de Ernesto Samper Pizano entregó las dos licencias para la operación de la televisión privada en Colombia. Estos multimillonarios negocios recayeron en las programadoras Caracol y RCN, representativas de los dos grupos económicos más importantes del país: el conglomerado económico orientado por el industrial Julio Mario Santo Domingo y el grupo empresarial del potentado Carlos Ardila Lulle. Con una autorización de diez años, los dos canales privados empezaron sus transmisiones a partir del 10 de julio de 1998.

Este proceso estuvo antecedido por la implementación de un nuevo esquema constitucional y legal surgido a partir de la promulgación de la Carta Política de 1991. La nueva constitución, a través del artículo 77, dispuso la creación de un ente autónomo para que se encargara del servicio público de la televisión. Ese artículo fue reglamentado a través de la Ley 182 de 1995 que dio origen a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Un organismo de cinco miembros, dos de ellos escogidos por el gobierno, un tercero elegido por los canales regionales, el cuarto aportado por los gremios de la televisión y el último elegido por asociaciones de televidentes y las facultades de comunicación social.

Cuando Álvaro Uribe Vélez asumió como Presidente en 2002, faltaban seis años para que se cumpliera el plazo concedido a los canales privados Caracol y RCN. Sin embargo, el nuevo gobierno empezó a dar pasos importantes para controlar la Comisión Nacional de Televisión, a pesar de que el Jefe de Estado, durante su tiempo de candidatura, había manifestado su interés por acabar con la CNTV por su inoperancia y alto costo. Cuando concluyó el cuatrienio 2002-2006, la Junta Directiva del organismo estaba integrada por Jorge Figueroa Clausen, Adela Maestre, Fernando Álvarez, Eduardo Noriega y Juan Andrés Carreño. Los dos primeros elegidos por el gobierno, el tercero por los gremios, el cuarto

por las facultades de comunicación social y organizaciones afines y el restante por los canales regionales de televisión.

La polémica había quedado circunscrita a varios hechos. Sobre Jorge Figueroa no hubo controversia. Adela Maestre, esposa del senador Mauricio Pimiento (hoy condenado en el escándalo de la parapoltica), oficiaba como secretaria privada del Ministerio de Comunicaciones pero entró escogida por el gobierno. En cambio, sobre la elección de Fernando Álvarez se dijo que fue impuesta por los sectores dominantes de la televisión por suscripción, muy afín al gobierno. Y que el nombramiento de Juan Andrés Carreño fue posible por las presiones que creó el gobierno contra la posibilidad de que Darío Montenegro fuera reelegido, como lo señala el libro “Mayorías sin democracia”, de los investigadores del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), Mauricio García y Javier Revelo.

Cuando empezó el segundo gobierno Uribe, a dos años de vencerse la concesión a los canales Caracol y RCN, vinieron nuevos cambios en la CNTV. En enero de 2007 se le venció el periodo a Jorge Figueroa y para reemplazarlo ingresó Ricardo Galán, hasta ese momento Secretario de Información y Prensa de la Presidencia de la República. Un mes después se le venció el periodo a Fernando Álvarez, pero fue reelegido. En cambio Adela Maestre salió del organismo y en su reemplazo entró Carolina Hoyos Turbay, nieta del ex presidente Julio César Turbay y directora ejecutiva de la corporación Gustavo Matamoros que trabaja a favor de los militares afectados por el conflicto armado. Finalmente, Alberto Guzmán, un empresario cercano al presidente Uribe, entró en reemplazo de Eduardo Noriega.

La controversia se armó porque el senador Rodrigo Lara denunció que detrás de las intenciones de apropiarse de la CNTV estaba el propietario de Cable Noticias, Juan Gonzalo Ángel, hermano de Luis Guillermo Ángel, un piloto y empresario aeronáutico que en los años 80 estuvo vinculado al narcotráfico y en 1993 fue objeto de un indulto de la Fiscalía porque se convirtió en uno de los

principales colaboradores en la lucha contra Pablo Escobar Gaviria. Juan Gonzalo Ángel denunció al senador Lara y el tema se convirtió en la antesala de un momento que tarde o temprano iba a llegar: la prórroga de los contratos con Caracol y RCN y la apertura de una licitación para conceder el tercer canal privado de televisión.

A mediados de 2008, la CNTV arrancó el proceso del tercer canal y entre las propuestas acreditadas aparecieron la casa editorial El Tiempo junto con el grupo Planeta de España; el grupo Cisneros de Venezuela y el grupo Prisa de España. La Procuraduría intervino abiertamente y solicitó que la adjudicación del tercer canal se diera a través de una subasta pública. El Consejo de Estado avaló el proceso. La CNTV exigió que las propuestas no tuvieran más del 40% en inversión extranjera. Y en enero de 2009 se conoció el precio base de la subasta para la operación del tercer canal: 69 mil millones de pesos. De inmediato protestaron Caracol y RCN porque según ellos les había tocado pagar mucho más dinero por sus licencias y les había tocado aportar grandes inversiones tecnológicas que debían facilitar al nuevo operador.

Desde ese momento el proceso se enredó. Aunque posteriormente se logró un acuerdo entre la CNTV y los canales privados que acordó un precio mínimo de US\$82 millones y máximo de US\$119 millones para la prórroga de sus licencias, el tema de la concesión del tercer canal entró en crisis por divergencias técnicas y económicas. Algunos la atribuyen a la manifiesta intención del gobierno de otorgarle el tercer canal al grupo Planeta, es decir, a El Tiempo y la familia Santos; y otros a que los canales privados Caracol y RCN han dilatado dos años la concesión del tercer canal porque no quieren competencia. Lo cierto es que en enero de 2010, la Procuraduría pidió cancelar el proceso de adjudicación hasta mediados del año 2010.

El gobierno dice que entregará el tercer canal antes de concluir su gestión, los canales privados presionan para que no se haga, y el sector sigue discutiendo alrededor de la actualización del precio

base, el acceso a las redes instaladas, el uso de las frecuencias oficiales y la cuantificación de los riesgos, entre otros aspectos. En el fondo se sabe que lo que imperan son problemas de tipo político y empresarial y que el problema principal es que en Colombia existe libertad de expresión, pero circunscrita al capital empresarial. Los periodistas, situados en medio de los intereses políticos, las grandes licitaciones y los negocios privados, tienen su propia visión sobre lo que verdaderamente está sucediendo alrededor del tercer canal privado de televisión.

Por ejemplo, Gerardo Aristizábal, ex editor político de la revista Cambio, sostiene que todo lo que rodea la concesión del tercer canal obedece a intereses políticos y económicos. Y lo reconoce desde su perspectiva laboral: “La revista Cambio era de la casa editorial El Tiempo y los colegas de El Tiempo nos decían que al menos podíamos hacer crítica porque ellos estaban en licitación”. Y agrega evaluando sectores conexos: “Eso sí, nadie critica a El Espectador que es del grupo Santo Domingo, con claros intereses, ni a Caracol Radio que también los posee. En el fondo, es un fenómeno de directivos de medios de comunicación y de periodistas que se echan el agua sucia entre sí y no ponen claramente las cartas sobre la mesa”.

A su vez, el periodista Jorge Alfredo Vargas, del canal Caracol, sostiene que el proceso ha sido “fatal”, porque además de que la CNTV está hoy integrada por comisionados que son cuota del gobierno Uribe, las reglas de juego han sido cambiadas y nadie sabe qué puede pasar en el juego de intereses privados cruzados con los políticos y públicos. “Yo creo que entre más canales y más posibilidades de televisión existan pues gana más el televidente, pero obviamente el negocio es otra cosa. Los de la CNTV analizaron, contrataron dos o tres empresas auditoras para que estudiaran el tema, esas empresas trabajaban juntas y eran socias. En cualquier parte del mundo dieron las condiciones para que el proceso no se diera de una manera correcta”.

El periodista Ignacio Gómez, de Noticias Uno, opositor en todo lo relacionado con el gobierno Uribe afirma que “la Comisión Nacional de Televisión perdió su carácter independiente y hoy es simplemente un ejecutor de la políticas del Presidente de la República”. En defensa de su postura resalta que varios casos de corrupción, todos gravísimos y asociados a candidatos de la llamada coalición uribista, demuestran que se trata de un organismo que no ofrece garantías en el polémico tema del tercer canal. “Los fraudes y desfalcos hoy caracterizan el trabajo de la Comisión de Televisión”, insiste Gómez, quien estima que de todos modos, crear un nuevo canal de televisión en medio de un proceso electoral sólo puede interpretarse como la gestación de un canal para el sostenimiento del poder del Jefe de Estado.

Según el periodista y fotógrafo español Gervasio Sánchez, de la agencia internacional de noticias EFE, “Los intereses mediáticos, políticos y económicos son el verdadero obstáculo para que los periodistas puedan investigar con libertad en Colombia”²⁰. Además cree que existen temas que siempre están censurados u olvidados porque “prevalecen intereses promiscuos y vergonzosos que ayudan a representar el conflicto colombiano”²¹. Es la visión que proyectan los grandes grupos económicos que manejan los medios de comunicación, pertenecientes a grandes familias generalmente vinculadas con los gobiernos. “Es la visión privilegiada de uno de los protagonistas del conflicto que privilegia sus intereses y se aprovecha de la ausencia de prensa de oposición”²².

²⁰ “Intereses mediáticos y políticos coartan la libertad de los periodistas en Colombia”, (2009) [en línea], disponible en: <http://www.periodicoelsol.net/noticia.php?id=4953>, recuperado: 20 de abril de 2010

²¹ “Intereses mediáticos y políticos coartan la libertad de los periodistas en Colombia”, (2009) [en línea], disponible en: <http://www.periodicoelsol.net/noticia.php?id=4953>, recuperado: 20 de abril de 2010

²² “Intereses mediáticos y políticos coartan la libertad de los periodistas en Colombia”, (2009) [en línea], disponible en: <http://www.periodicoelsol.net/noticia.php?id=4953>, recuperado: 20 de abril de 2010

3.1 Grandes grupos económicos al frente de los medios de comunicación

Con base en estos últimos comentarios, vale la pena observar cuál es el panorama de la televisión colombiana. Dos grupos económicos son los propietarios de los dos canales privados: Caracol y RCN. A partir de este multimillonario negocio, Caracol televisión ofrece servicios de producción a otras empresas aliadas y desarrolla trabajos en conjunto con compañías como Telemundo, RTI Televisión, TV Azteca, Colombiana de Televisión, Univisión o Sony Pictures. Además, desde que empezó operaciones ha venido adquiriendo derechos de transmisión de grandes eventos internacionales, circunstancia que le permite multiplicar sus utilidades. Un solo ejemplo evidencia esta circunstancia: desde 1993, bajo el nombre del Gol Caracol, tiene la exclusividad para la transmisión de partidos de fútbol de la Selección Colombia.

El canal RCN no se queda atrás. Como su competencia, a través de los años se ha vuelto productora de otras compañías nacionales e internacionales con extraordinarios dividendos económicos y vende sus producciones a diversos países del mundo. En los últimos tiempos, más exactamente a partir de 2008, entró en funcionamiento el canal NTN 24 de RCN, creado para los latinos que viven en el exterior. Este es un servicio que presta información 24 horas al día, con más de diez informativos diarios y diferentes programas unitarios que se emiten en diversos momentos, abarcando temas de diverso tipo como deportes, entretenimiento, economía, política internacional, tecnología o moda. Aunque la propuesta aún no es suficientemente conocida, poco a poco se está afianzando en el mercado nacional e internacional y sus repercusiones en el campo económico empiezan a ser notables.

A mediados de 2005, cuando ya empezaba a proyectarse en el horizonte la necesidad de la prórroga en la licencia de los dos canales privados y la posibilidad de que un tercero entrara en operaciones, en uno de sus informes de auditoría a la Comisión Nacional de Televisión, la Contraloría General de la República dejó al desnudo lo que significa en términos prácticos que Caracol y RCN sostengan el monopolio de la televisión privada. Según ese informe, para 2002, es decir, cuatro años después de comenzar sus operaciones, los dos canales ya tenían el 96% de la pauta publicitaria nacional. En 2003,

del total de inversión en pauta publicitaria, los dos canales tenían el 95% de las posibilidades. Es más, para 1999, apenas con un año de operaciones, los canales tenían 130 comerciales por día, con lo que eso significa en términos de utilidades.

Es cierto que los canales han realizado cuantiosas inversiones pero también le han ganado millones pleitos al Estado. El mencionado informe de la Contraloría señala que argumentando “desequilibrio económico por el ciclo recesivo de los negocios”²³ y los dineros que han tenido que aportar para actualizar o extender sus redes de transmisión a lo largo y ancho del país, han logrado multimillonarias devoluciones de ingresos. Para la época del informe estaban calculadas en \$46.658 millones, una cifra equivalente al 14% del total pagado por la concesión de los dos canales. Basta mirar la evolución reciente de la televisión para constatar cómo se han beneficiado los dos canales Caracol y RCN y por qué desde hace varios meses debía estar al aire el tercer canal de televisión e incluso una cuarta o quinta opción como ocurre en numerosos países.

Dos años después de empezar sus operaciones los dos canales privados, las distintas programadoras que habían protagonizado el desarrollo de la televisión nacional, tuvieron que cambiar de negocio para sobrevivir o salvarse de la quiebra. Así, por ejemplo, Producciones JES, Producciones Punch, RTI Televisión, Tevecine, Cenpro Televisión, Programar Televisión, Producciones Telecolombia, Coestrellas, Datos y Mensajes, entre otras, se convirtieron en productoras de cine y televisión bajo el control de Caracol y RCN. En 2008, la multinacional de origen mejicano Telmex compró las operaciones de televisión por suscripción de Superview, Teledinámica, Cablepacífico, TV Cable Bogotá y Cablecentro, convirtiéndose en el principal operador del servicio de Televisión por cable en todo el territorio nacional. Un enorme negocio que vino a compensarse con la renovación de las licencias para los dos canales en 2009.

²³ Ossa Escobar, C. *et al.*, (2005), “Informe de auditoría a la Comisión Nacional de televisión”, Bogotá, s.e.

Efectivamente, después de un largo debate alrededor del precio de la prórroga, a comienzos de 2009, a Caracol y RCN se le amplió a diez años la posibilidad de seguir operando y el punto clave del acuerdo terminó siendo que ese costo va a depender del comportamiento de la economía y de la publicidad en televisión en los próximos años. En otras palabras, no van a perder de manera alguna y sin correr riesgos financieros, van a quedar cubiertos con el pacto. Pero aún así, insatisfechos con el magnífico logro de seguir manteniendo el monopolio en el espectro electromagnético, que prohíbe la Constitución Nacional en su artículo 75, ahora trabajan conjuntamente con sus abogados para entorpecer, o al menos dilatar el mayor tiempo que se pueda, el ingreso de operaciones del tercer canal de televisión.

Claro está que indirectamente, en su claro propósito de entregar ese tercer canal al grupo Planeta, también ha ayudado la CNTV y por consiguiente el gobierno. Cuando todo estaba listo para la concesión por subasta y era claro que quien tenía la primera opción era el grupo Cisneros de Venezuela, la CNTV sacó un decreto para adicionarle un nuevo factor de definición: por contenidos. Era claro que con la crisis económica que ha vivido España en los últimos dos años, ni Planeta ni el grupo Prisa tenían como irse a una subasta con Cisneros. La nueva regla de juego dilató la entrega. Desde entonces, cada semana aparece un nuevo impedimento técnico para la licitación. Un día porque se cambió el porcentaje del aliado técnico, otro porque al nuevo operador se le querían facilitar las líneas de transmisión de Tv Andina. En los dos últimos años, esto ha sido un juego de nunca acabar.

Y obviamente, terminó atravesándose el asunto político. Primero era el argumento de que el gobierno Uribe estaba utilizando la concesión del tercer canal para buscar su segunda reelección, pero después de que la Corte Constitucional le cerró el paso al tercer mandato Uribe, ahora se discute que en plena campaña electoral no es ético cerrar el negocio del tercer canal. Al concluir esta investigación periodística, el tema seguía en veremos, aunque existe el anuncio del gobierno de que antes de agosto de 2010 estará decidido el asunto. La mayoría dice que es la crónica de una concesión anunciada y que el grupo Planeta-El Tiempo será el favorecido. El grupo Prisa, propietario de Caracol Radio, no quiere perder su opción, como tampoco el grupo Cisneros de Venezuela. Lo cierto es que hay demasiados

millones en juego y que la libertad de expresión vuelve a sopesarse en la balanza de los intereses económicos y políticos.

3.2 Mientras uno aparece, otro se esfuma

Al cierre de este trabajo de grado se produjo una decisión que por sus incidencias en el campo del periodismo investigativo, ha generado muchos análisis. Se trata del cierre de la revista Cambio, calificado como un golpe al periodismo de denuncia. Cuando se produjo este hecho ya se habían realizado las entrevistas que acompañan el texto y en general estaba casi en su culminación este trabajo periodístico. Ello no implica, sin embargo, que el tema no amerite algunas conclusiones. En primer término debe decirse que, en términos prácticos, la casa editorial El Tiempo decidió cerrar la revista y cancelar los contratos de sus directores Rodrigo Pardo y María Elvira Samper. Se argumentó que el cierre obedecía a razones económicas. Los dos ex directivos aseguraron que hubo motivaciones políticas. La polémica agitó a la opinión pública.

En entrevista con la periodista Cecilia Orozco Tascón, de El Espectador, el ex director de la revista Cambio, Rodrigo Pardo, sostuvo que él sabía de las molestias que suscitaba el periodismo de denuncia y análisis que hacía la publicación. Sobre todo a partir del año 2009, cuando el medio reveló los presuntos vínculos con la mafia del hermano del ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, el ex director de Fiscalías en Medellín, Guillermo Valencia Cossio. Después vinieron agudos informes sobre los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos sobre las bases militares y el reciente escándalo de Agro Ingreso Seguro, en el que se vio involucrado el ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias. Además Pardo insistió en que la revista Cambio había obtenido buenos resultados económicos, que bastaban para que El Tiempo la conservara. Por eso Pardo dejó en claro que el inesperado cierre de la publicación y su salida de la Casa Editorial, además no avisados, no obedecieron a razones económicas sino a conveniencias políticas.

Rodrigo Pardo ha venido insistiendo además que la evaluación de un medio no se puede hacer únicamente por su aspecto económico, pues es necesario tener consideraciones que apunten a la responsabilidad social que envuelve el periodismo, resaltando que este oficio necesita independencia y distancia. Por eso cree que el cierre de la revista obedeció a que causaba molestias al Ejecutivo. Estas son sus conclusiones: “Algunas personas atribuyen a José Obdulio Gaviria un poder muy amplio y una vocería autorizada del presidente Uribe. Dicen que es un estrecho amigo de Francisco Solé, representante del grupo Planeta en El Tiempo. Si eso tuvo que ver con mi salida, no lo puedo saber. Me imagino a José Obdulio, al presidente Uribe y a los protagonistas de los escándalos que publicamos en Cambio, como los Valencia o Arias, muy felices con mi salida y el cierre de la revista”²⁴.

Por otro lado, la periodista María Elvira Samper, ex directora general de la revista, ha explicado que quedó sorprendida por su exclusión de la Casa Editorial de El Tiempo, sobre todo porque la revista dio utilidades suficientes en 2009. Por eso insistió en que la crisis económica no es la verdadera razón del cierre de la publicación aunque haya sido el argumento utilizado. En su sentir, la verdadera razón se basa en factores políticos que influyeron en esta decisión. María Elvira Samper recordó que existen vínculos familiares que los unen tanto a ella como Rodrigo Pardo con El Tiempo que han sido fundamentales en el desarrollo de la casa editorial, por eso ella misma sugiere una pregunta: ¿Fueron minados desde adentro? Y se responde: “Desde adentro y desde afuera. Es cierto que hubo columnas muy agresivas contra Rodrigo o contra la revista en El Tiempo. Y el candidato Juan Manuel Santos dijo, hace pocas semanas, que éramos unos idiotas útiles. Que la gente saque sus propias conclusiones”²⁵.

Lo que dejan ver estas apreciaciones es que la libertad de prensa en Colombia quedó afectada y que otro medio de comunicación desapareció sin argumentos convincentes. Suena más a ampliación de la

²⁴ Orozco Tascón, C. (2010, 6 de febrero), “Cierre de la revista ‘Cambio’, golpe al periodismo de denuncia”, en *El Espectador, Online* [en línea], disponible en: <http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso186229-cierre-de-revista-cambio-gol>, recuperado: 30 de abril de 2010.

²⁵ Orozco Tascón, C. (2010, 6 de febrero), “Cierre de la revista ‘Cambio’, golpe al periodismo de denuncia”, en *El Espectador, Online* [en línea], disponible en: <http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso186229-cierre-de-revista-cambio-gol>, recuperado: 30 de abril de 2010.

autocensura a la que están sometidos los periodistas en Colombia. Detrás de la clausura de Cambio hay un mensaje reiterado: ser independiente, decir lo que se piensa o cuestionar cualquier actividad del gobierno, puede llevar a la “muerte profesional”. Esa es la lección de la revista Cambio. Es claro que El Tiempo tiene hoy muchos intereses en juego, en particular el atractivo negocio del tercer canal donde aparece como el favorito o casi seguro operador. La revista Cambio era incómoda y la decisión más estratégica era cancelarla argumentando razones económicas. Un mal sabor que de alguna manera refleja cómo han sido las relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno. Menos periodistas muertos y más comunicadores autocensurados o callados.

A manera de constancia debe recordarse que la revista Cambio surgió como una sociedad que era presidida por el periodista español Juan Tomas de Salas, y que en su momento tuvo como socios colombianos a Daniel Samper Pizano, Darío Restrepo Vélez y Patricia Lara. Luego, otros periodistas como Antonio Caballero, Alberto Donadío, Germán Espinosa, Alfredo Molano y Darío Jaramillo se vincularon a ella. Con el paso de los días, la periodista Patricia Lara compró la totalidad de la empresa, la cual fue transferida a un grupo compuesto por Gabriel García Márquez, Mercedes Barcha, María Elvira Samper y Roberto Pombo. Después fue vendida a La Casa Editorial El Tiempo, que a su vez hace cuatro años pertenece al grupo Planeta. Con todos estos cambios, vale la pena concluir que los intereses económicos cooptaron una propuesta independiente y que el final no podía ser distinto. Es el precio que se paga en Colombia por desarrollar un poder mediático. Y hoy ese poder depende de un músculo financiero que no todos ostentan.

IV

Entrevistas

“Si Uribe está con los católicos reza el rosario, si está con los cristianos cita el nuevo testamento, si esta con empresarios habla como empresario”.

4.1 Entrevista Rodrigo Pardo García Peña

Economista de la Universidad de los Andes. Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Ex Embajador de Colombia en Venezuela desde 1992 hasta 1994. Ministro de Relaciones Exteriores y ex director de la Revista Cambio.

¿Cómo ve el manejo que Uribe le ha dado a la oposición política?

La ha disminuido, la ha vuelto irrelevante, con un manejo muy hábil que combina una estrategia política y de comunicaciones que tiende a polarizar a la opinión pública y asociar a todas las opiniones que no están con el gobierno con fenómenos que la opinión pública considera negativos como la guerrilla y la influencia del presidente de Venezuela.

¿Con respecto a la oposición y a las críticas que hacen los medios y los periodistas?

Igualmente la ha vuelto irrelevante mediante la utilización de medios alternativos a los que lo critican y a la confrontación directa con los periodistas que ejercen con independencia la crítica a la administración.

¿Considera que el presidente le ha dado un tratamiento correcto a la libertad de expresión?

Creo que un Presidente, más que actuar como un actor político que considera a sus críticos como contrapartes, debería ser un jefe de Estado que garantizara el espíritu y las letras de las normas que consagran la libertad de expresión.

¿Cómo ha visto el proceso de la concesión del tercer canal?

No conozco los detalles, pero me parece que en general los grandes contratos que involucran a licencias del Estado para grandes inversionistas extranjeros y nacionales, están paralizados por cuenta del ambiente político tan tenaz que existe. Todos los días uno se entera que, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado todavía no se sabe si va a tener o no edificio nuevo porque persiste la sospecha de que va a terminar en escándalo. Con lo del tercer canal es igual, en un ambiente político tan polarizado, sencillamente el proceso está paralizado. Por la suspicacia, estamos convertidos en una especie de república bananera donde no se pueden hacer grandes obras.

¿Por qué a pesar de escándalos como el del DAS, los falsos positivos, las interceptaciones ilegales Uribe sigue manejado tan alta favorabilidad ante la opinión pública?

Porque el estilo polarizante divide a la opinión pública entre quienes están con Uribe y quienes no, y las cosas que se dicen en contra, por más de que sean reales, pierden credibilidad o relevancia. A la gente no le importa porque las asocia como esfuerzos de la oposición en contra de un Presidente al que quieren.

¿Cómo el planteamiento del Estado de opinión, usted cree que era válido para que el presidente buscara un tercer mandato?

Me parece una aberración, significa que no hay instituciones, que no hay reglas, que supuestamente lo que quiere la mayoría, además expresada de una manera no institucional, está por encima de la ley o le

da una carta blanca al gobernante para actuar sin controles ni contra pesos. Me parece que es una tesis absolutamente antidemocrática y autoritaria. Si la democracia fuera así, habría que terminar prohibiendo los impuestos porque a la mayoría de gente no le gustan. La relación entre la favorabilidad de un gobernante y la duración de un mandato, en ninguna parte del mundo es directa. Quizás en los sistemas parlamentarios hay una relación más directa, pero en ambos sentidos, es decir, cuando el partido de gobierno conserva la mayoría, ésta puede estar cuanto tiempo quiera, pero si el gobernante pierde la capacidad de conservar las mayorías, pues se va del gobierno, en muchos casos antes de que se cumpla su cuatrienio. En USA, no pueden ser más que ocho años y las reglas son claras. Por eso lo más grave del tal Estado de opinión es utilizarlo para cambiar las reglas del juego favoreciendo a quien está en el poder lo cual es un antecedente muy preocupante y de gravísimas consecuencias para el futuro.

¿Por qué la pelea con la Corte Suprema de Justicia no ha sido lo suficientemente importante como para afectar la gobernabilidad de Uribe?

La ha afectado. Tenemos un fiscal interino, hay pelea con Estados Unidos por las diferencias por la extradición. En un sistema parlamentario, si hubiera un choque de trenes habría un jefe de Estado, llámese Rey como en el caso de España o Presidente como en el caso de Alemania, que entraría a mediar entre los poderes. Pero cuando el Jefe del Estado es además el jefe de gobierno y actúa como líder de una facción de la sociedad llamada uribismo y no de toda la sociedad, entonces los conflictos interinstitucionales se profundizan.

¿Usted cree que el escándalo de la Parapolítica llegó a su fin?

En términos de la dimensión política del número de personas involucradas sí, pero naturalmente hay muchos casos pendientes de solución. Eso va hacer que siga produciendo noticias y, dependiendo de cómo la Corte falle, van a cambiar los criterios que había adoptado la Fiscalía.

¿Cuál ha sido el mejor momento que ha tenido Uribe y el peor en los años que lleva en el poder?

Yo creo que Uribe tuvo unos primeros años muy buenos porque generó credibilidad e interpretó el sentimiento del país, especialmente en el tema de la seguridad y su rechazo a las FARC. Tuvimos un instante de ánimo colectivo positivo y de alto crecimiento que, sin duda, fue mucho mejor que lo que tenemos ahora. El primer cuatrienio de Uribe fue mucho más tranquilo y exitoso que el segundo. Sin embargo, si se trata de escoger un único momento, es difícil no escoger la operación Jaque, que obviamente significa un triunfo espectacular para un Estado por el impacto internacional, por la calidad de la operación, por su éxito. El peor, yo creo que ha habido muchos. El asesinato de los diputados del Valle fue muy triste y lamentable, la derrota en el referendo de 2003 fue significativa, las agrietadas relaciones con la Corte Suprema de Justicia, ni se diga. Hay una combinación de momentos. Así como hubo un alto crecimiento económico ayudado por la confianza de la gente, hoy estamos en un momento negativo así la popularidad del Presidente sea alta. Yo diría que el peor momento es éste y coincide con una crisis económica internacional que todavía hace sentir sus efectos en Colombia.

¿Por qué cree que se está presentado el fenómeno de que hace unos años había más periodistas apoyando al Presidente y hoy en día es todo lo contrario, la mayoría le está haciendo oposición?

Si es cierto, pero con la siguiente aclaración: en general ha habido críticas a Uribe en la prensa escrita y apoyo en los medios electrónicos. Lo que pasa es que la prensa escrita no tiene la cobertura que tienen los medios electrónicos. La verdad es que la televisión y la radio han sido uribistas desde el principio y también desde el principio ha habido columnistas críticos. Recuerden que en la campaña anterior, el Presidente tuvo una pelea con el director de Semana. Son los efectos de la reelección que causan preocupación por sus efectos negativos desde el punto de vista institucional y para la democracia en sectores calificados, sobre todo por lo que significa en política, en Estado de Derecho.

¿Cómo ha sido el manejo mediático de Uribe?

Es una mezcla de intimidación mediante la confrontación, haciendo irrelevantes a los críticos o ignorando a los grandes medios, para buscar contacto directo con los medios comunitarios, regionales o emisoras comunitarias. Además, a través del contacto directo del Presidente con la gente en los consejos comunales que son televisados por el canal del Estado. Y en tercer lugar por una capacidad de comunicación extraordinaria por parte del presidente Uribe. Él sabe decir lo que la gente quiere oír, sabe cuándo hacerlo, es de una habilidad extraordinaria para poner a hablar a la gente sobre lo que a él le interesa en generar cortinas de humo. Es un presidente muy mediático que entiende la importancia de la imagen. Si está ante un grupo de camarógrafos y hay un río, no duda en quitarse la camisa y tirarse al río. Obviamente no hay periodista en ninguna parte del mundo que deje de poner esa foto o abrir periódico. Si Uribe está con los católicos reza el rosario, si está con los cristianos cita el Nuevo Testamento, si esta con empresarios habla como empresario. Tiene sintonía con la gente, es un gran comunicador. Yo diría que es el Presidente de Colombia con mejor capacidad de comunicación que yo he conocido.

NOTA: Esta entrevista se llevo a cabo antes del cierre de la Revista Cambio

“Absoluto, no tiene una sola fisura que le haga ver como una persona que no garantice libertad de expresión”

4.2 Entrevista José Obdulio Gaviria

Abogado. Ex militante del movimiento izquierdista Firmes y profesor de la Universidad de Los Andes. Fue asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Ha escrito varios libros entre los más representativos están “Colombia, asesinato y política”, “Colombia, la guerra y la paz”, “El liberalismo y la paz”, “Sofismas del terrorismo en Colombia”, “Reelección: que el pueblo decida” y “A Uribe lo que es de Uribe”

¿Cómo ve el manejo que le ha dado el gobierno Uribe le ha dado a la oposición política?

Dijéramos que la pregunta no lo introduce a uno en la descripción de una situación política porque no es el gobierno dando manejo a la oposición sino como es el régimen colombiano. Un régimen de relativas libertades que permite una amplia acción de los partidos de oposición. Entonces, si es como organizaciones, pues el juego ha estado muy abierto. Lo que pasa es que sus propias acciones como partido las ha debilitado muchísimo. En cuanto al opositor mismo, independiente y no necesariamente partidista, lo que existe es un régimen de libertades que tiene todos los parámetros de cualquier democracia moderna. La pregunta es cómo es el sistema colombiano actual para poder interpretar lo que ha ocurrido a los opositores o al gobierno en Colombia. Estamos en un momento de crisis partidista bastante grande que ni el gobierno puede corregir. Pongo como ejemplo el caso del Partido Liberal. Es un partido que prácticamente se disolvió en estos dos gobiernos. En cuanto al Polo Democrático, surgió con mucha fuerza pero sus propios errores lo han conducido a una debacle. Yo creo que desaparece en las próximas elecciones. Pero no creo que en un caso o en el otro, lo sucedido haya sido producto de lo que haya hecho el gobierno.

¿Cómo ve a Piedad Córdoba, desde su perspectiva como uribista?

Ella ha hecho declaraciones de rompimiento más con el sistema que con el gobierno. La declaración que hizo ante el Partido de los Trabajadores en México la define como una persona que opta por el punto de vista de las FARC. Una declaración que estuvo antecedida por una entrevista que concedió al periódico Voz, en octubre del 2002, donde prácticamente declara tener total identidad política con las FARC.

¿Y Gustavo Petro?

Es un caso distinto. Gustavo Petro es un opositor que partió negando la democracia colombiana desde su militancia en el M-19 y luego ha venido dando pasos que lo han venido acercando a la democracia. Hoy tiene un lenguaje más cercano al de un opositor dentro del sistema que un contradictor desde el terrorismo.

¿Considera que el presidente Uribe le ha dado un tratamiento correcto al ejercicio de la libertad de expresión?

Absoluto, no tiene una sola fisura que le haga ver como una persona que no garantice libertad de expresión. De hecho, como entra en el debate público como contradictor, genera posibilidades adecuadas para que se dé ese derecho. Hay algunos o paranoicos que simplemente no saben participar en el debate político y lo ven como alguien que está violando las leyes de la democracia y los derechos de opinión.

¿Qué pasa con las acusaciones de Daniel Coronel?

Las autoridades públicas tienen una línea de conducta no solo de respeto sino de protección. Él no le cuenta a la gente que tiene un esquema de protección que se los da el Estado. Él y muchos otros, sobre todo en el sindicalismo, hacen correr la voz en el exterior de que en Colombia hay un régimen tiránico, pero la evidencia es la contraria. Las condiciones de acción política y ejercicio laboral de los opositores

en Colombia tienen los elementos de una situación de la más alta democracia. Una periodista nos dijo una vez que la política del gobierno era arcaica, que vivíamos en las épocas del caudillismo, que íbamos para atrás porque Uribe se creía el Estado. Debe ser la misma que escribió un artículo vaticinando la derrota de Uribe en UNASUR y volvió a equivocarse. La verdad es que el debate político con este tipo de personas es difícil porque nunca entran en materia, se quedan en los prolegómenos de la agresión.

¿Por qué a pesar de escándalos como el del DAS, los falsos positivos o las interceptaciones ilegales, Uribe sigue manejando tan alta favorabilidad ante la opinión pública?

Cada uno de estos hechos es analizado por los brutos, que somos la mayoría, y nos damos cuenta que son exageraciones o mentiras, confabulaciones para presentar situaciones totalmente alejadas de la realidad.

¿Cómo es el planteamiento de Estado de opinión, por qué era válido para la búsqueda de un tercer mandato?

Es una realidad. Hoy cada vez es más necesario que los gobiernos y la administración pública tenga contacto directo con la realidad a través de los medios de comunicación y, sobre todo, en el debate directo. Por ejemplo, como los consejos comunitarios, con balances y presentación de realizaciones en público. Eso es Estado de opinión. Una sociedad informada con la cual hay que interactuar. Si no se hace viene el fenómeno del aislamiento y la pérdida de condiciones de gobernabilidad por eso el presidente nunca las ha perdido. En cambio, en el caso de otros mandatarios latinoamericanos, es común que se vaya perdiendo la credibilidad. Los únicos que la han mantenido elevada son Uribe y Lula y ambos mantienen contacto directo con la opinión que se convalida, y que es muy distinta a hacer contacto con la opinión a través de la chabacanería, los gritos o las decisiones impopulares, como el caso del presidente Chávez, que últimamente viene en barrena en cuenta a opinión pública.

¿Usted cree que si Uribe se hubiera lanzado a un tercer mandato hubiera ganado?

Al menos el 70% de la población hubiera votado en su favor. Y eso se va a probar en las elecciones presidenciales con el triunfo del uribismo.

¿Quién sería ese uribista?

No sale de Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias o Noemí Sanín, aunque ahora Noemí está apareciendo con un discurso que no parecería interesado en ser la sucesora de Uribe.

¿Por qué la pelea con la Corte Suprema de Justicia no ha sido lo suficientemente importante como para afectar la gobernabilidad de Uribe?

Lo de la Corte Suprema de Justicia ha tenido un efecto desastroso sobre la democracia colombiana. La Corte ha comenzado a crear un ambiente de gobierno de las cortes, involucrándose en decisiones políticas, en decisiones administrativas. Eso es terrible. Lo que pasa es que es tan fuerte la presencia del Ejecutivo que no se alcanza a notar la gravedad de la crisis, pero yo diría que es muy grave y va a tener efectos de desastre sobre el Estado colombiano.

¿El escándalo de la para política llegó a su fin?

Nosotros no definimos eso como escándalo de para política. El paramilitarismo fue un lastre de la democracia que abarcó sectores del empresariado, de la política, de la academia, incluso de la sociedad. Lo mismo que hizo la guerrilla. El hecho de que se hubiese desmovilizado su aparato militar dejó abiertas las posibilidades de conocer mucha verdad, cosa que no ha ocurrido con las FARC. En Colombia el deseo de profundizar en la verdad no ha sido tan activo, pero desmovilizados los jefes paramilitares lo que ocurrió era lo que tenía que ocurrir. Hay un libro de Evelio Henao que acaba de publicar. El fue asesor del Alto Comisionado para la paz y del ministro del Interior y de Justicia y

demuestra como una de los asuntos más difíciles de la negociación fue la verdad. Los paramilitares intentaron chantajear al gobierno, a los sectores de la política o al empresariado diciendo que si les daban determinados beneficios decían la verdad, pero lo que hoy se llama para política es una consecuencia lógica de la desmovilización del paramilitarismo, que es una obra de este gobierno.

¿Y la FARC política donde queda, algún día prosperará?

Debe prosperar. Yo creo que el peor enemigo fue la Fiscalía anterior que nunca tuvo el propósito de enfrentarla y más bien neutralizó los procesos. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, tiene una línea política que la inhibe porque ya dijeron en una sentencia que las FARC son una organización que actúa por intereses altruistas.

¿Usted qué opina de las fotos que tomó Iván Cepeda en la finca del presidente?

Iván Cepeda tiene una actitud explicable. Él es un enemigo del sistema, o sea que cualquier gobernante es para él un criminal. Incluso las Fuerzas Armadas. Él dirige una organización de victimas del Estado, como si el Estado fuera criminal. Además tiene una vieja militancia en una zona muy cercana al punto de vista de las FARC, como Piedad Córdoba. En el debate público, siempre estamos en discrepancia de fondo. Él llama victimas del Estado a personas que han sido agredidas o victimizadas por el paramilitarismo, porque piensa que el paramilitarismo y el Estado son lo mismo. Frente a los secuestros de las FARC, prefiere tratarlos como prisioneros de guerra o retenciones. Cree que la guerrilla es una fuerza beligerante y no una organización terrorista. Por eso deslegitima la figura del presidente Uribe y escribe con otro militante comunista, Jorge Rojas, el que dirige CODHES, donde desconoce a Uribe como empresario del campo o de la ganadería y lo califica poco menos que un matón. Esas son las aseveraciones de su libro sobre El Ubérrimo.

¿Qué significa Uribe comparativamente frente a otros presidentes que ha tenido el país?

Su política del Estado comunitario cuajó muchísimo en diversos sectores de la sociedad, la economía y la política colombiana. Y ha sido una política que desplazó mucho el núcleo de poder de Bogotá.

¿Cómo evalúa el manejo de las relaciones internacionales durante este gobierno?

Han sido muy difíciles porque somos una minoría política en América Latina. Eso se refleja en el debate que tenemos con Ecuador y Venezuela. La gran mayoría de los mandatarios suramericanos o son neutrales o tienden a ser más cercanos conceptualmente a Chávez y a Correa. En ese escenario, manejar unas relaciones no es fácil. Creo que el éxito ha sido que no haya habido aislamiento ni rompimiento y que se hayan acrecentado las relaciones con Centroamérica. Estamos en el Plan Puebla Panamá que tiende a convertir hasta México en una sola economía. Las relaciones con Estados Unidos han sido buenas, con Europa son inmejorables, estamos entrando en un escenario de donde habíamos estado muy alejados. Con Asia hay buenas intenciones de hacer acuerdos comerciales y de inversión.

¿Y cómo evalúa la posición de Colombia frente a UNASUR?

De uno a diez, Colombia diez y Venezuela uno. La decisión o la estrategia del presidente Uribe en la reunión de Bariloche era mejorar las relaciones con Ecuador y lo logró. Ya existen ciertas señales de que es posible reanudar relaciones. Con Venezuela es más difícil pero hay que tener en cuenta que la situación interna de Chávez es cada vez más complicada.

¿Cuál es su apreciación sobre la presencia militar norteamericana en Colombia?

Es un acuerdo de cooperación muy largo, que se profundizó con el Plan Colombia y que yo creo que hay que mantener. El problema del narcotráfico en Norteamérica es de salud pública, para nosotros es un problema de terrorismo. Por eso las bases norteamericanas tienen un efecto muy productivo para Colombia. Por ejemplo, en materia de tecnología de comunicaciones, e incluso de cierta movilidad en

la lucha contra la droga. No sabría valorar cuánto representaría ese gasto para Colombia si tuviera que hacerlo.

¿En el tiempo que usted estuvo como asesor del Presidente cuál fue el momento más crítico y cuál fue el mejor momento?

Los momentos más críticos fueron artificiales. Las carátulas de la revista Semana con acusaciones totalmente injustas que generaron nerviosismo en muchos funcionarios.

¿La de UNASUR afectó?

No, y eso que hubo peores. Eso que desde la revista me mandaban diariamente llamadas para que el Presidente aceptara ir a inaugurar algún evento. Recuerdo haberles dicho que si creían que el Presidente era un mafioso, cómo lo invitaban a sus eventos. Los mejores momentos fueron los éxitos contra el terrorismo. La seguridad democrática, la Operación Jaque. Un momento duro fue la derrota del referendo.

¿Con respecto a los medios, excepto Semana, cómo ha sido el manejo que le han dado al gobierno de Uribe?

En general el presidente Uribe es muy desinteresado sobre la forma como se expresan los medios. Yo era la persona que más lo mantenía al tanto de algunos comentarios favorables o desfavorables.

“Si tus opositores no pueden hablar libremente ni por teléfono, de ahí para adelante puede suceder lo que sea”

4.3 Entrevista Vicky Dávila

Comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma de Cali. Los inicios de su carrera los llevo a cabo presentando el informativo institucional El Senado Hoy, fue reportera del noticiero Notipacifico del canal regional Tele pacífico. En 1994 se radico en Bogotá y trabajo en el noticiero TV Hoy y en QAP Noticias donde realizaba informes de orden público y fue corresponsal en Washington. En 1998 se vinculó a RCN Televisión para presentar RCN al día y para luego hacer parte de Noticias RCN. También trabajo en Radiosucesos RCN de RCN Radio y en 2007 empezó a dirigir y conducir el noticiero de las 5 de la mañana de La F.M, cargo que sigue desempeñando actualmente.

¿Cómo ve el manejo que el gobierno Uribe le ha dado a la oposición política?

Yo creo que si uno mira lo que ha sucedido con las interceptaciones ilegales, las llamadas chuzadas ilegales del DAS, pues sin lugar a dudas hay que reconocer que no hay una garantía. Si tus opositores no pueden hablar libremente ni por teléfono, de ahí para adelante puede suceder lo que sea. Fíjate lo que le sucedió a Gustavo Petro, que también fue víctima de seguimientos. Por eso caso salió del DAS su ex directora María del Pilar Hurtado. Creo que en el país no ha habido garantías plenas para la oposición.

¿Considera que el presidente Uribe le ha dado un tratamiento correcto al ejercicio de la libertad de expresión?

En Colombia, a pesar de todo hay libertad de prensa. La hay porque los que critican al gobierno siguen en sus columnas y escriben haciendo críticas. Se puede hacer en radio y en televisión, así no le guste al Presidente.

¿Por qué a pesar de escándalos como el DAS, las interceptaciones ilegales, los falsos positivos, Uribe sigue manejando tan alta favorabilidad ante la opinión pública?

Uno tiene que ser justo. El Presidente Uribe le devolvió muchas cosas al país, le devolvió seguridad. Las FARC no se han acabado, pero demostró que si es posible pelearles sin que les quedemos debiendo. El presidente Uribe lleva casi ocho viajando por el país. El colombiano estaba acostumbrado a que los candidatos iban de vez en cuando a un pueblo alejado y nunca más volvían. Uribe se le acerca a la gente y tiene el programa Familias en Acción que le ayuda. César Gaviria decía que ese era el chequecito para hacer campaña. Yo no me meto en esas honduras, pero sostengo que Uribe es una persona muy cercana a la gente. En Colombia había mucha desesperanza, mucha desilusión, la gente no podía ir a una finca a quince minutos de la ciudad.

¿Qué significa Chávez?

Chávez es primero un caudillo, después es un loco inteligente, pero en su afán de copar no solo a Venezuela sino a toda América Latina y creerse salvador de la humanidad, ha hecho cosas que no son apropiadas para un Presidente. Por eso vienen todos esos cuentos de las FARC y ha logrado poner de su lado, a punta de petróleo, a varios países que hacen eco a sus políticas. Por ejemplo, Rafael Correa es un discípulo del presidente Chávez. Habrá que esperar a ver qué pasa allá porque Correa no tiene petróleo. Rafael Correa tiene que saber que Colombia y Ecuador se necesitan. Colombia tendrá que acostumbrarse a que exista el presidente Chávez y buscar otros mercados y hacer otras cosas porque no se puede permitir el chantaje de que nos corten los negocios.

¿Y las bases militares norteamericanas en Colombia, no fue desafortunado?

En lo personal estoy de acuerdo. La posición de Colombia en materia de seguridad es muy distinta a los demás países de América Latina. Si no nos ayuda el que puede, ¿quién nos va a ayudar? ¿Chávez? ¿Nos va a ayudar Correa o Evo Morales? No podemos ponernos en una posición anti yanqui porque sí. ¿Quién dice algo de Brasil que hizo un contrato millonario de cooperación militar con Francia y van a

hacer submarinos y cosas nucleares y una cantidad de cosas? Ahí si no se enoja Chávez ni Correa sale bravo.

¿Cómo ve el manejo que le ha dado Uribe a las relaciones internacionales?

En Europa, de alguna manera estamos desaparecidos. Al único al que supuestamente le importamos es a Estados Unidos y resulta que no nos aprueba el TLC. En América Latina nos odian. Entonces creo que el balance es claro.

¿Cómo vio el planteamiento del Estado de opinión, fue válido para intentar un tercer mandato?

No, absolutamente no. Todo lo que sea para que el Presidente Uribe se quede no me parece válido

¿Por qué la pelea con la Corte Suprema de Justicia no ha sido lo suficientemente importante como para afectar la gobernabilidad del Presidente?

No creo que se trate de afectar la gobernabilidad o no, lo que creo es que ojalá eso se acabe y el gobierno respete las decisiones judiciales. Lo más importante que tiene un país y una democracia son sus instancias judiciales y sino respetamos las decisiones de la Corte estamos fregados.

¿El escándalo de la para política llegó a su fin?

No, los procesos de los congresistas están regresando a la luz, eso es un capítulo muy importante para la historia.

¿Qué significa Uribe comparativamente frente a los otros mandatarios que ha tenido el país?

No es bueno comparar. Uribe ha sido un buen Presidente. Quien diga que no es un muy mal crítico y no está siendo objetivo. Yo creo que todos tenemos algo que reconocerle al Presidente Uribe. Veníamos de unos gobiernos que habían dejado en vilo al país en materia económica, en materia de seguridad. ¿Cómo estábamos cuando llegó Uribe en materia de seguridad?, ¿cómo estábamos en materia económica? Seguramente algunas políticas del gobierno no han sido consistentes en materia social, pero también es cierto es que a pesar de la crisis económica, Colombia ha resistido.

“Desde el principio Uribe asumió una actitud en la que demostraba sus deseos de monopolizar el poder político en el país y ha actuado en consecuencia”

4.4 Entrevista Ignacio Gómez

Comunicador social y periodista. Fue director del equipo investigativo de El Espectador y Nieman Fellow de la Universidad de Harvard. Dirigió el especial periodístico “Los pecados de Chávez” que se emitió en 17 países. Recibió el Premio Mundial a la libertad de prensa, cuatro veces el premio nacional de periodismo Simón Bolívar, dos veces el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB). En septiembre de 2009 recibió junto al equipo de Noticias Uno el premio a mejor trabajo en televisión, el cual entrega la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Sub director de Noticias Uno y miembro del consorcio Internacional de Periodismo Investigativo. Director de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, consejero del Instituto de prensa y sociedad Ipys y del comité de protección a los periodistas CPJ con sede en New York.

¿Cómo ve el manejo que Uribe le ha dado a la oposición política?

Creo que desde el principio Uribe asumió una actitud en la que demostraba sus deseos de monopolizar el poder político en el país y ha actuado en consecuencia. Por eso, el manejo que ha recibido no sólo la oposición política sino sus críticos, especialmente en los medios de comunicación, ha sido de eliminación de sus contradictores. Por ejemplo, él busca que Piedad Córdoba y Hollman Morris estén en la cárcel. Lo ha buscado durante mucho tiempo infructuosamente y no ha podido documentar ninguna de sus acusaciones. En ese mismo sentido, periodistas como Daniel Coronel, Alfredo Molano y otros, han recibido ataques directos del gobierno. Ni siquiera ha hecho diferencias con los medios internacionales. Ese es su estilo caudillista. Nunca antes habíamos visto una racha de ataques a periodistas como hemos visto en los tiempos de la seguridad democrática.

¿Cómo ha sido el manejo que le ha dado a la libertad de expresión?

El Presidente trata de plantear la discusión sobre la libertad de expresión en cifras, es decir que haya

menos periodistas muertos. Juan González, un periodista del New York Daily News y líder del sindicato de periodistas hispanos en Estados Unidos, plantea que el hecho de que no haya periodistas muertos no necesariamente significa reducción de la violencia. Por el contrario, la violencia contra los periodistas ha aumentado y durante el uribato se han producido asesinatos de periodistas. Sería absurdo que no se redujera el número de periodistas muertos cuando el nivel de periodistas trabajando se ha reducido desde que comenzó el gobierno del Presidente Uribe. Por fuera de Bogotá ni se diga. Hay decenas, por no decir centenares de estaciones comunitarias y locales que se han cerrado y la crisis en materia de diversidad de medios de comunicación en Colombia es gravísima. Además de eso se han comenzado a presentar graves obstáculos al acceso a la información. Para la muestra está el caso de la resolución que le otorga una zona franca a los hijos del Presidente. No es una resolución pública, no está publicada en el Diario Oficial y acceder a ella no es fácil como la ley lo determina. En conclusión, existe un factor de miedo en el ejercicio del periodismo y la autocensura es mayor, así el Presidente considere que por el hecho de haber menos muertos haya más libertad de expresión.

¿Cómo ve la adjudicación del tercer canal?

Con el mismo comportamiento caudillista. A pesar de que la Constitución creó la Comisión Nacional de Televisión como un órgano independiente y dentro del balance de poderes le dio al Presidente la posibilidad de poner dos de los comisionados, el Presidente terminó poniéndola toda. Por eso la Comisión perdió su carácter de independiente y hoy es un ejecutor de las políticas del Presidente, con unos casos de corrupción gravísimos, todos asociados a candidatos de la llamada coalición uribista. Hoy vemos fraudes y desfalcos, como no se veía cuando era plural la integración de la Comisión. Por otro lado, me parece desafiante crear un nuevo canal de televisión en medio de un proceso electoral con tantos cuestionamientos.

¿Por qué a pesar de escándalos como el DAS, las interceptaciones ilegales o los falsos positivos, Uribe sigue manejando tan alta favorabilidad ante la opinión pública?

Lo atribuyo a los problemas de libertad de expresión y de estrechez en la participación. El periodismo perdió criterio, perdió capacidad para cuestionar al Ejecutivo y eso impide que puedan salir escándalos más grandes. Yo creo que el asunto fundamental es que el Presidente está manejando a los medios de comunicación como un monopolio.

¿El planteamiento del Estado de Opinión era válido para un tercer mandato?

Yo no entiendo el Estado de Opinión y creo que el Presidente no lo ha explicado. Tampoco creo que ninguno de sus seguidores haya podido tener claridad para poderlo explicar. Es un planteamiento ambiguo que le quita transparencia a una reforma democrática. Además, si ustedes miran el contexto en que nos movemos, basta mirar el libro Sofismas del Terrorismo de José Obdulio Gaviria, donde refleja sus actitudes frente a la prensa, o su cercanía frente a RCN, Caracol, el grupo Prisa o el grupo Planeta, para entender porque el Presidente tiene el interés de controlar la opinión. De manera que, cualquier sea la definición del Estado de Opinión, no deja de ser un intento anti democrático.

¿Por qué la pelea con la Corte Suprema de Justicia no ha sido lo suficientemente importante como para afectar la gobernabilidad de Uribe?

No creo que haya habido pelea con la Corte Suprema de Justicia, creo que lo que existe es una serie de agresiones del Presidente contra la Corte Suprema de Justicia por una cuestión de formación y concepto político. Tengo entendido que él estudió Derecho en la Universidad de Antioquia. Y presumo que en esa facultad se debe enseñar que la Suprema es la Corte, no el representante del Poder Ejecutivo. En términos judiciales, la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el Presidente ha estado permanentemente no solo tratando de cambiar la ley sino de reformar la constitución. Nunca en una Presidencia había habido tantas reformas constitucionales de tan dudosa procedencia. Pero tampoco, con la excepción del ataque al Palacio de Justicia por parte del M-19, ha existido un irrespeto tan grande a la Corte Suprema de Justicia, al punto de espiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su vida íntima. Eso es inconcebible.

¿El escándalo de la parapolítica llegó a su fin?

Yo creo que el escándalo de la parapolítica no ha terminado. Apenas está comenzando con la Corte admitiendo como jurisprudencia que se trata de un crimen de lesa humanidad. Y tiene razón porque en cualquier lógica es claro que no está bien decapitar personas para que voten por determinados políticos y mucho menos que esos políticos puedan conservar su poder electora. Más del 40% del Congreso está elegido con votos para los cuales se decapitó o se amenazó gente y se hicieron fosas comunes y se hicieron tratos con narcotraficantes y se violaron mujeres y se mataron niños. Hay una serie de crímenes detrás de los votos. Nunca en la historia colombiana había existido un Congreso tan ilegítimo como este. Por eso pienso que una pena de tres años de prisión domiciliaria para una persona que decapitó personas para hacerse elegir, pues es una vaina exigua que no satisface los estándares internacionales. Si la Corte Suprema de Justicia no hubiera asumido la actitud de declarar los crímenes de lesa humanidad, tarde o temprano eso hubiera llegado a la Corte Penal Internacional. Es muchísimo mejor que el Estado, es decir el Poder Judicial asuma el juzgamiento de esas conductas en toda su dimensión, es decir cobrándole los muertos, las amenazas o el desplazamiento a esos senadores, representantes, concejales, alcaldes, gobernadores y demás funcionarios que se lucraron de las violaciones de derechos humanos.

¿Qué significa Uribe comparativamente frente a otros mandatarios?

Tiene más similitudes que diferencias con el resto de mandatarios que llaman el movimiento de los neos populistas. No hay mayores diferencias ni en su modo de actuar, ni en su modo de pensar, entre Uribe y Chávez. Ni entre Uribe y Evo Morales, o entre Hugo Chávez, Álvaro Uribe y Rafael Correa, inclusive con los Kirchner, Lula Da Silva o Manuel Zelaya. Es el Estado de Opinión para reelegirse. Son modelos populistas que se repiten y que, valga la pena decirlo, amenazan la democracia en América Latina. Todos en su conjunto e individualmente cada uno en su país.

¿Cómo ha manejado Uribe las relaciones internacionales?

El comportamiento político en general del presidente Uribe ha sido gobernar con una cámara de televisión y ahí está el problema de la libertad de expresión. La solución a la crisis con Ecuador, el famoso saludo en República Dominicana, la pelea con Correa, la pelea con Chávez, todo se vuelve mediático. Y en la estructura política de nuestros países, eso estaba hecho para que se manejara a nivel diplomático. Ahora se maneja con la menor diplomacia posible, buscando reacciones mediáticas. Es ridículo pensar que Colombia pueda reemplazar como comprador a Venezuela por cualquier otro país. Mientras que Venezuela si puede conseguir cualquier otra mercancía colombiana en cualquier otra parte. Y lo mismo Ecuador. Ese complejo de superioridad, que es parte del discurso caudillista de Álvaro Uribe, es una mentira. Colombia no es un país superior a ninguno en América Latina. Desconocer los avances en la educación o la salud en Cuba, o los cambios que han tenido Venezuela y Ecuador en materia de la distribución de la riqueza es inútil. Hay movimientos que se dan en los medios de comunicación para mejorar la imagen del presidente Uribe, pero la realidad es que la situación tanto en materia de relaciones diplomáticas como en materia de desarrollo económico, no es buena.

¿Cómo es la relación prensa poder en Colombia?

Todo ha cambiado y tiene que ser evaluado sobre una nueva perspectiva. Antes de Chávez, Uribe, Correa o Evo Morales, los gobiernos no privilegiaban el asunto de la imagen. Ahora, con espacios como Aló Presidente, consejos comunitarios o El Presidente contesta, se crean espacios para relacionarse con la prensa y administrar su discurso. Ellos piensan es que los medios de comunicación tienen que ser vehículos de promoción de la política de seguridad democrática y esa actitud de asignarle a los medios papeles de defensa a una política específica solo parecen fascismo o comunismo. Eso se llama propaganda y forzar a la prensa a que cumpla agendas es una forma de censura.

“Uribe es un animal político, el no llegó por casualidad a la presidencia.”

4.5 Entrevista Hugo García

Comunicador social y periodista de la Universidad del Valle. Reportero del noticiero de televisión del Canal Telepacífico en Cali, periodista del área económica de Radiosucesos RCN- Cali.

En 1998 entró al periódico El Espectador inicialmente en la sección de deportes y luego en Educación y Tecnología. Desde 2004 se desempeña en el área de Política, primero como redactor y actualmente editor encargado de la misma sección.

¿Cómo ve el manejo que Uribe le ha dado a la oposición política?

Uno oye a Uribe decir que este gobierno no hace trampas, que este gobierno es conciliador, que este gobierno dialoga y eso para mí no es verdad porque en más de una salida, por ejemplo, se le oyen decir términos como “guerrilleros vestidos de civil” refiriéndose a senadores como Gustavo Petro u otros senadores del Polo Democrático. O siempre colocando el espejo retrovisor para descalificar con desagrado al ex presidente Gaviria o sus más cercanos colaboradores, recordando hechos como el de La Catedral o la rendición de Pablo Escobar. Yo creo que el gobierno Uribe frente a quienes no comparten sus posturas y sus planteamientos ha utilizado términos de guerra. Les ha dado duro, ha querido acabarlos. El Presidente Uribe siempre ha tenido una postura en contra de los partidos y creo que nunca ha sido liberal, es más bien conservador radical.

¿Considera que le ha dado tratamiento correcto al ejercicio de la libertad de expresión?

Él dice que no censura, que aquí hay libertad, que aquí la oposición tiene todas las libertades para pronunciarse, que los columnistas de oposición tienen toda la libertad para decir lo que quieren decir, pero también ve señales preocupantes. Yo no sé hasta qué punto se pueda hablar de libertad de expresión cuando el asesor José Obdulio Gaviria escribe una columna diciendo de que todos los que escriban en contra del Presidente son un poco de ignorantes que se la pasan tomando whisky y rascándose la barriga. Y uno ve amenazas. Daniel Coronel escribe pero está amenazado. Entonces, si la

libertad de expresión es escribir lo que uno quiera, por qué hay amenazas contra Antonio Caballero, contra Ramiro Bejarano, contra Alfredo Molano.

¿Qué tanto ha disminuido las amenazas y asesinatos a periodistas en el gobierno de Uribe?

Hasta donde yo sé, Colombia está entre los tres países en el mundo donde es más peligroso el periodismo. Ese es el otro juego, el de las estadísticas. Uno oye decir al gobierno, al Presidente, que se han disminuido los asesinatos de sindicalistas y periodistas, y yo veo en la calle más violencia, más miedo, más delincuencia, entonces empieza el juego de las cifras. Por eso el Director del DANE renunció. Lo estaban presionando por haber dicho que la criminalidad estaba bien montada en el país.

¿Por qué a pesar de escándalos como el DAS, las interceptaciones ilegales, los falsos positivos, Uribe sigue manejando tanta favorabilidad ante la opinión pública?

Es un manejo mediático excelente que le han dado desde la Casa de Nariño. Lo empezó nuestro actual canciller Jaime Bermúdez, que lo ha hecho muy mal en la Cancillería porque él es especialista en generar golpes de opinión. Sale un escándalo contra el Presidente e inmediatamente la Casa de Nariño lo tapa con cortinas de humo. Por ejemplo, con el manejo de las cifras. Siempre que el Presidente habla son cifras y uno nunca sabe si eso es verdad o es mentira. Desde este punto de vista, han sido unos genios en el manejo mediático. Y obviamente, con defensores gratuitos en los medios en un país hipócrita, porque si alguien habla mal del país, salen a decir que no es verdad.

¿Era válido el planteamiento del Estado de Opinión para un tercer mandato?

Ese Estado de Opinión era un cuento que se inventaron José Obdulio Gaviria y Rodrigo Rivera para justificar ese fallido tercer mandato. Hablando del chavismo, de Correa, de que iban a meterse aquí, un cuento para justificar el Estado de Opinión. El Estado de Opinión no existe, lo único que se reconoce es el Estado de Derecho. El Estado de opinión es puro cuento. Lo mismo que el referendo. Nos vendieron

el cuento de que cinco millones lo habían apoyado. Mentira. Las firmas fueron tres millones novecientos. Todo es manejo mediático y el Estado de Opinión es eso. El problema es que posiblemente nosotros, los periodistas, si nos damos cuenta de eso, pero la gran mayoría del pueblo colombiano cree que la realidad es la que oye en Caracol, RCN o lo que dice Julio Sánchez Cristo en La W.

¿Por qué la pelea con la Corte Suprema de Justicia no ha sido lo suficientemente importante como para afectar la gobernabilidad de Uribe?

Porque ahí es donde entra el cuento del manejo de medios para crear en torno a la Corte una imagen negativa, de que está haciendo oposición, de que está haciendo la guerra, de que no quiere dejar que el Presidente Uribe le haga el bien al país. No se ha afectado la gobernabilidad frente a la opinión y frente a las cifras que ellos dicen, pero yo sí creo que la Corte Suprema le ha dado balance. Si bien uno a veces uno no comparte algunas decisiones de la Corte y me parece que a veces están equivocados, me parece que la Corte si ha logrado ponerle cierto freno a uno que otro abuso que el gobierno del Presidente Uribe ha querido implantar o imponer.

¿El escándalo de la para política llegó a su fin?

No, el escándalo de la para política va a llegar a su fin el día que se destape cuáles fueron los empresarios que financiaron a los paramilitares, el día que se destape totalmente quiénes fueron los militares y la gente que desde los altos cargos del poder público también los apoyaron. Los políticos involucrados son apenas el primer eslabón. Volvemos al mismo cuento de la hipocresía. Aquí todos dicen que dejemos ahí. Extraditamos a los jefes paramilitares que se llevaron toda la verdad, pero todos sabemos que aquí hay grandes empresarios que apoyaron eso. El día que se destape eso se acaba el escándalo de la para política.

¿Qué significa Uribe comparativamente frente a otros mandatarios?

Como se dice en el argot político, Uribe es un animal político, el no llegó por casualidad a la Presidencia. Su proyecto era ser Presidente desde que estaba en el Senado en los años ochenta. Comparado con otros presidentes, el supo capitalizar la inconformidad que quedó en el país por el mal manejo que le dio Andrés Pastrana en su negociación con las FARC. Y ha seguido su línea de derecha, de mano fuerte, de mano dura, de ser intransigente y no ceder ni un minuto frente a la guerrilla, aunque ello implique el sacrificio de los que están secuestrados.

¿Cómo evalúa el manejo que Uribe le ha dado a las relaciones internacionales?

Frente a los vecinos, muy malo. Ese es el problema. Los ministros de Uribe son de muy bajo perfil porque él quiere hacer todo, quiere manejar la guerra, las relaciones internacionales, el comercio; y un Presidente tiene que delegar así se equivoquen. Los ministros en un gobierno son como fusibles que se queman, pero él se da a unas peleas insulsas por defenderlos. A nivel de relaciones internacionales aquí hemos tenido desde profesionales como Carolina Barco hasta golpes de opinión como meter a Fernando Araujo que acababa de volársele a las FARC. Uno ve hoy a Jaime Bermúdez y constata que así como es experto en temas de comunicaciones, de cancillería no sabe absolutamente nada. Yo creo que para manejar relaciones internacionales, necesitamos gente formada para eso. Por eso los resultados que tenemos con Venezuela y Ecuador, con una crisis que se está extendiendo a otros países de la región, porque Brasil en la última cumbre de Unasur ya comenzó a darnos la espalda; y Chile o Argentina lo mismo. El único respaldo claro que tenemos es Perú con Alan García. Incluso las relaciones frente a Obama y Estados Unidos también comenzaron a cambiar a raíz de la salida de Bush. Pero aquí parece que no hemos entendido que las cosas comenzaron a cambiar y seguimos metidos en lo mismo.

¿Está de acuerdo con la presencia de bases militares en Colombia?

Esa es otra discusión. Aquí siempre han estado los gringos. Otra hipocresía. Aquí hay asesores gringos militares desde hace rato. El Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar era con el apoyo de Estados

Unidos. Siempre han estado y en cambio aquí no nos han explicado, ni nosotros sabemos en qué consiste ni cuáles son los verdaderos alcances de ese acuerdo.

¿Cómo es la relación prensa poder en Colombia?

Uno sabe que aquí en Colombia hay medios que son pro Uribe porque están en el gobierno. Hablo directamente de El Tiempo. Aquí los medios pertenecen a grupos económicos o grupos políticos. Yo nunca me he sentido presionado o censurado, pero por cualquier publicación se arma problema.

“No hay cancillería porque Uribe tiene la manía de meterse en todo”

4.6 Entrevista Gerardo Aristizábal González

Comunicador social, periodista y docente. Tiene una trayectoria de más de diez años cubriendo el sector político y el conflicto colombiano. Se desempeñaba como editor político de la Revista Cambio y luego de su cierre se retiró para hacer parte del equipo de prensa de la campaña presidencial del candidato del partido liberal Rafael Pardo; ahí es el encargado de la redacción de comunicados y el monitoreo de medios.

¿Cómo ve el manejo que el gobierno Uribe le ha dado a la oposición política?

Un manejo de polarización y de confrontación, donde el Presidente utiliza muy bien esa frase que dice que él que no está conmigo está contra mí. Cuando no puede con la oposición a través de prebendas, la insulta, la maltrata, porque sabe que eso le da réditos. Siempre con el espejo retrovisor recordando, por ejemplo, el tema del Palacio de Justicia para enfrentar a los dirigentes del Polo o estigmatizando a sus contradictores frente a la televisión porque eso le da beneficios en un país que sigue creyendo en la figura política del Presidente.

¿Cómo ve la oposición por parte de los medios, la crítica?

El periodismo critica a los poderosos y fiscaliza a los gobiernos. No hablamos del régimen venezolano, donde Chávez cierra canales y emisoras porque critican su accionar. Pero el presidente Uribe ha sido muy intolerante con los medios de comunicación. Cuando insultó, por ejemplo, al director de la revista Semana, Alejandro Santos, lo hizo porque sabía que eso le daba réditos. Por eso el Presidente no concede entrevistas a los medios escritos, porque no le gustan que lo editen. El presidente Uribe es crítico con la prensa y abiertamente hostil en ciertos episodios. Con Daniel Coronel, con Alejandro Santos o a través de José Obdulio Gaviria que le hace el trabajo sucio. Entonces, el gobierno es agresivo con quienes lo critican sin llegar a términos de abierta censura.

¿Considera que el Presidente le ha dado un tratamiento correcto al ejercicio de la libertad de expresión?

Una cosa es agredir a un periodista y criticarlo y decir usted es deshonesto y otra cosa es censurar lo que hace. Le pongo el ejemplo de Noticias Uno. Como el noticiero emite con frecuencia informaciones sobre los hijos del Presidente, mucha se satura y piensa que se la están montando a los pobres muchachos. El Presidente sabe leer eso y es hostil su reacción. No podría decir que hay censura en Colombia, pero las reacciones del Presidente son desmedidas.

¿Cómo ve todo el proceso que se le ha dado a la adjudicación del tercer canal y de las emisoras de FM?

Esa es una circunstancia que siempre va a pesar con intereses políticos y económicos. Mucha gente tilda a la revista Cambio de pertenecer a la casa editorial El Tiempo y hasta los colegas de El Tiempo dicen, al menos ustedes hacen crítica, porque existe el imaginario de que El Tiempo se porta muy condescendiente con el gobierno porque está en la licitación del tercer canal privado de televisión. Pero no critican a El Espectador que es del grupo Santo Domingo, que también tiene intereses. No critican a Caracol Radio que también tiene intereses. Es un fenómeno de directivos de medios de comunicación y de periodistas que se echan el agua sucia entre si y no ponen las cartas sobre la mesa. En el fondo todos sabemos que el gobierno maneja eso porque tiene como muñequar a la Comisión Nacional de Televisión. Los lectores o los televidentes no son tan bobos como uno cree. Lo que hace el Presidente es no tener intermediarios. La mayoría de emisoras son para una misión evangélica, 20 emisoras. El Presidente tiene el apoyo de los grupos cristianos evangélicos. Claudia Rodríguez de Castellanos fue Senadora de la República, fue embajadora en Brasil y Enrique Salas, Luis Felipe Barrios son congresistas que tienen iglesias. Todo tiene criterios políticos e intereses.

¿Por qué a pesar de escándalos como el DAS, los falsos positivos, la interceptaciones ilegales, Uribe sigue manejando tan alta favorabilidad ante la opinión pública?

Porque la población colombiana se educó en una cultura donde todo vale, donde lo que importa es el fin y no los medios. Entonces la gente perdona todo con tal de que se le pegue a las FARC. Además el Presidente, como es tan mediático, un comunicador excepcional, se comporta como un papá y ustedes lo ven regañando. En un consejo comunitario no es el jefe del gobierno, es oposición al gobierno. Cuando la gente se queja y dice “Presidente, es que no tenemos un puentecito”, entonces él regaña en vivo y en directo al Ministro porque no está el puente. La gente dice que es muy lindo y eso genera fervor. Pero si ustedes se dan cuenta, él no dice esta boca es mía en relación con los escándalos. Cuando nombró a un paramilitar como Jorge Noguera en el DAS, a Jorge Noguera, lo hizo porque era el jefe de campaña en el Magdalena. Pero la gente le tolera todo e incluso estuvo pensando en un tercer mandato.

¿Cómo ve el planteamiento del Estado de Opinión, era válido para un tercer mandato?

No lo comparto. Por el llamado Estado de Opinión, Adolfo Hitler tuvo el 92% de aceptación en la sociedad alemana y miren lo que hizo. Son repúblicas y naciones plebiscitarias, es decir, ponen a consideración del pueblo todo lo que el pueblo quiere. Si fuese un verdadero Estado de Opinión, el Presidente tendría que hacer el intercambio humanitario, o si no miren las encuestas. No todo lo que escogen las mayorías es bueno. Las mayorías requieren reglas de juego, que es lo que se llama institucionalidad, respeto por esas reglas del juego. Aquí en Colombia, por el fenómeno Uribe, es todo lo contrario: reglas inciertas para resultados ciertos.

¿Por qué la pelea con la Corte Suprema de Justicia no ha sido lo suficientemente importante como para afectar la gobernabilidad de Uribe?

Por lo mismo, porque cuando hay tanta crítica o digamos oposición, la gente se hace del lado del criticado. Aunque las personas creen que la Corte Suprema tiene razón porque ha mandado a la cárcel a unos hampones, mucha gente piensa que lo que hace es oposición al gobierno. En lo personal, estoy con la Corte Suprema de Justicia porque el gobierno la ha perseguido sin tregua. Hay que leer las columnas de José Obdulio Gaviria e interpretar a través de ellas el pensamiento del Presidente.

¿Usted cual cree que ha sido el momento más crítico del gobierno Uribe y su mejor momento?

El mejor momento para el Presidente fue la reelección y el más crítico los escándalos. Sobre todo ver la mayoría de su bancada en la cárcel. Un momento duro, la muerte en cautiverio a manos de las FARC, en un fallido operativo de rescate militar del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria y su consejero de paz Gilberto Echeverri. El Presidente toma acciones con cabeza caliente y termina causándose apremios. Por ejemplo, con los falsos positivos, sin pensarlo mucho echó a 27 generales y ¿cuántos hay procesados? ¿Por qué los echó? ¿Eran los responsables? Y qué decir de sus cortinas de humo cuando algo lo afecta. Pero volviendo a los mejores momentos, sin duda alguna que el más importante fue la reelección y después la Operación Jaque que demostró la posibilidad de golpear a las FARC. Y el momento más oscuro, los falsos positivos, las detenciones masivas, los errores y excesos de la política de seguridad.

¿Usted cree que el escándalo de la parapolítica llegó a su fin?

Al contrario, va creciendo como una bola de nieve. No creo que afecte al Presidente y que históricamente será evaluado desde una perspectiva distinta. No tengo ningún elemento para decir que Uribe fue paramilitar, pero si puedo decir que fue muy connivente y permisivo con ellos. Al menos promovió un proceso de paz hecho a su medida. No creo que Uribe se hubiera reunido con Salvatore Mancuso o Carlos Cataño para decirles ustedes votan por mí, pero era el candidato natural de ellos.

¿Qué significa Uribe comparativamente frente a otros mandatarios que ha tenido el país?

Uribe tiene una ventaja: le devolvió la confianza a Colombia después de un periodo de incertidumbre muy grande. La gente lo tiene todavía muy bien catalogado popularmente. Al menos así lo dicen las encuestas, pero el teflón del Presidente no es el teflón de su gobierno. Reiteradamente en las encuestas Uribe sale bien y el gobierno mal, lo cual es curioso porque él es el jefe de gobierno.

¿Cómo evalúa el manejo que el gobierno le ha dado a las relaciones internacionales?

Pésimo, no hay cancillería, terrible. No hay cancillería porque Uribe tiene la maña de meterse en todo. Colombia, en materia de relaciones internacionales, metió todos los huevos en la canasta de Estados Unidos que apoyó el Plan Colombia en tiempos de Pastrana. Pero se dejó aislar de una forma tal que hoy es visto de forma insular en el continente. Uribe es visto como un peón del imperio, como dice Chávez, y eso también lo creen otros presidentes porque la mayoría en Latinoamérica y Sur América los gobiernos son de izquierda.

¿Usted cómo cree que organismos como la SIP, la FLIP, entre otros ven la libertad de prensa en Colombia?

La ven mal por la hostilidad del gobierno. Hostilidad contra periodistas como Hollman Morris, William Parra, Daniel Coronel o Alejandro Santos. La ven mal porque como hacen defensa corporativa, esas organizaciones defienden a los periodistas porque sí. Entonces Colombia es medida con un riesgo para la libertad de prensa. Pero de ahí a que haya censura, es distinto. No se olvide que los medios son como perros guardianes, cuando ven algo anormal, ladran. La prensa no puede morder, solo ladra, dispara alertas, llama la atención sobre hechos.

¿Usted cree que la protección que le da el gobierno a los periodistas es válida, lo del esquema de protección que maneja el Ministerio del Interior?

Es difícil que funcione aunque me parece que para el Estado es una obligación garantizar la seguridad de las personas, independientemente de si son comunicadores o no. Pero no me imagino a periodistas con guardaespaldas, un periodista debe ser libre para hacer su labor.

Todos los gobiernos han tenidos escándalos, calentura política. ¿Porque ha sido este más trascendental?

Por una diferencia mayúscula. Es diferente que un narcotraficante mate a un periodista a que el gobierno cometa falsos positivos. Hay una diferencia grande entre que fracase el proceso de paz con las FARC a que hayan falsos positivos y chuzadas. El proceso 8000 es una bobada frente a lo que ha pasado en este gobierno. Sin embargo, a Samper no lo perdona la sociedad a Uribe sí. Con Samper fue la infiltración del cartel de Cali con conocimiento o sin conocimiento del candidato. El gobierno de Uribe conjuga masacres con políticos vinculados a ellas, funcionarios de los paramilitares en altos cargos, asesinatos a manos de la fuerza pública. Que siempre los ha habido, es cierto, pero no de forma sistemática como ahora. Miren el nivel de escándalos de este gobierno y lo grave es que la sociedad lo tolera y hasta lo respalda con votos.

NOTA: Esta entrevista se llevo a cabo antes del cierre de la Revista Cambio

“Se han presentado circunstancias dolorosas pero estoy seguro que no han sido promovidas por el presidente Uribe”

4.7 Entrevista Libardo Cardona Martínez

Comunicador social y periodista. Redactor deportivo de El Espectador en los años 1995 y 1996, redactor judicial de El Espectador desde 1997 al 2000. Editor judicial de El Espectador del 2000 al 2001 y luego desde el 2002 hasta el 2007. Subdirector judicial de El Tiempo durante el 2001 y el 2002. También fue Editor Judicial de la Revista Semana en 2007 y 2008. Actualmente es Corresponsal de The Associated Press (AP) cargo que desempeña desde julio de 2008.

¿Cómo ve el manejo que el gobierno Uribe le ha dado a la oposición política?

Ha sido muy complicado de parte y parte porqué la oposición en Colombia es dura, a diferencia de países como Venezuela donde no existe o los opositores son de quinta categoría. Colombia siempre ha tenido la ventaja para la democracia de que tiene una oposición fuerte y en ese sentido Uribe no la ha tenido fácil. Un personaje como el ex presidente Cesar Gaviria, o su colega Andrés Pastrana, son buenos ejemplos, Ahora, si uno se va hacia Cambio Radical encuentra personajes brillantes como Gustavo Petro o Carlos Gaviria. Y súmele personas como Piedad Córdoba. Y creo de entrada que ha sido una oposición rodeada de garantías para ejercerla. Se han presentado circunstancias dolorosas pero estoy seguro que no han sido promovidas por el presidente Uribe, han sido abusos del DAS. Estoy hablando del tema del espionaje, llamado así a raíz del escándalo que provocó el periodista Ricardo Calderón de la revista Semana con sus publicaciones. Pero que quede claro: espionaje ha existido en todos los gobiernos, no sólo en el gobierno de Álvaro Uribe. También se promovió en el gobierno de Samper, en el de Gaviria. En ningún momento la Fiscalía ha dicho que hubo espionaje contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En conclusión, creo que la oposición en Colombia en el gobierno Uribe ha tenido todas las garantías, incluso se han pasado, a diferencia de otros países donde personajes como Rafael Correa, Hugo Chávez o Daniel Ortega, no dejan hacer oposición.

¿Pero el manejo como tal de dicha oposición, de todos los conflictos que se han visto en los medios de comunicación, cómo la califica?

Respecto a los medios opositores, aquí más que libertad de prensa existe libertinaje de prensa. Por ejemplo, a un caballero como Daniel Coronell se le va la mano en la oposición y no le pasa nada con sus comentarios. Lo digo con mucho respeto porque continuamente está haciendo columnas injuriosas para desacreditar al Presidente de la República, Creo que solo le he hecho falta meterse con doña Lina. Yo siento que lo de Daniel Coronel no es periodístico, es un problema personal con el Presidente porque éste le recordó en su primera campaña a la jefatura del Estado que su noticiero NTC lo había creado con plata de la mafia, lo cual es cierto. Lo fundó con dinero de Pastor Perafan y César Villegas, ambos procesados por narcotráfico o lavado de activos. En cambio veo medios de comunicación serios como El Espectador. Otros dicen estar en la oposición como la revista Semana, pero cabe recordar que el señor Alejandro Santos, su director, tuvo un problema con el presidente Uribe en Semana Santa del año 2006. Uribe lo irrespetó tratándolo de niño chiquito y de hacer periodismo de muñequero. A partir de ese día la revista Semana se volvió oposición, pero en el fondo Alejandro Santos no está en la oposición pues toda la vida ha pertenecido al establecimiento. Es un opositor de pacotilla, por decirlo de alguna manera, es un opositor de mentiras. En cuanto a medios como RCN y CARACOL, siempre han sido gobiernistas, hacen un periodismo normal, de información y punto. En cuanto a El Tiempo, después de que se lo tomó el grupo Planeta ha cambiado mucho su postura. Ahora pertenece a un grupo empresarial que busca plata más que fines profesionales o periodísticos. Sobre la revista CAMBIO, cuyo director es Rodrigo Pardo, un excelente tipo, informa quedando bien con todo el mundo, por eso parece de oposición aunque en el fondo no lo es. En síntesis, yo creo que la prensa en Colombia siempre ha tenido garantías, tanto para hacer periodismo como para írsele la mano e incurrir continuamente en la injuria. Aquí, más que censura de prensa lo que existe es autocensura.

¿Entonces cuál es el manejo que le da el presidente Uribe a esa libertad de expresión?

Uribe se queda callado ante mucha cosa que se dice, pero más de una vez ha cometido el error de salir a frentear a sus contradictores. Por ejemplo lo hizo una vez en la FM Radio con el periodista Daniel Coronel y eso fue un error porque expuso su dignidad de Presidente. Se le fue la mano con Daniel

Coronel y él, que es un hombre inteligente y capaz, lo supo aprovechar en su favor. Eso fue una pelea de gallos, muy sabrosa por cierto, pero el Presidente se equivocó porque no se debió haber prestado para debatir en ese escenario. Yo repito, aquí hay columnistas y periodistas que dan pena. Cada ocho días, por ejemplo, Felipe Zuleta en El Espectador arranca sus notas diciendo “el jefe del cartel de Medellín Álvaro Uribe Vélez”, “El mafioso Álvaro Uribe Vélez”. Si eso no es libertad de prensa para personas que opinan de esa manera y no les pasa nada, entonces qué es libertad de prensa. Se dice lo que se quiere y no hay censura. Pero insisto, no es un asunto del gobierno Uribe, en el gobierno de Pastrana fue lo mismo. Y qué decir del de Samper. Eso fue un candelero bravo, escándalo tras escándalo y Samper quieto. Su criterio fue que se publicara lo que quisieran. Y ahora es igual. Por ejemplo, con el columnista Ramiro Bejarano la cosa ya es casi esquizofrénica. Hace algunas semanas publicó una columna titulada “Yo acuso” diciendo que desde la Casa de Nariño y desde la Procuraduría se estaba urdiendo un montaje para vincularlo al proceso por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Una locura. Y lo hace cada ocho días y no pasa nada. Y después se dice que en Colombia hay una dictadura, que aquí no se puede hablar. Puede que me tachen de periodista uribista, y si así lo fuera no estaría en AP. Pero les pregunto: ¿Ustedes creen que en un país donde no haya libertades podrían hacer esta entrevista?

¿Por qué a pesar de escándalos como el del DAS, los falsos positivos o las interceptaciones ilegales, Uribe sigue manejando tan alta favorabilidad ante la opinión pública?

En este país manejamos una moral muy laxa. Yo acabo de llegar de Antioquia y por allá no interesan esos escándalos contra Uribe, eso lo manejamos la gente de los medios de comunicación, la sociedad bogotana. Yo vengo de Sonsón, mi pueblo, y usted allá menciona el tema de los escándalos que le han hecho a Uribe y la gente le dice que eso es persecución de la oposición. Sobre el tema de los falsos positivos que es un asunto vergonzoso, estoy seguro que el Presidente no mandó a dar esas órdenes. Quizás se dio en un contexto de mano dura, pero en cabeza de quién va a caber que el Presidente ordene matar gente para hacerla pasar por guerrillera. Si Gustavo Petro fuera el Presidente tampoco lo haría para hacer pasar a sus víctimas por paramilitares. Ni Piedad Córdoba ni Sergio Fajardo, el que ustedes quieran de los líderes colombianos mandaría a tomar una decisión de esa naturaleza. ¿Saben ustedes cuál es el trasfondo del tema de los falsos positivos? El narcotráfico. Ese cuento de que al

soldado Piraquive le daban una semana de descanso si hacía un falso positivo, eso es mentira. Tiene uno que estar muy loco para decir voy a matar a alguien para irme a descansar una semana. ¿Saben ustedes cuál ha sido el punto coincidente de los llamados falsos positivos? Todos ocurrieron en corredores de la droga en Ocaña (Norte de Santander). Lo que buscaban los bandidos, entre ellos algunos militares, era perfeccionar negocios de droga.

¿Cómo ve el planteamiento del Estado de Opinión, fue válido para que el Presidente lo utilizara para buscar un tercer mandato?

Antes de pasar al Estado de Opinión quiero recalcar en una evidencia: ¿conocen ustedes un país donde se pueda hablar más libremente que en Colombia? ¿Conocen un país donde se maltrate más la figura del Presidente que en Colombia? Nunca estuve de acuerdo con un tercer mandato de Uribe, pero tengo la convicción de que Uribe quiere hacer bien las cosas y la oposición sería peor que Uribe. En 40 años, a las FARC nadie los había tocado, el gobierno de Uribe lo hizo y eso a los mamertos les duele. Desafortunadamente Uribe es una figura demasiado desgastada y hay gente que dice que podría terminar como Fujimori. Dolorosamente es factible por la presión internacional, porque en Europa no sé qué les pasa a los mamertos que les hacen eco a los de acá. Yo sé que contra Uribe están avanzando procesos por lo de los falsos positivos y si eso fue con un segundo periodo, ¿cómo hubiera un tercero?

¿Por qué la pelea con la corte suprema de justicia no ha sido lo suficientemente importante para afectar la gobernabilidad de Uribe?

La Corte Suprema de Justicia ha hecho mucho daño y no ha podido tumbar al Presidente. Se ha convertido en un partido político con personajes extraños como Yesid Ramírez o tipos que dan risa como el ex presidente Augusto Ibáñez, un político fracasado que se presentó a las elecciones legislativas de marzo de 2006 por Cambio Radical y sacó 2.308 votos. Una votación que no alcanza ni para ser concejal de pueblo. En la Corte Suprema hoy existe un grupo de amigos del mafioso italiano Giorgio Sale y de Asencio Reyes, tramitador de procesos. ¿Por qué pelean el gobierno y la Corte Suprema? Por dos cosas: cuando Uribe fue reelecto el Presidente de la Corte era Yesid Ramírez que le

había recibido un reloj a un mafioso e hizo público un comentario diciendo que en el tema de la tutela, el presidente Uribe se había ido del lado de la Corte Constitucional. Pero realmente la Corte Suprema de Justicia miente. Yo soy de Sonsón (Antioquia) y quién en mi región no sabe que los paramilitares existían en Colombia desde mucho tiempo atrás. Ahora salen los magistrados a decir que nacieron en los años 80. La verdad es que durante muchos años era de público conocimiento que los paramilitares eran socios de muchos políticos. Dicen que Uribe negoció con los paramilitares porque eran sus amigos y que extraditó a los jefes paramilitares para callarlos. Es decir, la contradicción sobre la contradicción.

¿Usted cree que el escándalo de la para política llegó a su fin?

No, la Corte Suprema de Justicia no va a parar, pero como está haciendo política no se mete, por ejemplo, con la farcpolítica. ¿Quién no sabe que Piedad Córdoba tiene nexos bastante cuestionables con la guerrilla? Pero con ella no se meten, en cambio con el cuento de los para políticos, sale cualquier rata de alcantarilla a decir que a tal o cual senador lo vio en los campamentos, y hay mismo le creen. En cambio, cuando los ex guerrilleros hacen lo mismo no pasa nada.

¿Qué significa Uribe comparativamente frente a los otros mandatarios?

Para bien o para mal, de Álvaro Uribe se va a hablar en muchos años. El último presidente reelecto en Colombia, en 1942, fue López Pumarejo, es decir hace 64 años. Yo creo que Uribe deja un punto muy alto en la historia. Hoy, por Andrés Pastrana no votaría ni su esposa ni sus hijos. ¿Pero quiénes han sido los grandes presidentes de Colombia? La gente habla muy bien de Alberto Lleras y Carlos Lleras, pero en esa época, tanto El Espectador como El Tiempo eran los referentes y los directores de los medios se mantenían en la Casa de Nariño. Hoy pienso, ¿hasta qué punto fueron tan buenos Presidentes? Es como la historia de Alfonso López Michelsen, siempre amigo de narcotraficantes pero la historia lo vive limpiando. Claro que se seguirá hablando de él como un gran Presidente.

Pero en otros mandatos no se habían visto tantos pleitos con Venezuela y Ecuador y a Uribe parece no importarle.

Claro que le ha importado, lo que pasa es que con el ataque al campamento de Raúl Reyes en Ecuador ha cambiado la visión política. Pero cuando Uribe se posesiono el 7 de agosto de 2002 prometió mano dura contra la guerrilla y lo ha cumplido. El terrorista Raúl Reyes se blindaba en Ecuador, lo atacaron y se cometieron muchos errores. Ahí empezaron las relaciones duras con Chávez y Correa. Obviamente, con el tema de los secuestrados hay mucha hipocresía. ¿Ustedes están de acuerdo con intercambiar terroristas que activan carros bombas, que vuelan puentes, que son capaces de atentar contra el club El Nogat, por militares secuestrados? El tema de las relaciones internacionales ha tenido dificultades, pero el Presidente lo ha manejado bien porque ha dicho las cosas por su nombre.

“Ha puesto las relaciones internacionales al servicio del conflicto interno”

4.8 Entrevista Luz María Sierra Lopera

Comunicadora social y periodista. Ex jefe de redacción del periódico El Tiempo. Recibió una mención honorífica por su trabajo “Las fosas de los paras”, el cual se publicó en el año 2007. Actualmente se desempeña como editora general de la Revista Semana.

¿Cómo ve el manejo que Uribe le ha dado a la oposición política?

Creo que ha sido inteligente pero a veces demasiado agresivo, pareciera pasar los límites. Se lo permite su popularidad, pero en cierta medida, sobre todo con los representantes del Polo Democrático, ha sido bastante exagerado. Ha utilizado la fórmula de atacar a la oposición porque sabe que si ataca, él crece. Lo hace buscando réditos políticos porque finalmente sabe que son personas cuya popularidad no es tan alta y, enfrentados a la suya, los neutraliza, los deslegitima ante el público. La ecuación es la siguiente: el público adora al Presidente Uribe y le cree todo lo que dice. Si el presidente Uribe les dice que los otros son personas que no están haciendo las cosas bien por el país, entonces esas personas no tiene crédito ante la opinión. Entonces, digamos que Uribe gira de su chequera popularidad para legitimar a su enemigo. En Noticias Uno lo hizo con Daniel Coronel, a quien enfrentó públicamente e incluso con Alejandro Santos de la revista Semana cuando se publicó el primer escándalo del DAS. Llamaron a Alejandro, lo pusieron frente al Presidente, con una voz tan fuerte y poderosa para el electorado y la opinión pública. Entonces lo que pasó es que las otras opiniones perdieron piso, perdieron importancia.

¿El Presidente ha dado un tratamiento correcto al ejercicio de la libertad de expresión?

Si correcto es una calificación habría que preguntar cuáles son los síntomas de lo correcto. Una cosa es Irán, donde la libertad de expresión no funciona, o Venezuela que cierra a los medios opositores, pero otra cosa es el Presidente Uribe que no ha tomado esas medidas sino que algunos voceros, como José Obdulio Gaviria, descalifican a los medios, al punto de igualarlos con las FARC. ¿Es legítimo este proceder dentro de la democracia? Puede que sí, pero eso es aprovechamiento de poder. Lo que hace

José Obdulio Gaviria de calificar a algunos medios como émulos de las FARC, es denigrar de la libertad de expresión.

¿Por qué a pesar de escándalos como el DAS, las interceptaciones ilegales y los falsos positivos, Uribe sigue manejando tan alta favorabilidad?

Es la fuerza de su imagen que es muy poderosa.

¿Qué ha hecho para que su imagen sea tan fuerte?

Una serie de hechos. Su desempeño político, que entre comillas les haya ganado a las FARC o al menos las tenga en el punto en que hoy están, su imagen de persona responsable y honesta. Es decir, para un sector de la opinión, para quienes creen y votan por él, están convencidos de que el reúne muchas características de un mandatario honesto, trabajador, que da la vida por el país, que invierte todo su tiempo en el país, en fin todas esas cosas.

¿Cómo ve el planteamiento del estado de opinión, es válido en Colombia?

El estado de opinión, a estas alturas de la historia, es muy difícil de aceptar. No estoy de acuerdo con él y me parece que, desde el punto de vista de la democracia, acaba con ella en el sentido liberal del término, es decir, del equilibrio de poderes, de la prensa libre, del respeto a los derechos humanos. Si el estado de opinión es lo que la gente quiere, como ya otros lo han dicho, cualquiera que tenga dinero o poder puede hacer de un estado lo que desee, que es lo que ocurre en muchas partes del mundo, como en Rusia con Putin o en Italia con Berlusconi. Si esto no funciona en países que han crecido tanto, suena absurdo para un estado en formación como el nuestro. Lo que se está utilizando es un concepto para un debate políticamente incorrecto, quizás para un estado dictatorial. Hay mucha gente que quiere que el presidente Uribe se mantenga en cualquier estado de poder político, pero lo que hay que preguntar es el costo que eso significa para la democracia.

¿Por qué la pelea con la Corte Suprema de Justicia no ha afectado la gobernabilidad de Uribe?

No creo que no lo haya afectado. Los medios internacionales lo han mostrado. Yo creo que se va creando una opinión internacional que no acepta que el Presidente haya estado en esa confrontación con la Corte Suprema.

¿El escándalo de la para política llegó a su fin?

Depende de lo que se considere llegar al fin. En la Corte Suprema no ha llegado y todavía queda mucha tela por cortar. Y muchos congresistas seguirán perdiendo sus curules, pero probablemente no se va a afectar la manera como se hace política en el país. Hoy la política sigue siendo peor en términos de corrupción y clientelismo, como lo han demostrado recientes publicaciones e investigaciones. Todo puede pasar pero lamentablemente creo que la para política no sirvió para depurar las costumbres políticas.

¿Qué significa Uribe comparativamente frente a otros mandatarios que ha tenido Colombia?

La historia da vueltas y hay personajes que termina su gobierno muy bien y luego la historia se encarga de destapar cosas absurdas. O hay quienes terminan no muy bien y la historia se encarga de recompensarlos con creces. En el caso de Uribe yo pensaría que habrá que ver qué pasa con las FARC. Si las FARC se quiebran la historia recordará a Uribe como el hombre que les dio el golpe de gracia, pero si se logran rencauchar pues su legado será menos importante.

¿Logros que él ha tenido como la seguridad democrática no son aspectos que le ayudarían a volverse histórico?

Depende de si se consolida o no la seguridad democrática. Si los niveles de violencia resucitan, quedaría en duda la seguridad democrática. Además no sabemos qué va a pasar con Chávez y, con algún apoyo internacional, las FARC pueden volver a rencaucharse. El futurismo en este país es muy difícil de hacer. Lo que sí creo es que vamos a hacer historia como un caudillo que cambió un momento de la historia del país, que cambió la historia política al permitir la reelección inmediata y que hizo cosas importantes.

¿Cómo ha manejado las relaciones internacionales?

Ha puesto las relaciones internacionales al servicio del conflicto interno. Yo creo que para Uribe las relaciones exteriores apuntan a digerir lo doméstico con lo internacional. Con Venezuela el problema no es nuevo, lo que pasa es que las condiciones de América Latina han cambiado. Hay quienes piensan que se debe ser duro y hay quienes creen que debe ser amigable. No creo que el factor Uribe sea tan determinante, lo que es determinante es la guerra en Colombia, la decisión de Uribe de declarar la guerra y el factor Chávez, eso hace que las relaciones internacionales sean muy distintas ahora.

“Pienso que no juega limpio con la oposición trata de aniquilarla a como dé lugar”

4.9 Entrevista Jorge Alfredo Vargas

Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana con posgrado en periodismo económico. En 1987 inicio su carrera como redactor deportivo del Noticiero Criptón, donde años más tarde se desempeño como redactor general y económico. Luego, en 1991 fue nombrado Jefe de Redacción del noticiero QAP. En 1998 entró al Canal RCN como presentador de noticias; fue presentador durante seis años de eventos especiales. Luego paso a ser presentador de Caracol Noticias y conductor del programa político El radar. Adicionalmente, dirige Noticiero NP& con los reencauchados y el programa de José Gabriel del mismo canal.

¿Cómo ve el manejo que le da el gobierno de Uribe a la oposición política?

Me parece que Uribe es un animal político, es un maestro en el manejo político. El hecho, por ejemplo, de haber sacado a Andrés Felipe Arias casi como jefe de un partido tradicional o al ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo a la U, me parece que es un experto en jugadas maestras. Pero también pienso que no juega limpio con la oposición trata de aniquilarla a como dé lugar.

¿Con respecto a la crítica periodística, cómo es el manejo de Uribe?

Daniel Coronel, director de Noticias Uno, uno de los abanderados de los medios opositores en este país, me contó una vez que se había ganado un premio internacional en México y no pudo cobrarlo porque era en dólares y tocaba hacer la nacionalización o sino el gobierno les caía. Este es un ejemplo sobre lo que sucede con los medios opositores, que son muy pocos. Pero en términos generales en Colombia hay libertad de prensa. El propio Daniel Coronel escribe todas las semanas en la revista Semana lo que quiere y nadie le dice nada. Se mete incluso hasta con los hijos del Presidente. Lo mismo hace el señor Felipe Zuleta en El Espectador. Aquí en El Radar hemos dicho lo que hemos querido y nadie nos ha dicho nada. Digamos entonces que persecución no existe.

¿Entonces se puede decir que las amenazas y los asesinatos en estos dos periodos de Uribe han disminuido?

Si ahí están las cifras sigue siendo una profesión de riesgo pero si han bajado y lo dicen las cifras.

¿Cómo ve usted el proceso que se ha llevado con la adjudicación del tercer canal?

Fatal. La Comisión Nacional de Televisión es un ente creado por la Constitución de 1991 con independencia del Ejecutivo, pero cuando los dos canales reclamaron por el precio en el que estaban dando la adjudicación del tercer canal, el presidente Uribe entró y dijo: “vea, bájele a la plática”. El Presidente no tendría nada que ver pero los comisionados son nombrados por él o son de su cuota. Eso es fatal. Yo en lo personal creo que entre más canales y más posibilidades existan pues gana más el televidente, pero obviamente el negocio es otra cosa. Los comisionados contrataron dos o tres empresas auditoras para que estudiaran el tema y resulta que esas empresas trabajaban juntas y eran socias, eso es absurdo. Eso en cualquier parte del mundo debería dar por terminada la convocatoria para un canal de televisión. Pero hay muchos intereses de por medio.

¿Era conveniente un tercer mandato?

No. Ni de Uribe, ni de Lucho Garzón, ni de Gaviria, ni de nadie. No estoy de acuerdo con cambiar las reglas de juego y menos para beneficio personal. El poder es una delicia, pero nunca he estado de acuerdo con la reelección. Tiene que haber más gente que haga cosas rescatables.

¿Por qué a pesar de escándalos como el del DAS, los falsos positivos, las interceptaciones ilegales Uribe sigue teniendo tan alta favorabilidad?

Porque le devolvió la confianza y la esperanza al país. Es un señor que proyecta trabajo, un hombre serio y la gente lo ve trabajando. Tiene carisma y es innegable que es un tipo honesto y tiene carácter. Esas cosas a la gente le encantaron y hubo sintonía. Es original, es auténtico, se pone el sombrero y saluda a todo el mundo. Va a los consejos comunales y ofrece carreteras. Se ha rodeado mal muchas veces y no tiene ministros, es de una soberbia alta, pero es un líder y eso hace que la gente le justifique todo.

¿Usted cree que el planteamiento del Estado de Opinión era válido para que el Presidente buscara un tercer mandato?

No, el Estado de Opinión es una cosa abstracta. Es un asunto intangible. El poder se inventa unas cosas de dónde cogerse para confundir más a la gente. Eso es igual como cuando el escándalo de Samper y él salió a decir que iba a hacer una carretera por el Tapón del Darién. Pero la gente no es boba.

¿Por qué la pelea con la Corte Suprema de Justicia no ha sido lo suficientemente importante como para afectar la gobernabilidad de Uribe?

Porque se politizó. En lo de la definición de la Fiscalía, yo creo que el Presidente tiene razón. Él mandó una terna como lo dice la constitución. Obviamente son sus candidatos pero en ninguna parte dice que tienen que ser penalistas. Esas cosas se hacen conversadas, pero la gente no lo entiende. Lo único que importa a los ciudadanos es la seguridad. Se sabe que hay 20 millones de pobres, 12 millones en la indigencia, 2 millones y medio de desempleados, que las cifras no son alentadoras, pero el Presidente dice que Colombia está de moda, que siguen invirtiendo en nosotros, y la gente cree.

¿Cree que el escándalo de la parapolítica llegó a su fin?

No, pero el tema ya desgastó demasiado. El escándalo de la parapolítica es peor que el proceso 8.000 pero la gente no asume el asunto. El 40 % del Congreso filtrado y no ha pasado nada.

¿Qué significa Uribe comparativamente frente a otros presidentes?

Está sobrado en el tema mediático. La gente venía aburrída de ver a unos presidentes que no los veían trabajando. El país naufragaba en la ilegalidad, era inviable política y económicamente.

¿Cómo ve el manejo de las relaciones internacionales de Uribe?

Mal. Lo que pasa es que Uribe no tiene ministros fusibles sino ministros pararrayos.

¿Cómo es la relación prensa-poder en Colombia?

Bien, pero la veo cada vez más dura porque la prensa en general no está de acuerdo con lo que está pasando y el Presidente tampoco le come a la prensa.

Conclusiones

En este trabajo de grado se presentaron varios puntos importantes con respecto a la situación del periodismo en Colombia durante las dos administraciones del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Como primera medida, a manera de relato cronológico, se llevó a cabo una síntesis de los hechos más importantes que transcurrieron desde que Álvaro Uribe Vélez asumió el poder en agosto del año 2002. Sin tomar partido por cada situación, los hechos en sí mismos demuestran que se fue creando un ambiente de polarización que terminó involucrando a los medios de comunicación. En otras palabras, aunque con claras distinciones entre la faceta informativa y editorial, en términos generales los medios fueron tomaron partido a favor o en contra de las políticas del gobierno.

Esa evidencia se refleja parcialmente en el segundo capítulo de este trabajo de grado, donde periodistas de diferentes medios, a través de diversas posturas y puntos de vista, dejan ver posiciones antagónicas frente al mandato del presidente Uribe, y estas apreciaciones traducen sus opiniones sobre la labor periodística ejercida estos últimos ocho años. Los entrevistados fueron: Libardo Cardona de la agencia internacional AP Associated Press; José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial; Vicky Dávila, directora de La FM; Ignacio Gómez, de Noticias Uno; Rodrigo Pardo, ex director de la revista Cambio; Hugo García, editor político del periódico El Espectador; Gerardo Aristizabal, ex editor político de la revista Cambio; y Jorge Alfredo Vargas, periodista del canal Caracol.

Lo paradójico es que a pesar de que estos periodistas, representativos de sus medios de comunicación, discrepan abiertamente respecto a las políticas desplegadas por el primer mandatario, en su gran mayoría se mostraron en contra de una segunda reelección del Presidente Uribe, es decir, de que hubiese llegado a un tercer mandato. En ese orden de ideas, salvo algunas excepciones, no comparten la tesis del Estado de Opinión que, en un momento dado, fue el argumento que esgrimió el Ejecutivo para convencer a los ciudadanos de que el presidente Uribe debía seguir en el poder. Es decir, se

aprecia un consenso mediático en torno a que la continuidad del Jefe de Estado al frente el Ejecutivo se convirtió en el aspecto que finalmente terminó de polarizar a la sociedad colombiana, a dividirla entre defensores y detractores a ultranza de Uribe.

En el fondo, unos y otros periodistas concluyen que si bien las amenazas y los homicidios de comunicadores disminuyeron durante los últimos años, esa realidad no es el único indicativo para medir las relaciones entre el Ejecutivo y los medios de comunicación. Habitualmente ese ha sido el argumento oficial en cuanto foro sobre la libertad de prensa ha participado el gobierno. Como ha habido menos crímenes de periodistas, la conclusión es que ha mejorado su cobertura. Una realidad que, en criterio de los comunicadores, no corresponde a la verdad. Por el contrario, según ellos mismos, la autocensura sigue siendo el escenario más crítico que deben afrontar los periodistas. Cada quien en su fuero interno sabe cuáles son sus límites informativos, aquellos que les dicta su pertenencia a uno u otro grupo empresarial.

Esta circunstancia se ve reflejada en el tercer capítulo de este trabajo de grado. Las perspectivas del tercer canal privado de televisión en Colombia, sujetas a los negocios privados y mediáticos, evidencian cuál es realmente el panorama de libertad de expresión en Colombia. Los dos canales privados Caracol y RCN, propiedad de los más grandes grupos económicos, después de lograr la prórroga de sus contratos, llevan dos años interponiendo toda clase de trabas para que entre en operación el tercer canal. Este debía estar en el aire desde hace dos años, pero los canales privados saben que la competencia va a afectar sus multimillonarias utilidades. Por eso entre más logren que se retarde esa decisión, ellos serán los principales beneficiarios.

Sin embargo, del otro lado también están claros los intereses. Aunque hoy la oferta por el tercer canal está limitada al grupo Cisneros de Venezuela y a los grupos españoles Planeta y Prisa, con sus asociados colombianos, en la práctica es la pelea de otros colosos del periodismo y sus intereses

económicos. Cisneros es la expansión del grupo mediático más poderoso de Venezuela, que además ha tenido una relación conveniente con el gobierno de Hugo Chávez. El grupo Planeta representa los intereses de la familia Santos, hasta hace pocos años propietaria del periódico El Tiempo, que al mismo tiempo significa la ampliación de una plataforma informativa que incluye a City Tv, Tv y Novelas, Portafolio, Don Juan y demás publicaciones de la misma casa editorial. Lo anterior sin dejar de lado la presencia de la familia Santos en el poder político.

Así mismo, la propuesta de Prisa, propietaria de Caracol Radio, es también la de los periódicos regionales, que en su mayoría son representativos de las distintas casas políticas dominantes, y en noticiero de televisión CM&, que básicamente es la plataforma mediática del periodista Yamid Amat y algunos empresarios amigos. Es decir, de una u otra forma, los interesados en el tercer canal, cada quien ostenta una franja del poder mediático. Por eso ha sido tan compleja esta licitación, además afectada por una Comisión Nacional de Televisión cuya composición ha sido tan cuestionada como muchas de sus decisiones recientes. En pocas palabras, un ambiente totalmente afectado por los intereses económicos, sin que en el fondo preocupe la audiencia o el valor supremo de la libertad de expresión. Prevalece más bien la libertad de empresa.

En síntesis, aún no concluye la era Uribe pero ya pueden empezar a hacerse los primeros balances. Y uno de ellos, ineludible para los periodistas, es qué tanto se afectó la libertad de prensa y cuáles fueron los factores que afectaron las relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno. A manera de conclusión cabe decir que la polarización social también tuvo su capítulo mediático y que la libertad de prensa sigue sujeta a los mismos vaivenes: una oferta mediática restringida, altos intereses económicos en juego, presiones políticas para que las verdades surjan a medias y algunas voces independientes y aisladas que defienden derechos desde sus columnas de opinión. Es decir, periodistas más no medios, siguen llevando en parte la vocería de la opinión pública, pero en el fondo la estructura mediática del país sigue siendo muy limitada. Se dice que entre más medios más democracia, si se tiene en cuenta que en Colombia son realmente pocos, la conclusión o evidencia es innecesario repetirla. Los hechos lo demuestran.

Con respecto a los enemigos que la prensa y el periodismo en general tienen, debemos explicar que la lista es larga; estos son enemigos que no solo coartan la libertad de expresión e información sino que también influyen y afectan directamente los métodos de hacer periodismo, produciendo una homogenización de pensamientos en cuanto a objetivos políticos se refiere.

Es importante nombrar las múltiples empresas periodísticas que tienen visiones diferentes a lo ya establecido, esto se da ya sea por intereses económicos o por diferentes valores que los rigen. Es por eso que el ejercicio de la libertad de expresión queda relegado pocas posibilidades de acceso a la información que en últimas es la que permite o da pie para que se formen criterios y opiniones. Tenemos como resultado que la libertad de expresión, la cual es algo individual, está restringida por una libertad que se puede denominar empresarial en cuanto a medios se refiere. Por eso la regla es simple, en la medida que hay más libertad empresarial, se está más cerca del monopolio y por ende más lejos de los ejes sociales

Bibliografía

- CINEP, (2009) “Falsos positivos en Colombia”, {en línea}, disponible en: www.alboan.org/portal/seccion.asp, recuperado: 29 de octubre de 2009.
- “Intereses mediáticos y políticos coartan la libertad de los periodistas en Colombia”, (2009) [en línea], disponible en: <http://www.periodicoelsol.net/noticia.php?Id=4953>, recuperado: 20 de abril de 2010
- Ossa Escobar, C. *et al.*, (2005), “*Informe de auditoría a la Comisión Nacional de televisión*”, Bogotá, s.e.
- Orozco Tascón, C. (2010, 6 de febrero), “Cierre de la revista ‘Cambio’, golpe al periodismo de denuncia”, en *El Espectador, Online* [en línea], disponible en: <http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso186229-cierre-de-revista-cambio-gol>, recuperado: 30 de abril de 2010.
- Morales, M. (2010), “Las nuevas amenazas a la libertad de expresión”, [en línea], disponible en: <http://www.mariomorales.info/?q=node/2895>, recuperado: 8 de julio de 2010.

